
POR ENTRADO A MI DESPACHO CON ESTA FECHA.

Talca, a siete de febrero de dos mil diecinueve.

VISTO:

Que con fecha 10 de julio de 2017, comparece don REINALDO ALFONSO YÁÑEZ GONZÁLEZ, empleado, cédula nacional de identidad número 9.121.502-0, domiciliado en calle 4 Oriente N° 2125, casa N° 3, Talca, interponiendo demanda en juicio ordinario de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios en contra de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE, Rol Único Tributario Número 71.633.300-0, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, representada por don TEODORO JAVIER RIBERA NEUMANN, Abogado, cédula nacional de identidad Número 7.837.945-6, ambos domiciliados en Avenida Alemania Número 1090, comuna de Temuco y/o por don JUAN ELEUTERIO TOSSO TORRES, ignoro profesión u oficio, cédula nacional de identidad número 4.452.093-1, domiciliado en 5 y Medio Norte 1670, Talca; en razón de los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

I.-ANTECEDENTES DE HECHO.

A. Solicitud de ingreso a la Carrera de Derecho en la sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile.

Manifiesta que en el período comprendido entre el Primer Semestre del año 1987 y el Segundo Semestre del año 1995 cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, cumpliendo con toda la malla curricular exigida por dicha casa de estudios. En esa Universidad se le entregó un Certificado emitido y firmado por la entonces Vicedecana de la Facultad de Derecho, Sra. Julia Poblete Vinaixa, de fecha 14 de enero del año 2010, y el respectivo Certificado de Concentración de Notas de las asignaturas cursadas, de fecha 7 de enero del 2010, correspondiente a la totalidad de la malla curricular exigida por la Facultad de Derecho.



Con anterioridad, en el año 2002, se trasladó a la ciudad de Talca, especialmente por problemas de salud, ya que desde aproximadamente 28 años a la fecha es diabético, insulino-dependiente, lo que lo ha tenido numerosas veces internado en centros hospitalarios por problemas derivados de la enfermedad. En esta ciudad se encontraba su mujer, hijos, padres y hermanos, quienes le entregaron la ayuda y apoyo que necesitaba. Desde el año 2003 en adelante se dedicó a diversas labores de asesoría jurídica y otras relacionadas.

Con los antecedentes académicos señalados precedentemente, y luego de haber analizado las diversas ofertas académicas en esta ciudad, para continuar estudiando y conseguir el título de abogado, decidió acudir a la Universidad Autónoma, y en el mes de enero de 2010 solicitó a dicha Universidad se le permitiera someterse al proceso de Convalidación de Estudios vigente en ese momento por la Universidad.

B. Resolución N° 16/2010 de fecha 26 de febrero del año 2010.

Continúa su relato señalando que la Universidad Autónoma, luego de analizar sus antecedentes académicos y las cátedras que -de acuerdo a su criterio- correspondía convalidar, aceptó la solicitud de Convalidación de Estudios, por medio de Resolución de la Dirección Académica de la Sede Talca, que corresponde a la Resolución N° 16/2010 de fecha 26 de febrero del año 2010. En ella se determinan las cátedras que se convalidaron. Esta aceptación se fundó, según se indica en ella, en lo dispuesto en el Título VII del Reglamento General del Alumno, aprobado por Resolución de Rectoría N° 80/2006, de fecha 10 de abril de 2006, específicamente en los artículos 47, 48, 50 y 51 de dicho Reglamento.

En dichos artículos se establece, en la parte pertinente, que: “Artículo 47° : La Convalidación, la Homologación y los Exámenes de Conocimientos Relevantes son los únicos mecanismos mediante los cuales se podrá tener por cumplidas las exigencias académicas de una asignatura que no haya sido efectivamente cursada y aprobada por un alumno en la Universidad Autónoma de Chile en la correspondiente carrera que desea acceder. En base a estos mecanismos el alumno podrá solicitar reconocimiento de estudios a la Dirección de Carrera, quien decidirá sobre su procedencia.”



“Artículo 48° : Se entiende por convalidación de estudios la aceptación de equivalencia entre los contenidos temáticos de una o más asignaturas cursadas o aprobadas en otra institución de educación superior nacional o extranjera reconocida oficialmente y los de una asignatura contemplada en el plan de estudios de alguna carrera de esta Universidad. Se podrá convalidar hasta un máximo de un 60% de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios.” “Artículo 50° Se puede homologar o convalidar las asignaturas del Plan de Estudio de una Carrera o Programa, siempre que los contenidos temáticos de las asignaturas que se homologan o convalidan guarden entre sí un grado de equivalencia igual superior al 75%.

El estudio de equivalencia se efectuará sobre la base de los contenidos de la o las asignaturas aprobadas a la fecha en que se cursaron y los que corresponden en la actualidad a la asignatura o curso por el cual se desea convalidar u homologar el anteriormente realizado.

De no poder establecerse claramente esta correspondencia, la carrera podrá proponer al solicitante la rendición de un Examen de Conocimientos Relevantes, de carácter complementario, el que deberá abarcar los contenidos que se señalen. Se podrá solicitar la aplicación de estos mecanismos tanto en el proceso de admisión como durante la carrera o programa. En este último caso, los alumnos podrán hacerlo sólo por una vez.”

“Artículo 51° : Sólo se homologarán o convalidarán asignaturas aprobadas dentro de los diez años anteriores a la fecha de la solicitud de homologación. Este plazo no regirá respecto de los alumnos que acrediten experiencia laboral significativa en el área. Sólo podrán solicitar la convalidación u homologación de asignaturas los alumnos que hayan cursado en su carrera o programa de origen a lo menos un semestre o un año, según se trate de carreras o programas de régimen semestral o anual.”

Esta resolución aprobó su solicitud de convalidación de estudios, dado que, según concluyó la Universidad, cumplía con todos los presupuestos exigidos por el Reglamento General del Alumno. Para la acreditación de la circunstancia exigida en



el Art. 51, inciso 1° de dicho reglamento, respecto de la experiencia laboral significativa en el área, entregó a la Universidad los siguientes documentos: 1.

Certificado emitido por el Sr. Abogado y Juez de Policía Local de Pelarco, Sr. Luis Lozano Donaire, Cédula Nacional de Identidad Número 10.240.994-9, de fecha 28 de enero de 2010, que da cuenta o certifica la realización de actividad de orden relevante como habilitado en derecho; 2. Certificado emitido por el abogado Sr. Robert Morrison Munro, de fecha 7 de diciembre de 2009; 3. Certificado o constancia emitido por la Sra. Abogada María Inés Parra Sepúlveda, de fecha 11 de diciembre de 2009; 4. Certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que da cuenta del inicio de actividades en el área del derecho con fecha 1 de enero de 1993; 5. Copia autorizada de Escritura de Constitución de Sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial, Industrial y Agrícola Mariela S.A., en la cual se me consigna como socio; 6. Copia autorizada de Acta de Directorio de Sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial, Industrial y Agrícola Mariela S.A., de fecha 7 de noviembre de 1997, que da cuenta de mi designación como Gerente, con expresa designación de facultades que, en lo pertinente, se refiere a la facultad para actuar en el ámbito jurídico debido a mi condición de egresado de Derecho y mis conocimientos en el ámbito; 7. Copia autorizada de Escritura de Compraventa entre Crescencia Garrido F. y otra a Sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial, Industrial y Agrícola Mariela S.A., de fecha 29 de julio de 1997, en la cual consta que los contratantes, en la cláusula Novena de dicho instrumento me confirieron mandato especial para suscribir en su nombre y representación, eventuales escrituras aclaratorias, rectificatorias que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a este contrato; 8. Copia autorizada de Reglamento de Copropiedad de la sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial, Industrial y Agrícola Mariela S.A., de fecha 12 de marzo de 1999, que en su parte final da cuenta que yo confeccioné la minuta de dicha escritura; 9. Copia autorizada de escritura de cesión de derechos de doña Rosalinda Contardo Valenzuela a doña Aguida Contardo Valenzuela, de fecha 18 de octubre de 1996, en cuya cláusula sexta se me faculta para otorgar las escrituras rectificatorias y complementarias que sea menester; 10. Copia autorizada de escritura de cesión de derechos de doña Carmen Contardo Valenzuela a don Víctor Inzulza Adasme, de fecha 18 de abril



de 1997, que en su cláusula octava me faculta para otorgar las escrituras rectificatorias y complementarias que sea menester; 11. Copia autorizada de escritura rectificatoria y complementaria de fecha 21 de abril de 1999, en cuya parte final se da cuenta que yo redacté la minuta presentada al Notario; 12.

Copia autorizada de escritura de compraventa suscrita entre la sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial, Industrial y Agrícola Mariela S.A. y don Héctor Ávila Campos, de 9 de diciembre de 2003, en cuya cláusula novena se me faculta para que en representación de los comparecientes concorra a realizar todos los trámites, confección y firma de todos los documentos que sean necesarios, privados o públicos, para salvar la presente escritura, de cualquier inconveniente para la completa enajenación del inmueble objeto del contrato; 13. Copia autorizada de escritura pública de contrato de arrendamiento suscrito entre don Héctor Ávila Campos y la sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial, Industrial y Agrícola Mariela S.A., de fecha 9 de diciembre de 2003, en cuya cláusula decimocuarta se me faculta para concurrir en nombre de los comparecientes a realizar todos los trámites, confección y firma de todos los documentos que sean necesarios, privados o públicos, para salvar la escritura de cualquier inconveniente para la completa enajenación del inmueble objeto del contrato; 14. Copia autorizada de escritura pública de compraventa y alzamiento suscrito entre la sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial, Industrial y Agrícola Mariela S.A. y don Juvenal Soruco Valverde, de fecha 10 de agosto de 2004; 15. Copias autorizadas de piezas de la causa laboral caratulada "García Contardo Naitzabeth con Officesuport S.A. en la cual se da cuenta, en el quinto otrosí de la demanda, que ésta es patrocinada por la abogada María Inés Parra Sepúlveda y se le confiere poder, en mi calidad de egresado de derecho; 16. Copia autorizada de boletas de prestación de servicios a terceros de la sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Comercial, Industrial y Agrícola Mariela S.A., en razón de servicios de asesoría legal prestados a la sociedad. Boletas N° 078, de 27 de noviembre de 1995, N° 085, de 20 de diciembre de 1995, N° 105, de 9 de mayo de 1996, N° 106, de 28 de junio de 1996, N° 107, de 8 de agosto de 1996, y N° 108, de 28 de agosto de 1996.



Con el mérito de estos documentos la Universidad tuvo por acreditada la concurrencia del requisito establecido en el inciso primero del artículo 51 del Reglamento, más arriba citado, respecto de la experiencia laboral significativa en el área.

C. Convalidación, estudios y egreso de la carrera.

Hace presente que de esta forma, comenzó los estudios en la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, y cursando los ramos que según el plan académico debía realizar, aprobando con excelentes notas las asignaturas requeridas para el Egreso. Señala que fue destacado por ello, reconocido y premiado como el mejor alumno de la generación de egreso.

D. Ingreso de antecedentes ante la Excma. Corte Suprema.

A este respecto, manifiesta que luego de haber realizado y aprobado la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, el día 17 de diciembre del año 2014, concurrió, tal como lo indica el instructivo de la Corte Suprema relativo al juramento de abogados, a la Oficina de Títulos de dicha Corte, a objeto de entregar la documentación exigida para abrir expediente de juramento. En aquella oportunidad entregó toda la documentación que le entregó la Universidad y aquella relativa a sus antecedentes personales y a la práctica profesional, siendo revisada por una funcionaria de la Oficina de Títulos, especialmente los documentos que daban cuenta de la convalidación de los estudios de Derecho que cursó previo a su ingreso a la Universidad Autónoma, en la Universidad de Concepción, en el período comprendido entre el Primer Semestre del año 1987 y el Segundo Semestre del año 1995. Dicha funcionaria le manifestó que, a su juicio, con los documentos presentados, no estaba clara la forma en que se realizó el proceso de convalidación de los estudios que realizó anteriormente en la Universidad de Concepción, lo cual llamó su atención, pero creyó que se trataba solamente de un error debido a la lectura somera que había realizado en ese momento. Ante esta situación, y para evitar una errada interpretación de sus antecedentes, acudió a la Facultad de Derecho de la sede de esta ciudad de la Universidad Autónoma, para solicitar copias de todos los documentos relativos a sus estudios, a la convalidación de las



asignaturas previamente cursadas, y a la validación vía examen de conocimientos realizada respecto de la cátedra "Taller de Análisis Jurídico", del año 2012, a fin de poder complementar los antecedentes ya aportados a la Excma. Corte Suprema y aclarar las dudas que hubieren existido. Con fecha 26 de diciembre de 2014, realizó a la Excma. Corte Suprema una presentación escrita, a la cual acompañó aquellos antecedentes y, además, dos certificados, emitidos por el Abogado Jefe del Centro de Atención Talca de la Corporación de Asistencia Judicial y por el Abogado que supervisó su práctica profesional, relativos a su desempeño en la práctica profesional, que fue calificado como sobresaliente. En aquel escrito, asumiendo que todo se debería a un mero error y que todos sus antecedentes debían ser aprobados para poder prestar juramento, señaló al máximo Tribunal que las observaciones planteadas por la funcionaria de la Oficina de Títulos al momento de solicitar la apertura de expediente de juramento podrían deberse a un error al examinar los documentos aportados por la Universidad, toda vez que conjuntamente con la Resolución de Rectoría N° 80/2006 de 10 de Abril del año 2006, que aprueba el Reglamento General del Alumno, documento que estaba vigente y respecto del cual se realizó y aprobó su solicitud de convalidación de Estudios, la Universidad agregó también la Resolución de Rectoría N° 05/2011, de fecha 12 de Enero del año 2011, que aprueba el texto refundido y actualizado del Reglamento General del Alumno de Pregrado de la Universidad Autónoma de Chile, reglamento que rige a contar del período Académico 2011 el cual es posterior a la fecha en que se realizó y aprobó su solicitud de convalidación de Estudios.

Luego de ello, el día 5 de enero de 2015, realizó otra presentación ante la Excma. Corte Suprema, a fin de acompañar el certificado de 23 de Diciembre de 2014, emitido por la Universidad de Concepción, suscrito por la Sra. Vicedecana Subrogante, doña Beatriz Larraín Martínez, en el cual se indica que la fecha real de egreso de aquella Universidad es el día 26 de Marzo de 1997, fecha de aprobación de su Seminario de Titulación y no el fin del Segundo Semestre del año 1995, como aparece en los certificados emitidos anteriormente. Además, en el mismo escrito acompañó un Certificado rectificatorio de Concentración de Notas, de 31 de diciembre de 2014, emitido por la Universidad de Concepción, que corrige



los de fecha 7 de enero del 2010 y de 24 de Noviembre de 2014, que ya se encontraban acompañados a su expediente, a fin de dar cuenta de que cursó estudios en la Facultad de Derecho de esa Universidad entre los años 1987 y 1996, siendo inscrita la Asignatura de Seminario de Titulación el segundo semestre de 1995, y aprobada el Primer Semestre de 1997. Asimismo, acompañó el certificado de 30 de diciembre de 2014, en el cual constan los siguientes hechos: que cursó y aprobó su última asignatura de estudio de la malla curricular, Filosofía del Derecho, el Primer Semestre del 2006; que la asignatura Seminario de Titulación fue inscrita el Segundo Semestre del año 1995 y consta su aprobación por resolución de fecha 26 de Marzo de 2007; que egresé de la Universidad de Concepción el día 26 de marzo de 1997, fecha en que aprobó el Seminario de Titulación; que rindió Examen de Licenciatura el día 19 de Noviembre de 1999, siendo reprobado, y que rindió Examen de Licenciatura el día 24 de marzo del año 2000, siendo reprobado.

E. Informe del Comité de Comunicaciones de la Excma. Corte Suprema.

Por resolución de 19 de marzo de 2015 se dispuso que los antecedentes fueran remitidos al Comité de Comunicaciones de la Excma. Corte Suprema *"a objeto de revisar todo lo que diga relación con el proceso de convalidación."* El informe emitido por dicho comité fue tan sorprendente como lapidario. En el punto 4° se señala: “Que de acuerdo con lo anterior, la convalidación efectuada en el presente caso por la Universidad Autónoma de Chile, mediante resoluciones de Dirección Académica sede Talca N° 16/2010 y N° 118/2012, de fecha 26 de febrero de 2010 y 5 de julio de 2012, respectivamente, de fojas 9 y siguientes, de las asignaturas aprobadas por el postulante en la Universidad de Concepción, en el período académico comprendido entre los años 1987 a 1995, no cumple con lo dispuesto en el citado artículo 69 de su propia reglamentación académica, por cuanto ha transcurrido un lapso muy superior a los diez años entre la fecha de aprobación de las mismas en la Institución de origen y la respectiva solicitud de convalidación presentada en el establecimiento de egreso, sin que haya demostrado que el alumno acreditó ante la Universidad, previo a la convalidación, que poseía experiencia laboral significativa en el área. Y considerando, además, lo dispuesto en los artículos 521 y 523 del Código Orgánico de Tribunales, este Comité considera



que don REYNALDO ALFONSO YÁÑEZ GONZÁLEZ, no cumple con los requisitos necesarios para obtener el título de abogado.”

F. Rechazo de la solicitud de juramento.

Continúa su relato indicando que con fecha 18 de agosto de 2015, la Excm. Corte Suprema dictó resolución, la cual lleva la firma del entonces Presidente del máximo Tribunal, rechazando la solicitud de juramento. El texto de dicha resolución es el siguiente: *“Santiago, dieciocho de agosto de dos mil quince A fojas 123: Por evacuado el informe del Comité de Comunicaciones, téngase presente. A fojas 47: Visto y teniendo presente: Primero: Que comparece don Reinaldo Alfonso Yáñez González y solicita se le otorgue el título de abogado, por haber obtenido el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y sociales en la Universidad Autónoma de Chile el 18 de diciembre de 2013, según certificado de fojas 2, y cumplir los demás requisitos exigidos en los artículos 523 y 526 del Código Orgánico de Tribunales; Segundo: Que a esta Corte Suprema, previo a otorgar el título de abogado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521 del citado Código, le corresponde verificar, entre otras exigencias, que el postulante tenga el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una universidad, en conformidad a la ley, lo cual, en el caso de titulados de una universidad que cursaron parte de sus estudios en otra institución, supone comprobar que haya existido convalidación de asignaturas entre una y otra y que tal operación se haya realizado en conformidad a la reglamentación vigente en la casa de estudios de titulación, tal como se establece en el Auto Acordado dictado sobre la materia con fecha 9 de mayo de 2008; Tercero: Que el artículo 51° del Reglamento General del Alumno de la Universidad en mención, agregado a fojas 31, dispone que no (sic) sólo se convalidarán asignaturas aprobadas dentro de los diez años anteriores a la fecha de solicitud y, agrega: “Este plazo no regirá respecto de los alumnos que acrediten experiencia laboral significativa en el área” ; Cuarto: Que en el presente caso, la convalidación de estudios autorizada por la Universidad Autónoma de Chile, mediante Resolución de la Dirección Académica sede Talca N° 16/2010, de 26 de febrero de 2010, comprende asignaturas aprobadas por el postulante en la Universidad de Concepción entre los años 1987 y*



1995 según consta en el certificado de fojas 5, materias que se encuentran fuera del plazo de diez años permitido en el citado artículo del reglamento - considerando que conforme a éste, el momento que marca el inicio del cómputo de dicho lapso corresponde a la época de aprobación de la asignatura a convalidar-, sin que aparezca de manera alguna en la resolución de convalidación que se hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final de la aludida norma. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 521 y 523 del Código Orgánico de Tribunales, 35 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza; en el Auto Acordado de esta Corte de 9 de mayo de 2008 y en ejercicio de las atribuciones delegadas por el Tribunal Pleno en la sesión de 5 de noviembre de 2012, se rechaza la solicitud de juramento formulada en lo principal de la presentación de fojas 47. Remítase estos autos a la Oficina de Títulos y grados de esta Corte para los fines pertinentes sirviendo la presente resolución de suficiente oficio remisor. Tl-3181-2014.-”

Como puede apreciarse, esta resolución se funda en circunstancias atribuibles a la Universidad Autónoma, dando a entender que existe un error en su proceso de convalidación de estudios, pues la resolución N° 16/2010 de 16 de febrero de 2010, no da cuenta de que la convalidación se autorizó y aprobó por la Universidad, en virtud de lo dispuesto en la segunda parte del inciso primero del Artículo 51 del Reglamento, no obstante que presentó y fueron recepcionados por la Universidad oportunamente todos los documentos fundantes de dichas circunstancias. A los pocos días de notificada esta resolución, señala que remitió una misiva al Director de la carrera, solicitando que la Universidad interviniera y solucionara el grave problema en que le colocó, adoptando todas las medidas y realizando todas las gestiones necesarias para lograr que pudiera prestar juramento en la Excma. Corte Suprema. Asimismo, y en vista del error en que incurrió la Universidad, dedujo recurso de reposición en contra de la resolución dictada por la Excma. Corte Suprema que rechazó la solicitud de juramento. Este recurso fue rechazado por resolución de fecha 13 de noviembre de 2015. En el intertanto, la Universidad, intentando enmendar el error en que incurrió al dictar la resolución que aprobó la convalidación, dictó una resolución complementaria a la N° 16/2010.



El 5 de abril de 2016 dedujo un nuevo recurso de reposición en contra de la resolución de 18 de agosto de 2015, haciendo valer nuevos antecedentes. Se trata de los siguientes documentos: a) Resolución de Rectoría N° 04/2016 de la Universidad Autónoma de Chile, complementaria de la Resolución de Dirección Académica Sede Talca N° 16/2010, y en la que se expresa: *“Que conforme a lo relacionado se hace necesario aclarar y rectificar nuevamente la Resolución de Dirección Académica Sede Talca N° 16/2010, en cuanto a consignar expresamente en ella que la convalidación se efectuó en consideración a la experiencia laboral significativa acreditada por el solicitante”*; b) Oficio de fecha 24 de febrero de 2010, dirigido por don Ricardo Herrera Castillo, Director de la Carrera de Derecho Sede Talca a don Pedro Rosales V. Director Académico de la misma sede, en el que se señala: *“los contenidos de las asignaturas cursadas por el solicitante en la Universidad de Concepción son equivalentes con las dictadas en esta casa de estudios. En consideración a que las mencionadas asignaturas fueron cursadas entre los años 1987 y 1995, esto es, hace más de 10 años, el alumno acreditó experiencia laboral significativa, mediante documentos públicos y privados y certificado de fecha 28 de enero del año 2010, en el cual consta su calidad de procurador entre los años 2004 y 2010. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 51 del Reglamento General del Alumno, este Director estima que procede acceder a la solicitud de convalidación de asignaturas efectuada por el alumno Reinaldo Yáñez González, cédula nacional de identidad número 9.121.502-0.”* Este recurso de reposición con nuevos antecedentes fue rechazado por el pleno de la Excma. Corte Suprema, por estimar que aquellos no lograron desvirtuar las consideraciones que se tuvo presente al dictar las resoluciones de 18 de agosto y de 13 de noviembre del año 2015.

Durante la tramitación de la solicitud de juramento en la Excma. Corte Suprema, en la cual realizó varias presentaciones, debió solicitar a la Universidad copias de documentos y otros antecedentes, los cuales le fueron entregados en dilatados plazos, a pesar de la insistencia de su parte, y de la gravedad de la situación que estaba viviendo. Así, luego haber cursado prácticamente dos veces la carrera de Derecho, y de haber cursado y aprobado con excelentes notas las asignaturas



requeridas para el Egreso en la Universidad Autónoma siendo destacado y reconocido por ello, de haber realizado su tesis en dos oportunidades, rindiendo el Examen de Grado y aprobándolo, luchando con su diabetes insulino-dependiente en forma constante; repitiendo la práctica profesional en dos oportunidades, obteniendo buenas calificaciones en la Corporación de Asistencia Judicial, hecho refrendado por el certificado expedido por dicho organismo y referencias de mi abogado tutor y Abogado del Centro Talca de la Corporación, y de haber cumplido con todo lo que la Universidad Autónoma requirió en estos años, mi anhelo de poder finalmente convertirme en Abogado, se vio frustrado por errores cometidos por la Universidad Autónoma.

Señala que ingresó a estudiar a la Universidad para ser abogado. Con ese propósito se cursa la carrera, se realizan grandes sacrificios, tanto personales como familiares y económicos. No puede conformarse, y tampoco puede pedir que lo haga, con ser Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Este solo grado académico no permite el desempeño profesional que es prometido al ingresar a estudiar.

II.- PERJUICIOS CAUSADOS.

A. Daño Emergente.

El Daño Emergente ha sido definido como, "la diferencia que se produce entre el activo del patrimonio de una persona, como consecuencia del ilícito civil, entre su valor original (anterior al hecho que se reprocha) y el valor actual (posterior al mismo hecho). Esta diferencia matemática es la que determina el monto de la indemnización por este concepto." Se consideran, en primer lugar, los gastos y costos en que incurrí en razón de los estudios que cursé en la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, cuyo detalle es el siguiente: Gastos de matrículas, aranceles anuales y derechos para rendir el examen de grado: \$9.500.000 (nueve millones quinientos mil pesos); Gastos de locomoción para asistir a clases y actividades académicas durante los años que estudié en la Universidad Autónoma: \$1.200.000 (un millón doscientos mil pesos); Gastos de fotocopias, libros y materiales de estudio: \$3.000.000 (tres millones de pesos); Compra de materiales para estudiar para el examen de grado: \$600.000 (seiscientos mil pesos); Además,



debí incurrir en otros gastos, distintos a los académicos, derivados del incumplimiento de la demandada. Su salud se deterioró a causa del sufrimiento que me produjo el rechazo de mi solicitud de juramento. Desde hace tres años he debido desembolsar una suma no menor a \$180.000 mensuales en medicamentos, consultas y otros gastos médicos por el agravamiento de la diabetes, y el tratamiento de la depresión reactiva que me fue diagnosticada, lo que arroja un total sólo por este concepto de \$6.480.000 (seis millones cuatrocientos ochenta mil pesos). Además, para realizar todas las presentaciones ante la Excm. Corte Suprema, entrevistas con Ministros, relatores y otros funcionarios de dicho tribunal, así como reuniones con una abogada de la Universidad, debí realizar más de ocho viajes a dicha ciudad, gastando, al menos, en cada viaje, la suma de \$60.000, arrojando un total de \$480.000 (cuatrocientos ochenta mil pesos). A las presentaciones que realizó en dicho Tribunal Superior, debí acompañar copias autorizadas de varios documentos, solventando para ello costos no menores a \$200.000 (doscientos mil pesos).

Todos estos conceptos que por daño emergente demando, ascienden a la suma de **\$21.460.000.-** (veintiún millones cuatrocientos sesenta mil pesos), o la suma mayor o menor que SS estime conforme a los antecedentes que se alleguen a la causa.

B. Lucro Cesante.

El lucro cesante se ha definido como la privación de las ganancias que podría haber obtenido el acreedor de la prestación una vez incorporada está a su patrimonio, mediante el cumplimiento oportuno, efectivo e íntegro de la obligación. Se trata de los siguientes conceptos: 1. Remuneración que habría recibido desde el año 2010 al 2013, años durante los cuales cursó la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Chile, y se vio privado de trabajar, que ascienden a \$650.000 por cada uno de los 48 meses, arrojando un total de \$31.200.000 (treinta y un millones doscientos mil pesos). 2. Diferencia en las remuneraciones que podría percibir en 19 años de ejercicio profesional como abogado, contados desde el año 2014, época en que me habría titulado de abogado hasta el momento en que cumpliría la edad de 65 años; considerando la diferencia entre un sueldo promedio de \$3.000.000. y la remuneración que efectivamente percibía como procurador de



asuntos jurídicos de \$650.000. Tal diferencia alcanza a \$2.350.000; por mes, lo que calculado sobre los 19 años referidos hace un total de \$535.800.000. (quinientos treinta y cinco millones ochocientos mil pesos). Así entonces, demando por concepto de lucro cesante la suma de **\$567.000.000.-** (quinientos sesenta y siete millones de pesos) o la suma mayor o menor que SS estime conforme a los antecedentes que alleguen a la causa.

C. Daño Moral.

El daño moral causado por el incumplimiento de la Universidad Autónoma deberá también ser indemnizado. Esta especie de daño ha sido definida por el profesor Arturo Alessandri Rodríguez como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida.

El hecho de no poder prestar juramento ante la Excma. Corte Suprema y obtener el título de abogado me ha producido una profunda frustración, tristeza y aflicción. Estudié para ser abogado, y por culpa de la Universidad Autónoma, a pesar de haber aprobado todas las asignaturas y haber sido el mejor alumno de la generación, no podré lograrlo. Incluso, la diabetes crónica que padece se acrecentó en los últimos cuatro años, a consecuencia de la situación en la que me encuentra y de los momentos desagradables que he debido pasar. Se aumentaron las dosis de insulina, prácticamente al doble y ha padecido varias crisis y desbalances que han puesto, en más de una ocasión, su vida en serio peligro, circunstancia que en sí misma es delicada y se vuelve doblemente angustiosa si se considera que tengo dos hijos en edad escolar que podrían quedar a la deriva. El mal estado de salud general producido por esta indeseable situación me ha causado además diversos cuadros de depresión, debiendo recibir tratamiento médico, además de crisis de pánico y trastornos de colon irritable.

Por otra parte, el hecho de no poder prestar juramento le ha llevado a la obligación de realizar labores diversas a las que corresponden a la ocupación de un abogado. Recurrentemente piensa en esta situación, en lo que podría estar haciendo, en el sueño que no podrá cumplir y la angustia y el dolor recrudece. Para comprobar cuan real, cierto y fuerte es el dolor y la angustia que experimento,



basta con que cualquiera de los intervinientes letrados en esta causa se representaren por un minuto la circunstancia de ser privados de su título de abogado por una causa no imputable a ustedes y los efectos que en vuestras vidas se producirían. El hecho de no tener la calidad de abogado le ha producido descrédito y desconfianza tremendos en las personas que han acudido a las oficinas en que he trabajado, pues resulta difícil confiar los asuntos a una persona que no tiene el título de abogado, aunque les informe y explique mi situación. A pesar de que considero que tengo los conocimientos y experiencia necesarios, me veo reducido a ejecutar labores básicas, que son casi únicamente la redacción de escritos, contratos, y otros documentos, y el monitoreo de causas. No puede acudir a audiencias, alegar en las Cortes, prestar asesorías, y ni siquiera firmar los escritos y presentaciones en cuya elaboración interviene. Durante este tiempo he debido trabajar por remuneraciones muy inferiores a las que podría aspirar si tuviera el título de abogado. Esto llevó a que no pudiera continuar pagando el crédito hipotecario con el que adquirió la casa en que vivía junto a su familia, teniendo que ver con impotencia que el banco la rematara, porque no pudo mantenerse al día en el pago de los dividendos.

Todos los malestares, frustraciones y padecimientos que le ha producido, y que diariamente le provoca la situación en que lo ha puesto la Universidad, deberán ser resarcidos por ella. La compensación de este daño asciende a una suma no inferior a \$600.000.000.- (seiscientos millones de pesos), o la suma mayor o menor que se estime conforme a los antecedentes que alleguen a la causa.

III.- ANTECEDENTES DE DERECHO.

A.- Acción de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios.

1. Concurrencia de los requisitos de la acción de cumplimiento e indemnizatoria por responsabilidad civil contractual.

En la especie concurren todos y cada uno de los requisitos necesarios para que se declare la existencia de la responsabilidad civil contractual de la parte demandada en su doble aspecto: declarativa de la obligación de cumplimiento de contrato y de indemnización de perjuicios. En efecto, todo lo anteriormente explicado en la



relación de los hechos de la demanda refleja el cumplimiento de su parte y, por otra parte, el incumplimiento o cumplimiento imperfecto e inútil de parte de la Universidad demandada, incumplimiento que dice relación con la transgresión del contrato de prestación de servicios educacionales.

La Universidad no cumplió el contrato de prestación de servicios educacionales. Debía prestarle un servicio útil a la finalidad para la cual se contrató, esto es, la habilitación para la obtención del título de abogado, lo que no hizo. Esta carrera, como sabrá bien, se estudia con el objetivo de ser Abogado. Importante resulta señalar también que conforme a las disposiciones de la Ley 19.496, Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, las condiciones objetivas contenidas en la publicidad de un servicio se entienden incorporadas al contrato. La publicidad emitida por la Universidad sobre la carrera de Derecho señala que cursar la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma, habilita para la obtención del Título de Abogado, título que es otorgado por la Excma. Corte Suprema. Ello, evidentemente, además de la práctica profesional, que yo aprobó con excelentes calificaciones, y otros requisitos, que también cumplía, por lo que la única condición que no reunió para obtener el título de Abogado, tal como fue resuelto por la Excma. Corte Suprema, fue la correcta convalidación, conforme al Reglamento de la Universidad Autónoma, de las asignaturas que cursó en la Universidad de Concepción. No deja de llamar la atención que la publicidad de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma contiene información como la siguiente: Carrera Acreditada por 5 años, en sede Santiago, "Talca y Temuco, modalidad presencial, jornada diurna y vespertina desde diciembre 2016 hasta diciembre 2021 por la agencia acreditadora ADC. Título: Abogado(a) (Título otorgado por la Excma. Corte Suprema) Grado Académico: Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas y Sociales Duración: semestres Sedes: Santiago, Talca y Temuco. *Competencias Disciplinarias. Aplica los elementos esenciales de las ciencias jurídicas y sociales para develar la problemática jurídica, actualizándose respecto a los cambios de las nuevas instituciones y normativas legales chilenas. Investiga problemáticas básicas de orden jurídicas y sociales, tanto históricas o contemporáneas, utilizando los elementos fundamentales de la metodología científica



y medios tecnológicos idóneos, argumentando sus juicios a partir de un análisis crítico, para aportar al desarrollo de la realidad local y nacional. * Competencias Profesionales. Proporciona atención a los usuarios de servicios legales, proponiendo estrategias elementales de solución de orden jurídico con criterios de factibilidad, conforme al Estado de Derecho chileno, a partir del análisis crítico, en un marco ético y de responsabilidad social. Representa los derechos de sus usuarios de servicios jurídicos, ante tribunales y servicios públicos, en procedimientos orales y escritos, aplicando técnicas fundamentales de representación legal, en un marco de principios éticos. Propone soluciones alternativas fundamentales a los conflictos jurídicos, tanto en el ámbito judicial y extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y autónomo de las partes por sobre el litigio, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad social. O la siguiente: Derecho PERFIL PROFESIONAL: El egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile será un profesional capaz de desempeñarse de manera pertinente y competente en funciones del ámbito legal, para asesorar y representar a personas, naturales o jurídicas, ante los tribunales de justicia y de organismos públicos y privados. Es un profesional comprometido con el desarrollo nacional y regional, orientado al bien común y centrando su quehacer en la justicia como valor rector de la disciplina, asumiendo con compromiso la defensa y asesoría de personas de escasos recursos y de organizaciones sociales, demostrando convicción ética y de responsabilidad social como elementos claves de su formación y sello profesoral, CAMPO OCUPACIONAL: El egresado de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile será un profesional capacidad de desempeñarse de manera pertinente y competente en el ejercicio sobre de la profesión, el servicio público, ministerio público, poder judicial, poder legislativo, notarías y conservadores, administración centralizada y descentralizada del Estado y del sector privado. Estas condiciones contenidas en su publicidad, y especialmente las que dicen relación con el otorgamiento de las condiciones suficientes para la obtención del título de Abogado, forman parte del contrato de prestación de servicios.

El servicio que le prestó la Universidad no cumplió con el contenido del contrato de prestación de servicios. Si la Universidad lo hubiera cumplido, la Excm. Corte



Suprema habría aceptado la solicitud de juramento, y los daños cuya indemnización demanda, no se habrían producido. La consecuencia primera y principal del incumplimiento voluntario, o imputable al deudor, es la reparación del daño. Los perjuicios que he experimentado deben ser reparados, ya que ellos devienen de un incumplimiento contractual culpable de la demandada. En efecto, el fundamento de la indemnización de daños está en la actuación propia, culpable y antijurídica de los obligados a prestarla. Es consustancial a la persona responder de sus acciones o las de sus agentes y de sus consecuencias necesarias u objetivamente previsibles.

“Ello significa que no puede desligarse de su acción ni de las consecuencias a él imputables, considerándolas como algo externo a él, sino que en su propia conciencia las ha de admitir como suyas y ha de tomarlas a su cargo, ha de responder por ellas”. (Sentencia 19 abril 1944, Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 42, sección 1a, página 79). Por lo anteriormente expresado es que la ley ha dado la solución de indemnizarse los perjuicios basándose en el principio de que nadie puede ser perjudicado por el acto culpable del otro y, recíprocamente, nadie puede beneficiarse sin causa justa.

La responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de indemnizar o reparar los perjuicios a otra ocasionados. El primer requisito para que opere este tipo de indemnización es el incumplimiento. De las tres situaciones que este presenta de acuerdo con el artículo 1556 del Código Civil: no haberse cumplido la obligación, haberse cumplido imperfectamente, y haberse retardado el cumplimiento, la indemnización compensatoria abarca las dos primeras, esto es: 1° El incumplimiento es total y definitivo; la obligación no se cumple en manera alguna y, en consecuencia, la indemnización compensatoria abarca el valor íntegro de la obligación, y 2° El incumplimiento es parcial, porque la obligación se cumple imperfectamente, como si por ejemplo la cosa debida es entregada con deterioros; la indemnización compensatoria representa el valor de dichos desperfectos.

De acuerdo a la regla general del artículo 1698 del Código Civil, corresponde probar la obligación a quien la alega; en consecuencia, es el acreedor el que debe probar la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos de la indemnización de perjuicios, salvo aquellos que la ley presume, como la culpa. Mi parte está en



condiciones de probar la concurrencia de todos los elementos de esta especie de responsabilidad. Muy especialmente, se acreditará la relación de causalidad en materia contractual. Entre el incumplimiento de la Universidad Autónoma de Chile y el daño experimentado existe una relación de causa a efecto, en los mismos términos que entre el hecho ilícito y el daño en la responsabilidad extracontractual. Asimismo, se demostrará que el incumplimiento es imputable a la demandada. Además, en materia contractual, ello es más claro aún, porque la ley presume la culpa. En efecto, al igual que en materia extracontractual, la culpa tiene mayor aplicación que el dolo, por la misma razón, aun cuando más drástica: allá porque es de más fácil prueba; acá la facilidad es todavía mayor: se presume. La culpa contractual se presume. Si bien la ley no lo ha expresado con tales términos, del tenor literal de algunas disposiciones así se desprende en forma clara. En efecto, el inciso 3° del artículo 1547 dispone: "la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega". Por su parte, el artículo 1671 establece: "siempre que la cosa perece en poder del deudor se presume que ha sido por hecho o culpa suya". Si el deudor, como lo dice el artículo 1547, debe probar la diligencia, es porque la falta de ella se presume; el acreedor no está obligado a acreditar la culpa, sino el deudor debe establecer que no incurrió en ella probando el debido cuidado o diligencia empleado en el cumplimiento. Entonces, se demostrará la concurrencia de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil contractual.

2. Requisitos de la responsabilidad civil contractual.

A continuación, analiza en concreto cada uno de los requisitos de la responsabilidad civil contractual y de cómo ellos concurren copulativamente, como es exigible. Primer requisito: el incumplimiento de la obligación. Existe, respecto de la Universidad Autónoma de Chile, incumplimiento de obligaciones en relación con el contrato de prestación de servicios educacionales. En materia contractual, el incumplimiento de la obligación supone: 1) No haber cumplido una obligación contenida en el contrato; 2) Haberla cumplido de manera imperfecta; o 3) Haber retardado su cumplimiento por causas imputables al deudor.



De los supuestos enunciados, los señalados en los números 1 y 2 se cumplen o concurren en el presente caso, porque respecto de una de las obligaciones de la Universidad, esto es, prestar un servicio apto y adecuado para la obtención del título de abogado, hay incumplimiento, por las probadas razones que ya hemos desarrollado ampliamente. En esta parte nos remitimos íntegramente a lo ya referido, para evitar repeticiones innecesarias. Entonces, siendo consustancial a la indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual el incumplimiento de una obligación nacida al amparo de un contrato, al encontrarse probado que existe incumplimiento de obligaciones de la demandada y que dicho incumplimiento me ocasionó un perjuicio, la Universidad debe indemnizar. Dicho de otro modo, las operaciones necesarias en el presente juicio siguen siendo, en lo que a determinación de perjuicios importa, tres: Uno) Decidir si procede la indemnización; Dos) En su caso, determinar qué perjuicios son indemnizables; y Tres) Determinar el monto de cada uno de los perjuicios de acuerdo a la prueba rendida.

Segundo requisito: Existencia de perjuicios indemnizables. En cuanto a los daños indemnizables se debe decir que el artículo 1556 del Código Civil señala: "La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento." (inc. 2°) "Exceptuándose los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente". La ley no los ha definido. Sin embargo, es sabido que la distinción entre ellos deriva de que el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del acreedor; y el lucro cesante, la utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o el cumplimiento tardío de la obligación.

¿ De qué daños se responde en este caso en materia contractual?

Si no puede imputarse dolo, sólo se responde de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Sólo son indemnizables contractualmente los daños directos. En efecto, el deudor de buena fe, que no es otro que aquel que no ha actuado con dolo, sólo responde de los perjuicios directos, que son los que son consecuencia directa e inmediata del incumplimiento de la obligación. Es decir, el nexo causal entre el evento dañoso y sus posteriores consecuencias se interrumpe



gracias a que sus consecuencias son evitables. Un daño, por lo tanto, resulta ser perfectamente previsible y eludible gracias a la debida diligencia.

Así, dos vínculos de causalidad son necesarios: 1) uno es la vinculación de causalidad entre la actividad del demandado y la inejecución de la obligación: la que ha de ser absoluta; 2) Otro es la vinculación de causalidad entre la inejecución de la obligación y el daño: el perjuicio que la víctima demanda como reparación ha de ser la consecuencia directa de la inejecución de la obligación que pesa sobre el demandado. Es precisamente esta diferencia entre el deudor, a quien no se le puede imputar dolo o deudor "de buena fe" , la que lleva a responder de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.

En el caso de autos, los daños son daños directos en relación con el incumplimiento.

En cuanto a la previsibilidad de los daños en el presente caso ello es evidente. La reclamación de previsibilidad en los daños contractuales arranca de la autonomía de la voluntad. El deudor no responderá por los riesgos que no pudo prever, si así fuera se violentaría lo más propio del acuerdo de voluntades y los pilares en los que se fundan la mayoría de las legislaciones civiles: la autonomía de la voluntad, el principio de la buena fe, la responsabilidad y la equidad. ¿Qué es lo que se previó o pudo preverse?: Cada contratante dirá que el previó los daños de diferente manera. En nuestro ordenamiento esta cuestión se soluciona con la "regla de la consecuencia inmediata y necesaria" . Se deben considerar previsibles aquellos efectos dañosos que se han producido conforme con el curso normal de las cosas y, por el contrario, debió estimar imprevisibles los que se han originado de modo irregular, anormal o extraordinario.

La Universidad Autónoma de Chile tenía cómo prever, al celebrar el contrato y al convalidar las asignaturas ya cursadas, los perjuicios que ocasionaría una falta de reconocimiento del grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por parte de la Excma. Corte Suprema, con mayor razón aún si ellos son una consecuencia directa e inmediata de la convalidación defectuosa.



El Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema sobre la materia señala los antecedentes que deben ser acompañados a la solicitud de Juramento y las circunstancias que deben ser acreditadas a dicho Tribunal Superior, dentro de las cuales se encuentra, precisamente, el cumplimiento de los requisitos dispuestos para la convalidación de asignaturas.

Tercer requisito: La relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios. Entre el incumplimiento y el daño debe existir una relación de causa a efecto, en los mismos términos que entre el hecho ilícito y el daño en la responsabilidad extracontractual y, como explicamos anteriormente, en ambas lleva a la eliminación de los perjuicios indirectos entre los indemnizables. Existen patrones para determinar la relación causa a efecto (nexo causal) entre el incumplimiento y el daño. Primero: El incumplimiento que produce el daño debe ser idóneo en sí mismo. Entonces el incumplimiento imputado al que se le atribuye la producción del daño ha sido idóneo en sí mismo, porque no se requirió de otros factores exógenos para que el daño se produjera. Si la Universidad Autónoma demandada hubiera realizado el proceso de convalidación de asignaturas con la diligencia y cuidado exigibles, ajustándose a las normas para este procedimiento, mi solicitud de juramento no habría sido rechazada por la Excma. Corte Suprema, y habría sido investido con el título de Abogado. Segundo: El daño debe ser consecuencia directa o inmediata del incumplimiento. Ya explicamos que el deudor de buena fe, aquel que no ha actuado con dolo, sólo responde de los perjuicios directos, que son aquellos que son consecuencia directa e inmediata del incumplimiento de la obligación. Es decir, el nexo causal entre el evento dañoso y sus posteriores consecuencias se interrumpe gracias a que sus consecuencias son evitables. Un daño, por lo tanto, resulta ser perfectamente previsible y eludible gracias a la debida diligencia. Este daño fue evitable, porque la convalidación debió hacerse de un modo diligente y correcto, cosa que no ocurrió. Tercero: Existirá relación de causalidad cuando, tras una simple operación intelectual, al suprimir mentalmente la causa, el efecto desaparece. Si se suprime mentalmente la errónea dictación de la resolución que aprobó la convalidación, y se la reemplaza por una correctamente dictada, la Excma. Corte Suprema habría aprobado la solicitud de juramento y, por



lo tanto, el daño desaparece. Era deber de la Universidad entregar un servicio apto y adecuado para la obtención del título de abogado, y no lo hizo. Tan evidente es el incumplimiento, que la Excma. Corte Suprema señala, al rechazar mi solicitud de juramento, que el motivo de esta decisión es precisamente la errada dictación de la resolución referida por parte de la Universidad Autónoma de Chile. Cuarto requisito: La imputabilidad de los perjuicios, es decir, la culpa o dolo del deudor. El requisito es que el incumplimiento debe ser imputable al deudor. Lo es cuando de parte del deudor hay dolo, o sea, intención de no cumplir, o culpa, esto es, la falta de diligencia o cuidado debidos. Por razones obvias descartaremos en el análisis la concurrencia de dolo. En cuanto a la culpa contractual, al igual que en materia extracontractual, la culpa tiene mayor aplicación que el dolo, por la misma razón, aun cuando más drástica: allá porque es de más fácil prueba; acá la facilidad es todavía mayor: se presume.

En cuanto al grado de culpabilidad, en el caso que nos ocupa estaríamos en presencia de las exigencias que impone la culpa leve, o descuido leve o descuido ligero. Es el término medio de negligencia, y la única que contemplan la mayoría de las legislaciones; aun en la nuestra, es la regla general, y por ello el inciso 3° del artículo 44 del Código Civil declara que "culpa o descuido sin otra calificación, significa culpa o descuido leve", y agrega: "el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa" (inc.4°). El mismo inciso da su concepto: "es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios". Si la ley ordena a una diligencia o cuidado ordinario o mediano, de esta clase de culpa se responde. La ley no ha expresado que la culpa contractual debe presumirse, pero del tenor literal de algunas disposiciones así se desprende en forma clara. En efecto, el inciso 3° del artículo 1547 dispone: "la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega". Por su parte, el artículo 1671 establece: "siempre que la cosa perece en poder del deudor se presume que ha sido por hecho o culpa suya". Sin embargo, si bien la culpa contractual se presume (negligencia se presume) dicha presunción afecta sólo al incumplimiento de obligaciones que hayan sido inequívocamente determinadas y, en



este caso, la obligación respecto de la cual se imputa incumplimiento será probada según todos los razonamientos que hemos desarrollado precedentemente a propósito del análisis del cumplimiento de los requisitos de la acción de cumplimiento y, por lo tanto, a su respecto opera la presunción.

En cuanto a la prueba de los perjuicios, de acuerdo a la regla general del artículo 1698 del Código Civil, corresponde probar la obligación a quien la alega; en consecuencia, es el acreedor el que debe probar la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos de la indemnización de perjuicios.

Quinto requisito: la mora del deudor. Respecto de la obligación incumplida, esto es, la correcta dictación de la resolución que concluyó la convalidación, por la razón más sencilla que se puede concebir: era de su cargo hacerlo, y entregar un servicio útil al fin perseguido, por lo tanto, procede un cumplimiento por equivalencia o, más propiamente, por compensación. Todo esto se explicó en los apartados anteriores relativos al examen de los requisitos de la acción de cumplimiento. Además, muy especialmente, en relación con el mismo contrato, no me encuentro en mora de cumplir (Art. 1552 del Código Civil) por lo que está en condiciones de obtener la indemnización de los perjuicios que oportunamente probará.

3. Consideraciones finales.

Para una acertada resolución de la controversia es menester tener presente algunas consideraciones finales:

1° El contrato de prestación de servicios educacionales buscaba beneficiar a ambas partes del contrato. A su parte en la habilitación para la obtención del título de Abogado, y a la Universidad, en la obtención de las sumas correspondientes a las matrículas, aranceles y demás derechos pagados. 2° El espíritu e intención del contrato era habilitarlo para la obtención del título de abogado. Ello no fue cumplido por la Universidad demandada. 3° El incumplimiento de la demandada tuvo como consecuencia que la Excma. Corte Suprema rechazara su solicitud de juramento. 4° El incumplimiento de la demandada le ha producido perjuicios, los cuales deben ser resarcidos por ella.



B. En subsidio de la acción de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios deducida precedentemente, deduce acción indemnizatoria autónoma de la de incumplimiento.

Para el evento improbable que estimare que la acción de resolución o cumplimiento que franquea el artículo 1489 del Código Civil fuera inadmisibile en la especie, deduce **en subsidio** la acción indemnizatoria independiente de aquella, para que sea acogida y se condene a la demandada a indemnizar los perjuicios que le ha irrogado.

En efecto, la más moderna doctrina nacional ha desligado o independizado las acciones de cumplimiento o resolución de las acciones indemnizatorias que le siguen. Así lo explica la profesora Patricia López Díaz, quien señala: “Desde hace algunos años nuestra doctrina ha postulado la procedencia de la indemnización autónoma, directa o exclusiva por inejecución contractual, invocando diversos argumentos, tales como el libre derecho de opción del acreedor entre las acciones o remedios contractuales, la reparación integral del daño, la interpretación lógica y sistemática del artículo 1489 del Código Civil chileno y el carácter principal de la obligación de indemnizar. Dicha argumentación ha sido acogida expresamente en sentencias de reciente data por nuestra Corte Suprema, incluso tratándose del incumplimiento de obligaciones de dar, superando así los inconvenientes que de daños por inejecución contractual solo podía demandarse en forma concurrente, complementaria y accesoria al cumplimiento específico o a la resolución del contrato. ”

La jurisprudencia más reciente ha recogido la doctrina mencionada en múltiples y recientes. La Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, en sentencia de 23 de mayo del presente año, pronunciada en la causa Rol N° 202-2016, declaró: *“Décimo: Que, sin embargo, lo concluido en el motivo anterior no impide dar por establecido que el servicio incumplió el contrato en cuestión, por cuanto según se razone) en el motivo cuarto de esta sentencia, encargó) al contratista la ejecución de obras no incluidas en la licitación, las que por tanto tienen el carácter de extraordinarias, sin pagar por ellas la justa contraprestación. Ahora bien, el que no resulte procedente decretar la resolución del contrato no obsta a que esta Corte examine y se pronuncie sobre la indemnización de perjuicios demandada a causa*



del incumplimiento del contrato, por cuanto tal como lo ha estimado tanto la doctrina más reciente como la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, la acción indemnizatoria no se encuentra ligada únicamente en sede contractual a la resolución o cumplimiento forzado de lo pactado, sino que puede cobrar identidad propia pero siempre asociada al hecho en que se le hace descansar, esto es, en base al incumplimiento (Corte Suprema Roles N° 3341-2009, 8123-2010)..."

Por su parte, los fallos a los cuales hace referencia la Corte en la reflexión transcrita, establecen el mismo criterio. Así, la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2010, dictada por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 3341-2009, resolvió: *"DECIMOTERCERO: Que la indemnización de perjuicios pura y simple fue descartada por la sentencia recurrida, sea por su improcedencia en atención a su carácter accesorio en este caso a la resolución del contrato, sea porque no fue en esos términos solicitada. Sobre esta última argumentación resulta evidente que su sustento se encuentra engarzado con lo que se puede resolver respecto de la procedencia o improcedencia de reclamar directamente la indemnización de perjuicio con total independencia de las restantes hipótesis anotadas, más cuando la sobrevivencia de esta petición supera la resolución del contrato, en atención a la naturaleza de la prestación de que se trata. DECIMOCUARTO: Que sobre la materia no puede soslayarse que, conforme a los principios que integran el Código Civil, no se observan las particulares motivaciones que podrían inducir a privar a los afectados de dirigir las acciones en la forma y del modo como mejor se ajusten a sus intereses, desde el momento que el derecho civil otorga a las personas el principio de libre disposición de sus bienes y autonomía de la voluntad, todo lo cual lleva a reconocer las mayores prerrogativas al momento de someter las pretensiones al órgano jurisdiccional. Es por lo anterior que esta Corte Suprema ha reconocido la independencia y autonomía de las acciones indemnizatorias, sean estas moratorias o perentorias, las que cualquiera sea la naturaleza del objeto de la prestación, pueden impetrarse en forma exclusiva, desde el momento que el legislador ha establecido su procedencia y la forma más usual de interposición, pero no ha prohibido la que en mejor forma repare integralmente el daño derivado del incumplimiento.*



En efecto, la acción indemnizatoria no se encuentra ligada únicamente en sede contractual a la resolución o cumplimiento forzado de lo pactado, puede entonces cobrar identidad propia, como acción principal, aunque asociada a una de las variantes referidas- resolución o cumplimiento forzado-, como a ninguna de ellas, sin perjuicio que para ponderar esta pretensión resulta indispensable vincularla con el hecho en que se le hace descansar. Entonces ante la entidad independiente que la ley prevé" en general, no existen razones para vincularla de manera determinante con cada una de aquellas acciones de resolución y cumplimiento, como tampoco para entenderla accesoria a las mismas, en especial cuando se reclama la reparación de daños morales. Una razón fundamental surge para ello: tanto la teoría clásica, al considerar que la indemnización es la misma obligación cuyo cumplimiento se logra por medio de la justicia en naturaleza o por equivalencia, como por la teoría moderna que indica que la indemnización es una nueva obligación, lo que permite arribar a la conclusión que se trata de una obligación principal, nunca accesoria. En sentido contrario, la interpretación exegética del artículo 1489 del Código Civil deriva de una lectura literal del mismo, se contrapone a la reparación integral del acreedor. La indemnización permite colmar toda aquella parte del interés del acreedor insatisfecho por causa de incumplimiento, a la que los otros remedios no llegan o no pueden llegar, permitiendo así la realización del interés del acreedor en la prestación, afectada por el incumplimiento. (Álvaro Vidal, *La protección del comprador: Régimen de la Convención de Viena y su contraste con el Código Civil*, Edit. Universitarias de Valparaíso, pág. 198). DECIMOQUINTO: Que en este mismo sentido la profesora Patricia López Díaz, en su publicación sobre *La indemnización compensatoria por incumplimiento de los contratos bilaterales como remedio autónomo en el Derecho Civil Chileno* (Revista Chilena de Derecho Privado N° 15, en prensa) sostiene:

“Un segundo enfoque para abordar dicha autonomía, consiste en sostener que el acreedor opta por demandar directamente la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, con el solo propósito de alcanzar la indemnización plena. El acreedor no podría obtener tal indemnización si demandara el cumplimiento forzado del contrato pues no existirían perjuicios por incumplimiento compensatorio- o la resolución- dado que en este caso la



indemnización tendría el carácter de complementaria, de modo que no abarcaría todos los perjuicios derivados del incumplimiento.” Continúa señalando que “...el ejercicio de la acción indemnizatoria implica la renuncia al cumplimiento forzado o a la resolución del contrato. La indemnización se presenta entonces como un remedio autónomo, cualquiera sea la forma en que se ejecute la obligación; la única diferencia es el efecto inmediato derivado de la indemnización, toda vez que si se trata de un contrato de tracto sucesivo permite al acreedor seguir vinculado jurídicamente al deudor, una vez que éste le indemnice los perjuicios; y si el contrato es de ejecución instantánea o ejecución diferida conlleva la extinción del contrato, efecto que el acreedor ha asumido, y por consiguiente, le resulta irrelevante-. Nótese que tal extinción del contrato no equivale a la resolución, dado que si así fuera la indemnización de perjuicios sería complementaria y no plena. Esta es, por tanto, la forma correcta de entender la autonomía indemnizatoria por incumplimiento de un contrato bilateral.”

Por su parte, el segundo fallo referido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, de 20 de junio de 2012, dictada en la causa Rol 8123-2010, reitera la misma doctrina, en los siguientes términos: *SEXTO bis: Que sustenta en primer lugar su alegato anulatorio, en lo que respecta al artículo 1.489 del Código Civil, en su presunta infracción en razón de que la sentencia ordena a la demandada pagar a la actora las sumas relacionadas en el fundamento precedente, a título de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, para luego agregar que este precepto sólo procede en el supuesto de que previamente se declare la resolución o el cumplimiento del contrato, hipótesis que en la especie no concurre, toda vez que simplemente se dispuso reparar los daños ocasionados, pero sin emitir pronunciamiento alguno acerca del señalado supuesto.*

La hermenéutica propuesta se inserta en una línea que calificaremos de tradicional, y a la cual adhieren algunos autores clásicos como FUEYO, (Fueyo Laneri, Fernando: “Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones” , 3a. Ed., EJCH, Stgo, 2.004, pp. 314, 315 y 337); ABELIUK (Abeliuk Manasevich, René: “Las obligaciones” , 5a. Ed., EJCH., 2.008, p. 530) y MEZA BARROS (Meza Barros, Ramón: Manual de Derecho Civil. De las obligaciones” , 10a ed., EJCH., Stgo., pp.



41-45), entre otros. Empero, pertinente es resaltar que la más moderna doctrina y jurisprudencia refutan este punto de vista. Así PIZARRO postula que en los contratos sinalagmáticos la acción indemnizatoria es independiente de la ejecución forzada. Agrega que “no parece razonable que la acción indemnizatoria exija necesariamente ir acompañada de la correspondiente acción de resolución o cumplimiento forzado. Si el acreedor manifiesta su voluntad de obtener la indemnización de perjuicios se desprende que de manera tácita está demandando el término de la relación contractual”. Concluye que “la interpretación exegética del artículo 1489 responde a una lectura literal del precepto que obstaculiza la reparación integral del acreedor” (Pizarro Wilson, Carlos: “La responsabilidad contractual en el derecho chileno”

[%20contractual.pdf](#)). En la misma línea, diversos autores sustentan la tesis de autonomía de la acción de indemnización de perjuicios derivada del incumplimiento contractual, respecto de la pretensión de cumplimiento. Es más, BARROS llega a sostener que no hay razón, desde el punto de vista de la justicia correctiva, para exigir, salvo imposibilidad, que el cumplimiento específico esté siempre disponible, porque en algunos casos es defendible que la solución más justa sea la reparación indemnizatoria (Barros Bourie, Enrique: “Finalidad y alcances de las acciones y los remedios contractuales”, en: Alejandro Guzmán Brito (editor), Estudios de Derecho Civil”, Ed. Legal Publishing, Stgo., 2.008, p. 409). La óptica reseñada, que calificamos de moderna, es compartida por otros distinguidos autores en el último tiempo (puede verse una completa referencia en Patricia Verónica López Díaz: “La indemnización compensatoria por incumplimiento de los contratos bilaterales como remedio autónomo en el derecho civil chileno”, en: Revista Chilena de Derecho Privado N° 15, dic. 2.010, pp. 65-113). Y es también la propugnada por esta Corte Suprema en diversos fallos recientes, como v. gr. en sentencia de 7 de diciembre de 2.010, en el rol N° 3.341/2009, redactada por el Ministro don Sergio Muñoz G., particularmente en sus considerandos 14° a 18°. La recurrente se abstiene de argumentar en su escrito de qué manera la decisión adoptada en la resolución que impugna, habría violentado el alcance atribuido a esa norma en la más reciente doctrina y jurisprudencia, expuesto precedentemente, lo

que es suficiente para no extenderse en consideraciones adicionales sobre el punto, concluyéndose simplemente que la opción elegida por la actora de impetrar sólo la indemnización de perjuicios, se adecua y no contraviene el alcance que cabe otorgarle al artículo 1.489 del código sustantivo.” (aparece destacado en el texto citado).

En consecuencia, subsidiariamente demandada la declaración de la obligación de la demandada de indemnizarle los perjuicios que ya han sido analizados en cuanto a su fundamento y monto, en calidad de acción autónoma y desligada de la de cumplimiento contractual.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, de lo dispuesto en los artículos 1437 y siguientes; 1445 y siguientes; 1489, 1545 y siguientes, 1560 y siguientes; y demás aplicables del Código Civil, artículo 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y demás disposiciones aplicables; solicita tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE, representado por don Teodoro Javier Ribera Neumann, y/o por don Juan Eleuterio Tosso Torres, ya individualizados, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, declarando:

1° .- Que la Universidad Autónoma de Chile, demandada, no cumplió con el contrato de prestación de servicios educacionales.

2° .- Que la demandada debe cumplir con el contrato de prestación de servicios educacionales, en orden a otorgar un cumplimiento de la obligación por equivalencia, de tal modo que obtenga económicamente tanto como habría significado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación incumplida por parte de la demandada.

3° .- Que la Universidad Autónoma de Chile es civilmente responsable de los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento;

4° .- Que, en dicha calidad, la Universidad Autónoma de Chile es condenada al pago de la indemnización de los perjuicios que he sufrido, ascendentes a la cantidad de \$1.167.000.000.- (mil ciento sesenta y siete millones de pesos), según el



detalle descrito en el cuerpo de la demanda, en el acápite “II.- Perjuicios experimentados” .

5° .- En subsidio de la petición formulada en el número “4° ” precedente, solicito que US. condene a la demandada a las sumas mayores o menores que en justicia se sirva determinar de conformidad con el mérito de los antecedentes expuestos y las pruebas que se rendirán en la etapa procesal pertinente que, en todo caso, resarzan de todo perjuicio al demandante.

6° .- Que las sumas a que sea condenada la demandada deberán pagarse debidamente reajustadas y devengarán intereses corrientes desde la fecha del incumplimiento o desde la fecha de la notificación de la demanda, hasta su entero y cumplido pago; o desde y hasta la fecha que US. determine en el fallo.

7° .- En subsidio de las peticiones anteriores, se declare la obligación autónoma y con prescindencia de la acción de cumplimiento, de indemnizarme los perjuicios que se me causaron como consecuencia de los hechos descritos en esta demanda.

8.- Que, en dicha calidad, la Universidad Autónoma de Chile es condenada al pago de la indemnización de los perjuicios que sufridos, ascendentes a la cantidad de \$1.167.000.000.- (un mil ciento sesenta y siete millones de pesos), según el detalle descrito en el cuerpo de la demanda, en el acápite “II.- Perjuicios experimentados” , o a las sumas mayores o menores que en justicia se sirva determinar de conformidad con el mérito de los antecedentes expuestos y las pruebas que se rendirán en la etapa procesal pertinente que, en todo caso, resarzan de todo perjuicio al demandante, con los reajustes e intereses indicados en el numeral “6° .-” precedente.

9.- Que, en todo caso, la demandada sea condenada al pago de las costas de la causa.

Que con fecha **25 de julio de 2017**, se **notificó personalmente** a la demandada.

Que con fecha **08 de septiembre del mismo año**, la demandada ya individualizada, comparece a través de don **CLAUDIO NICOLAS ALARCON**,



abogado, y procede a **contestar** la demanda, solicitando desde ya su rechazo con expresa condena en costas.

Al respecto señala lo siguiente: 1.- Don Reinaldo Yáñez González, demanda cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, y en subsidio indemnización, por cuanto la Excma. Corte Suprema, le ha denegado la calidad de abogado, a pesar de haber obtenido el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Autónoma de Chile. Manifiesta que el Sr. Yáñez era egresado de la Universidad de Concepción, pero nunca se licenció, no obstante lo cual realizaba actuaciones jurídicas, redactaba contratos, procuraba, etc. El actor se matriculó en la Universidad Autónoma de Chile el año 2010 y suscribió el correspondiente contrato de servicios educacionales. Ese mismo año 2010, solicitó y pagó los derechos por la convalidación de algunas de las asignaturas cursadas en la Universidad de Concepción, acreditando tener experiencia laboral significativa en el área. El año 2011, el actor celebró un segundo contrato de prestación servicios educacionales con la demandada, cursando y completando ese año, las asignaturas correspondientes al plan de estudios de la Carrera de Derecho. Con fecha 18 de Diciembre de 2013, el actor rindió y aprobó “con distinción” su examen de grado, obteniendo por nota un 5,7, otorgándosele el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. En consecuencia, su parte celebró dos contratos de prestación de servicios educacionales con el actor. Uno el año 2010 y otro el año 2011, los que se cumplieron cuando el actor terminó el respectivo año de estudios. Además, por la convalidación de las asignaturas, se realizó una actuación independiente, que se cobra por separado.-

2.- Se fundamenta la demanda en que la Universidad Autónoma, habría cometido un error al convalidar las asignaturas cursadas previamente por el actor en la U. de Concepción, ya que el Comité de Comunicaciones de la Excma. Corte Suprema emitió informe señalando que el actor, no cumplía con los requisitos para obtener el título de abogado por cuanto la convalidación fue efectuada, “sin que haya demostrado, previo a la convalidación, que poseía experiencia laboral significativa en el área. Este informe fue desestimado por la Excma. Corte Suprema, que resolvió otra cosa, al denegarle al actor el Título de abogado, pues la Excma. Corte



objetó la convalidación extendida por la Universidad Autónoma, señalando que ésta fue emitida “sin que aparezca de manera alguna en la resolución de convalidación que se hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final de la aludida norma” . Esta exigencia para la convalidación fue establecida por la Excma. Corte, en el Artículo 11 N° 4, del Auto Acordado de fecha 9 de Noviembre de 2015, que dice: “Se observará si en la resolución de convalidación se ha tomado en consideración, de forma expresa, la experiencia laboral del postulante y si esta es significativa en el área y se ha realizado durante los últimos diez años.”

Siendo que la convalidación de los estudios del actor fue efectuada por la Universidad el año 2010, su parte no tenía forma alguna de prever que cinco años después, sería obligatorio dejar constancia del motivo de la convalidación, señalando en forma expresa, en la misma Acta, que ello se hacía por tener el solicitante experiencia laboral significativa en el área. Por lo mismo, esta situación, no puede ser considerada como una falta de la Universidad, y aún si lo fuere, sería levísima, lo que niegan enfáticamente. Añade que su parte no ha incurrido en culpa leve ni grave, ya que obró conforme lo disponía la autoridad a la época de la convalidación, esto es, como lo disponía el Auto Acordado vigente en el momento, por lo que no procede la indemnización solicitada, ni por vía contractual ni por cualquier otra. Sobre este particular debe tomarse en consideración que la resolución del máximo tribunal, que deniega el título al actor, fue pronunciada en voto dividido, ya que algunos señores Ministros eran del parecer de aceptar su juramento.-

3.- La Universidad Autónoma no es parte en los procesos de titulación ante la Excma. Corte Suprema.

La Excma. Corte, detectó un problema de forma en la resolución de convalidación. En ninguna parte señala que el defecto sea insubsanable o que anule o invalide los estudios del demandante. Este sigue siendo Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Lo resuelto por la Excma. Corte, no produce cosa juzgada material y no puede ser estimado como un acto u omisión de la demandada o incumplimiento contractual, que amerite una sanción ni menos una Indemnización. No existe



incumplimiento contractual y tampoco plazo dentro del cual hubiese de cumplirse esta supuesta obligación que se reclama. Si las asignaturas no fueron validadas a satisfacción de la Corte, entonces el actor sólo debe cumplir lo resuelto y podría hacerlo cursando las asignaturas pertinentes. No existe inconveniente para que el actor complete las exigencias del máximo Tribunal, por lo que igualmente debe rechazarse la demanda.

4- Sostiene el actor que la Universidad incumplió su obligación contractual, pues estudió derecho con tal de ser abogado, cosa que la Universidad ofrece en su publicidad. Ello es falso, su parte no le ha ofrecido jamás el título de abogado al actor, ni le ha engañado, ni ofrecido falsas expectativas al Sr. Yáñez, quien ya era egresado de derecho de la U. de Concepción, cuando se trasladó a la Universidad Autónoma.

La Carrera de Derecho, como lo señala el artículo 11 inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 1980 y es sabido por todos quienes la han estudiado, conduce únicamente al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El Título de abogado lo otorga exclusivamente la Excm. Corte Suprema, por disposición del Art 521 del Código Orgánico de Tribunales, después de comprobar que el postulante reúne los requisitos legales para ello., en conformidad a lo señalado en los artículos 523 y 526 del Código citado. Entre las materias de Derecho Procesal I, figura el aprendizaje de estas normas jurídicas citadas y esta asignatura de Derecho Procesal I fue cursada por el actor en la Universidad de Concepción y le fue convalidada por sui parte, de forma tal, que no pudo haber engaño o error determinante de los contratos celebrados con la Universidad Autónoma. En consecuencia, para fundamentar su demanda el actor alega dolo en la publicidad de mi parte e ignorancia de la ley o error de derecho de su parte, cosas que son falsas, ya que él menos que nadie podía ignorar que el Título de abogado lo otorga la Corte Suprema.

Por lo mismo, la petición indemnizatoria carece de sustento factico básico y esencial, pues es el acto de autoridad de la Corte Suprema el que le niega el título de abogado, lo que hace desaparecer la relación de causalidad entre alguna acción u omisión de mi representada y los perjuicios sufridos por el actor, que



necesariamente debe vincular los hechos que la motivan, con la indemnización y el daño sufrido. Al respecto cobran aplicación los Arts.1452, 1453 y 1458 del Código Civil.

Ciertamente, si el actor alega error de su parte lo que debe pedir es la nulidad del contrato, pero en vez de ello pide su cumplimiento y una indemnización, que no proceden. Si el contrato fuere nulo, por dolo, error o cualquier causa, incluso por el desperfecto en la convalidación, ello no autoriza pedir una indemnización, pues la ley sólo da derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiere existido el acto o contrato nulo. (Art. 1687 C.C.)

La publicidad y las expectativas, no forman parte de ningún contrato celebrado entre la Universidad y el demandante, por cuanto la ley se presume conocida por todos. Por lo demás, la publicidad que exhibe el actor en su demanda, según en ella misma se expresa, es del año 2016, fecha muy posterior al egreso del actor; por lo que no se aplica a la relación contractual habida entre las partes de autos los años 2010 y 2011. Tampoco puede ser calificada, nuestra publicidad de engañosa y menos aún en este Tribunal de US., ya que el conocimiento de estas materias corresponde a los Juzgados de Policía Local.

5.- La posibilidad de obtener el título de abogado es alta, respecto de todas las personas que obtienen el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas, pero es la Excma. Corte Suprema quien otorga privativamente el título de abogado, según lo establecido en la Ley y los Autos Acordados de fecha 9 de Mayo de 2008 y de fecha 9 de Noviembre de 2015. Posiblemente en el futuro, se establezca un examen de suficiencia de los Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, el que habría de rendirse ante los Jueces Letrados, como han expresado algunos señores ministros del máximo Tribunal, en varias entrevistas, pero dicha modificación, si ocurre, no es imputable a mi representada y, quienes ingresaron a la Universidad cuando ese requisito no era exigible para jurar, no adquieren el derecho de demandaría, por una actuación ajena al ámbito de sus competencias y sus obligaciones contractuales. Añade que su parte sólo ofrece la Carrera de Derecho, que conduce al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Las expectativas del actor, no son parte del contrato, y siendo solo meras expectativas,



no constituyen derecho. Las simples expectativas son las esperanzas de adquisición de un derecho fundado en la ley vigente y aún no convertidas en derecho por falta de alguno de los requisitos exigidos por la misma la ley. Dado que la posibilidad de adquirir el título de abogado, siempre va a depender de las normas jurídicas que se dicten al momento de ingresar la solicitud a la Excma. Corte Suprema, es que se trata sólo de una mera expectativa, mientras no se cumplan con todos los requisitos que el máximo tribunal requiera o pueda requerir. Por ello, es que los Autos Acordados de la Excma. Corte Suprema rigen in actum, y no son retroactivos, pues no afectan ningún derecho adquirido. Las meras expectativas, cuando se ven frustradas, no generan ni pueden generar daño emergente, lucro cesante o daño moral. Por fundadas que sean no son indemnizables, porque no constituyen derechos que formen parte del patrimonio de una persona. Mi parte no ha privado de ningún derecho al actor y los contratos celebrados con éste fueron cumplidos de buena fe por mi representada, lo que debe presumirse. En la especie, es el acto de autoridad ejercido por la Corte Suprema el que retarda la posibilidad de ser abogado al actor, acto de autoridad que constituye fuerza mayor, cuya ocurrencia exime de responsabilidad a mi representada en los eventuales e hipotéticos perjuicios sufridos por el actor.

6.- El actor solicitó a su parte el año 2010, la convalidación de las asignaturas que había cursado anteriormente en la Universidad de Concepción. La convalidación no formó parte de ninguno de los contratos de prestación de servicios educacionales habidos entre el actor y la demandada. Es un acto académico independiente, en virtud del cual y a solicitud del interesado, se inicia un estudio de equivalencias de contenidos temáticos de las asignaturas cursadas en la Universidad de origen con las asignaturas que dicta la Universidad de destino y comprobada esta circunstancia se procede, por medio de una resolución, a tener por aprobadas las asignaturas correspondientes. Esta actuación no se efectúa de oficio, sino que se hace a petición de parte y en interés exclusivo del solicitante, quien puede completar sus estudios en menor tiempo y a menor costo. Su parte no obtiene provecho de ello, pues otorga el mismo título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, a pesar de recibir menos ingresos, ya que el beneficiado por la convalidación cursa menos



asignaturas del plan de estudios. Por ello, las acciones intentadas son del todo erradas. La convalidación, no puede ser catalogada de contrato. De concluirse lo contrario cobraría aplicación el Art.1547 del C.C. pues aún en caso de poder calificarse esta actuación como contrato, como éste redundaría en interés exclusivo del solicitante, su parte responde sólo de culpa grave o dolo, cosa que no se le imputa y que igual niega.

7.- Los daños que reclama el actor son igualmente irreales y no dicen relación con el presunto incumplimiento del contrato que corresponda.

Así, son errados los cálculos que efectúa el actor, para justificar el daño emergente, basado en el costo de matrícula, aranceles, traslados para asistir a clases, compra de libros, fotocopias y materiales, puesto que las asignaturas cursadas en la Universidad Autónoma de Chile durante los años 2010 y 2011, no fueron objetadas. Por el contrario, los respectivos contratos se encuentran cumplidos a satisfacción de la Excma. Corte Suprema, que sólo objetó el Acta de Convalidación, sin hacer tacha alguna respecto de las asignaturas cursadas en la Universidad demandada bajo el imperio de los contratos de prestación de servicios educacionales correspondientes a los años 2010 y 2011. En esta parte además el actor incluye un ítem por \$6.480.000, que no corresponde y que sustenta en los gastos causados por el deterioro de su salud, lo que repite al pedir la indemnización del daño moral, pero esa enfermedad no fue provocada por la celebración del contrato de prestación de servicios educacionales ni su cumplimiento.

La petición de lucro cesante reitera en parte el cobro de las sumas pagadas por el actor o supuestamente no percibidas, mientras estudiaba en la Universidad Autónoma, bajo la vigencia de los contratos de prestación de servicios educacionales de los años 2010 y 2011, que ya fueron reclamadas como daño emergente y por lo mismo deben rechazarse.

En el resto los fundamentos de dicha petición, carecen de toda certidumbre, pues se sustentan en la hipótesis de que un abogado percibe y percibirá \$3.000.000, mensuales en promedio, a lo que se descuentan \$650.000 que el actor sí percibe mensualmente en la actualidad y eso multiplicado por 19 años, hasta llegar a los 65



años de edad, siendo que para cursar las asignaturas cuya convalidación rechaza la Excma. Corte sólo le bastarían tres años. Por lo demás, nadie sabe si vivirá tantos años y menos que podrá trabajarlos con igual energía y percibiendo permanentemente una suma tan elevada u otra distinta, existiendo personas que ganan más sin ser abogados y otras que ganan menos aun siéndolo. Estos daños son por lo mismo hipotéticos e inciertos y debe rechazarse su cobro, ya que el lucro cesante debe corresponder a aquella ganancia que se deja de percibir a consecuencia del incumplimiento y ocurre cuando hay una pérdida de una perspectiva cierta de beneficio. Una suma cierta es aquella que se colige de antecedentes fidedignos y no lo es aquella que se deduce de estadísticas o probabilidades de sueldo, que pueden cambiar según la situación del mercado laboral y que se multiplican por las expectativas de vida y salud del actor, que también es una variable.

En cuanto al daño moral, debe igualmente rechazarse la demanda, pues no procede su cobro en sede contractual, máxime si no existe dolo de nuestra parte. En efecto, según señala el Art. 1558 del Código Civil; “Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.” Son perjuicios previstos, aquellos que se previeron o que pudieron ser previstos, esto es, aquellos conocidos o que podían conocerse al tiempo de celebrarse el contrato, y los segundos, aquellos que las partes no han previsto o no han podido prever en ese mismo momento. La previsibilidad del daño igualmente engloba su amplitud y desde todo punto de vista la demanda es desproporcionada y excesiva. Los perjuicios morales que reclama el actor no eran previsibles al tiempo del contrato, pues derivan de su condición de salud deteriorada por una enfermedad. Mi parte no podía saber al tiempo del contrato que el actor padecía de diabetes.

El Art. 1558 del Código Civil, por razones de justicia y equidad limita la responsabilidad del deudor no doloso a los daños que pudieron preverse al tiempo del contrato. Esta limitación, no resulta irrazonable ni caprichosa, como sea que



resultaría inícuo castigar por igual a quienes hayan incurrido en dolo y a los que hayan incurrido en culpa, cosa que repugna a la tradición culpabilista, en que se cimenta la responsabilidad contractual, y encuentra respaldo en referentes internacionales como la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercancías y los Principios Unidroit, lo que reafirma su razonabilidad. Medie dolo o no, los únicos daños indemnizables son aquellos que tienen relación causal directa con el incumplimiento del contrato, y que son por definición del Art. 1556 del C.C., el daño emergente y el lucro cesante, pues el daño moral por regla general, es una consecuencia indirecta. La salud complicada del actor es consecuencia de su diabetes, siendo dicha enfermedad preexistente al contrato, la causa basal del perjuicio que cobra y no los hechos de su parte.

En el caso de autos, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, reclamados tampoco tienen por causa directa el supuesto incumplimiento de los contratos celebrados con su parte, pues estos no contemplan la obligación de titular de abogado al actor.

Por ello no se cumplen en autos los requisitos para otorgar una indemnización de perjuicios y debe rechazarse la demanda, pues en suma:

- a) su representada jamás se ha obligado para con el actor a otorgarle el título de abogado, ya sea en algún contrato escrito o consensual celebrado entre las partes;
- b) su representada nunca ha realizado publicidad engañosa que haya inducido al actor a contratar con ella, hecho que de todas formas, debe ser conocido exclusivamente por el tribunal designado por la ley, que no es éste y cuya acción para interponerla a la fecha se encuentra prescrita;
- c) su representada no ha incurrido en responsabilidad contractual, puesto que los contratos de prestación de servicios, se cumplieron y agotaron cabalmente con la obtención por parte del actor del título académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, lo que ocurrió el año 2014; y la convalidación no es un contrato.



d) su representada no ha actuado culpable o dolosamente en el cumplimiento de sus obligaciones emanadas de los contratos celebrados con el actor.

POR TANTO, conforme los Arts. 309 y siguientes del C. P. C. y Arts.1452, 1453, 1458, 1558, 1687 y restantes citados del Código Civil, solicita tener por contestada la demanda y rechazarla por improcedente, en mérito a las defensas y excepciones opuestas y por no cumplirse los requisitos para otorgar una indemnización de perjuicios, en todas sus partes, con costas.

Que con fecha 20 de septiembre de 2017, consta la **réplica** de la demandante, mediante la cual manifiesta que ratifica la demanda en todas sus partes y además, en cuanto a la contestación de la demanda realizada, señala lo siguiente:

II.- HECHOS RECONOCIDOS y/o NO CONTROVERTIDOS EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Con el objeto de circunscribir la controversia es útil dejar asentado -desde ya- varios hechos que han sido expresamente reconocidos en la contestación de la demanda o que, por lo menos, en varios casos no han sido controvertidos y que, por lo tanto, han quedado fuera de discusión.

Tales hechos son los siguientes:

1. Que el demandante solicitó durante el año 2010 a la Universidad Autónoma la convalidación de las asignaturas de la carrera de derecho cursadas anteriormente en la Universidad de Concepción;
2. Que el demandante acreditó oportunamente a la Universidad Autónoma la experiencia laboral significativa en el área exigida como requisito para la convalidación;
3. Que la Universidad Autónoma convalidó asignaturas de la carrera de derecho cursadas anteriormente por el demandante en la Universidad de Concepción;
4. Que el demandante pagó oportunamente determinados derechos exigidos por la Universidad Autónoma para acceder a la convalidación;



5. Que su representado cursó los años académicos impartidos por la Universidad Autónoma durante 2010 y 2011, aprobando los ramos faltantes, o no convalidados, para completar la malla curricular para la carrera de derecho;
6. Que entre la Universidad Autónoma y el demandante se celebró un contrato de prestación de servicios educacionales;
7. Que la Universidad Autónoma otorgó al demandante el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales;
8. Que la Excma. Corte Suprema rechazó la solicitud de juramento del demandante por circunstancias atribuibles a la Universidad Autónoma.

A continuación, evidenciamos cómo se ha producido el reconocimiento en estos casos: 1. Que el demandante solicitó durante el año 2010 a la Universidad Autónoma la convalidación de las asignaturas de la carrera de derecho cursadas anteriormente en la Universidad de Concepción. Esto es reconocido expresamente por la demandada, quien señala en la página 6 de la contestación de la demanda lo siguiente: “6.- El actor solicitó a mi parte el año 2010, la convalidación de las asignaturas que había cursado anteriormente en la Universidad de Concepción.” 2. Que el demandante acreditó oportunamente a la Universidad Autónoma la experiencia laboral significativa en el área exigida como requisito para la convalidación. Esta circunstancia es también expresamente reconocida, en la página 1 de la contestación, donde la demandada dijo: “Ese mismo año 2010, solicitó y pagó los derechos por la convalidación de algunas de las asignaturas cursadas en la Universidad de Concepción, acreditando tener experiencia laboral significativa en el área.” 3. Que la Universidad Autónoma convalidó asignaturas de la carrera de derecho cursadas anteriormente por el demandante en la Universidad de Concepción. Si bien este preciso hecho no es reconocido expresamente por la demandada, las circunstancias que sí reconoce, así como sus defensas y excepciones así lo suponen. Por lo demás es presumible que dados los demás hechos reconocidos, tales como haber cursado los años 2010 y 2011 y habérsele otorgado el grado académico, como veremos, necesariamente debió haberse producido la convalidación de las asignaturas cursadas en la Universidad de Concepción. 4. Que



el demandante pagó oportunamente determinados derechos exigidos por la Universidad Autónoma para acceder a la convalidación. Este hecho es reconocido por la demandada, en la página 1 de la demanda, donde dice: “Ese mismo año 2010, solicitó y pagó los derechos por la convalidación de algunas de las asignaturas cursadas en la Universidad de Concepción...” 5. Que el demandante cursó los años académicos impartidos por la Universidad Autónoma durante 2010 y 2011, aprobando los ramos faltantes, o no convalidados, para completar la malla curricular para la carrera de derecho. Esta circunstancia es expresamente reconocida por la demandada, que expresamente señala que el demandante fue alumno de la Universidad durante aquellos años. 6. Que entre la Universidad Autónoma y el demandante se celebró un contrato de prestación de servicios educacionales. Esta circunstancia no es ni podría ser discutida por la demandada, en razón de los demás reconocimientos y declaraciones que realiza en la contestación.

Ahora bien, dado que el contrato de prestación de servicios educacionales no se escrituró, solamente deberá ser materia de prueba su contenido y las obligaciones y derechos que de él surgieron para las partes.

7. Que la Universidad Autónoma otorgó al demandante el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Dice el mandatario de la demandada, en la página 9 de la contestación que “mi representada no ha incurrido en responsabilidad contractual, puesto que los contratos de prestación de servicios, se cumplieron y agotaron cabalmente con la obtención por parte del actor del título académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, lo que ocurrió el año 2014...” Al incumplimiento del contrato de prestación de servicios educacionales y la forma en que éste se configura nos referiremos más adelante. 8. Que la Excma. Corte Suprema rechazó la solicitud de juramento del demandante por circunstancias atribuibles a la Universidad Autónoma. En la página 3 de la contestación se señala: “La Excma. Corte, detectó un problema de forma en la resolución de convalidación...” En la página 2 de la contestación, tratando de explicar -erradamente- la decisión tomada por la Excma. Corte Suprema, dice: “Siendo que la convalidación de los estudios del actor fue efectuada por la Universidad el año 2010, mi parte no tenía forma alguna de prever que cinco años después, sería



obligatorio dejar constancia del motivo de la convalidación, señalando en forma expresa, en la misma Acta, que ello se hacía por tener el solicitante experiencia laboral significativa en el área.” Aquí, no desconoce ni niega la Universidad que la decisión de la Excma. Corte Suprema de rechazar la solicitud de juramento del demandante - tal como aseguramos - se sustenta en circunstancias que le son atribuibles a la demandada. La Universidad Autónoma centra aquí su defensa en tildar de erróneo el fundamento de derecho de la resolución de la Excma. Corte Suprema, lo cual no es efectivo, como explicaremos a continuación, bajo el título “2° Que la Universidad Autónoma no tenía forma de prever que era obligatorio dejar constancia en la respectiva resolución del motivo de la convalidación” Del Capítulo “III. EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS CONTROVERTIDAS. EXCEPCIONES, ALEGACIONES Y/O DEFENSAS OPUESTAS O FORMULADAS POR LA DEMANDADA.” , a lo cual nos remitimos.

En consecuencia, reconocidos los hechos reseñados en los números precedentes, ellos deberán ser tenidos por establecidos a la hora de fijar los que no lo están, esto es, los hechos controvertidos, porque los que hemos reseñado, si bien son substanciales y pertinentes, no están controvertidos.

III. EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS CONTROVERTIDAS. EXCEPCIONES, ALEGACIONES Y/O DEFENSAS OPUESTAS O FORMULADAS POR LA DEMANDADA.

En cuanto a las circunstancias controvertidas, se referirá a continuación a cada una de las excepciones, alegaciones y/o defensas opuestas o formuladas por el demandado en el mismo orden en que han sido planteadas. Así, la Universidad Autónoma ha señalado en su contestación:

1° Que la demandada Universidad Autónoma habría cumplido el contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con el demandante, Reinaldo Yáñez González; 2° Que la Universidad Autónoma no tenía forma de prever que era obligatorio dejar constancia en la respectiva resolución del motivo de la convalidación; 3° Que se trataría de un caso de culpa levísima; 4° Que la demandada obró conforme a lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema; 5° Que



la Universidad Autónoma no ofreció al demandado el título de abogado, no existiendo - señala - incumplimiento de su parte; 6° Que no ha existido dolo - que mi parte habría imputado en la demanda - en la publicidad de la Universidad Autónoma; 7° Que la obtención de la calidad de abogado es una mera expectativa, por lo que no formaría parte del contrato; 8° Que las resoluciones dictadas por la Excm. Corte Suprema constituyen un caso de fuerza mayor que eximiría de responsabilidad a la demandada. 9° Que los daños que se reclaman no serían reales y no guardarían relación con el incumplimiento imputado.

Entonces, cada una de estas excepciones y/o defensas y cómo, en cada caso, no concurren los hechos alegados de tal modo que impida u obstaculice el acogimiento de la acción de la demanda. Luego, ésta deberá ser acogida.

1° Que la demandada Universidad Autónoma habría cumplido el contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con el demandante, Reinaldo Yáñez González. Debe señalar en forma precisa que no se suscribió (firmó) ningún contrato de prestación de servicios educacionales entre el demandante y la Universidad Autónoma, pues en ningún momento se escrituró un pacto en tal sentido, pero éste efectivamente fue celebrado, surgiendo derechos y obligaciones para las partes. Una de las obligaciones de la Universidad Autónoma era la de entregar servicios aptos, que habilitaran al demandante para la obtención del título de abogado, más concretamente un grado de Licenciado En Ciencias Jurídicas y Sociales legalmente apto y suficiente para optar al título de abogado. Aquél es un elemento de la naturaleza del contrato de prestación de servicios educacionales en el caso de la carrera de derecho, esto es, uno de aquellos que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial (Art. 1444 del Código Civil). El ingreso a una Universidad a cursar la carrera de derecho se hace con el propósito de obtener la calidad de Abogado, y la contraprestación a las obligaciones que del contrato de prestación de servicios educacionales surgen para el alumno, es la entrega de unos servicios que permitan al Licenciado en Ciencias Jurídicas, previo el cumplimiento de los demás requisitos, obtener el título perseguido.



Además, la Universidad Autónoma incluye en su publicidad esa referencia; que el servicio que presta es apto para que la Excma. Corte Suprema luego otorgue al Licenciado en Ciencias Jurídicas de dicha casa de estudios el título de abogado. Evidentemente, la demandada no prometió ni se obligó a otorgar ella directamente el título de abogado al demandante, ni lo hemos señalado así en la demanda.

2° Que la Universidad Autónoma no tenía forma de prever que era obligatorio dejar constancia en la respectiva resolución del motivo de la convalidación. Aquí es necesario aclarar, en primer lugar, cuál es el texto expreso tanto del informe del Comité de Comunicaciones de la Excma. Corte Suprema, así como de la resolución de fecha 18 de agosto del 2015, del máximo Tribunal. Esto, porque la contraria -con la evidente intención de confundir a US.- señala al respecto lo siguiente: 2.- Se fundamenta la demanda en que la Universidad Autónoma, habría cometido un error al convalidar las asignaturas cursadas previamente por el actor en la U de Concepción, ya que el Comité de Comunicaciones de la Excma. Corte Suprema emitió informe señalando que el actor, no cumplía con los requisitos para obtener el título de abogado por cuanto la convalidación fue efectuada sin que haya demostrado, previo a la convalidación, que poseía experiencia laboral significativa en el área. Este informe fue desestimado por la Excma. Corte Suprema, que resolvió otra cosa, al denegarle al actor el Título de abogado, pues la Excma Corte objetó la convalidación extendida por la Universidad Autónoma, señalando que ésta fue emitida sin que aparezca de manera alguna en la resolución de convalidación que se hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final de la aludida norma”. Sin embargo, las supuestas citas que realiza la demandada no se ajustan a lo que realmente dicen aquellos actos.

El texto del informe del Comité de Comunicaciones es el siguiente: Que a esta Corte Suprema, previo a otorgar el título de abogado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, le corresponde verificar, entre otras exigencias, que el postulante al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una universidad, conformidad a la ley, lo cual, en el caso de titulados de una universidad que alisaron parte de sus estudios en otra carrera o institución, supone comprobar que haya existido convalidación de



asignaturas entre una y otra y que tal operación se haya realizado en conformidad a la reglamentación vigente en la casa de estudios de titulación, tal como se establece en el Auto Acordado dictado sobre la materia con fecha nueve de mayo de dos mil ocho.

Que el artículo 51 del Reglamento General del Alumno de la Universidad Autónoma de Chile, en la que el postulante obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas, cuya copia rola a fojas 31 y siguientes, dispone que: “Se homologarán o convalidarán asignaturas aprobadas dentro de los diez años menores a la fecha de solicitud de homologación. Este plazo no regirá respecto de los alumnos que acrediten experiencia laboral significativa en el área” .

Que de acuerdo con lo anterior, la convalidación efectuada en el presente caso Universidad Autónoma de Chile, mediante resoluciones de Dirección sede Talca N° 16/2010 y N° 118/2012, de fecha 26 de febrero de 2010 f5 de julio de 2012. respectivamente, de hojas 9 y siguientes, de las asignaturas abadas por el postulante en la Universidad de Concepción, en el periodo académico comprendido entre los años 1987 a 1995, no cumple con lo dispuesto del citado artículo 69 de su propia reglamentación académica, por cuanto ha transcurrido un lapso muy superior a los diez años entre la fecha de aprobación de mismas en la Institución de origen y la respectiva solicitud de convalidación. Es en el establecimiento de egreso, sin que haya demostrado que acreditó ante la Universidad, previo a la convalidación, que poseía merienda laboral significativa en el área. Y lo que dice la resolución de la Excma. Corte Suprema es lo siguiente:

Segundo: Que a esta Corte Suprema, previo a otorgar el título de otorgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521 del citado Código, le corresponde verificar, entre otras exigencias, que el postulante tenga el I grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una universidad, en conformidad a la ley, lo cual, en el caso de titulados de una universidad que airearon parte de sus estudios en otra institución, supone comprobar que haya existido convalidación de asignaturas entre una y otra y que tal operación se haya realizado en conformidad a la reglamentación vigente en la casa de estudios de titulación, tal como se



establece en el Auto Acordado dictado sobre la materia con fecha 9 de mayo de 2008;

Tercero: Que el artículo 51° del Reglamento General del Alumno de la universidad en mención, agregado a fojas 31, dispone que no sólo se invalidarán asignaturas aprobadas dentro de los diez años anteriores a la [fecha de solicitud y, agrega: “Este plazo no regirá respecto de los alumnos que acrediten experiencia laboral significativa en el área”;

Cuarto: Que en el presente caso, la convalidación de estudios autorizada por la Universidad Autónoma de Chile, mediante Resolución de la Inspección Académica sede Talca N° 16/2010, de 26 de febrero de 2010, impide asignaturas aprobadas por el postulante en la Universidad de Concepción entre los años 1987 y 1995, según consta en el certificado de fojas 5 materias que se encuentran fuera del plazo de diez años permitido en el atado artículo del reglamento -considerando que conforme a éste, el momento que marca el inicio del cómputo de dicho lapso corresponde a la época de aprobación de la asignatura a convalidar-, sin que aparezca de manera alguna en la resolución de convalidación que se hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final de la aludida norma.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 521 y 523 del Código Orgánico de Tribunales, 35 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza; en el Auto Acordado de esta Corte de 9 de mayo de 2008 y en ejercicio de las atribuciones delegadas por el Tribunal Pleno en la sesión de 5 de noviembre de 2012, se rechaza la solicitud de juramento formulada en lo principal de la presentación de fojas 47.

Realizar estas precisiones es del todo importante, desde que resulta claro de los textos antes copiados, en primer lugar, cuál es el motivo por el cual se rechazó la solicitud de juramento del demandante, esto es, por no aparecer de manera alguna en la resolución de convalidación que la Universidad hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final del artículo 51° del Reglamento General del Alumno de la Universidad Autónoma de Chile de 10 de abril de 2006. Por otra parte, los textos exactos copiados precedentemente permiten aclarar que la



resolución de la Excma. Corte Suprema no se sustentó - como asegura la demandada en la contestación de la demanda - en un Auto Acordado de 9 de Noviembre de 2015.

En primer lugar, porque ese Auto Acordado es posterior a la resolución aludida, de fecha 18 de agosto de 2015. Y porque ésta es clara en cuanto señala que lo resuelto se fundamenta en el auto acordado de 9 de mayo de 2008 y en el Reglamento General del Alumno de la Universidad Autónoma, especialmente en lo dispuesto en su artículo 51°. Todas aquellas normas se encontraban vigentes al tiempo de la convalidación, debiendo en consecuencia ser observadas por la Universidad al realizarla, y no lo fueron.

3° Que se trataría de un caso de culpa levísima.

Afirma la demandada que de ser efectivos los hechos indicados en la demanda, se trataría de un caso de culpa levísima. Así lo asegura en la página 2 de la contestación. Es necesario precisar que el contrato de prestación de servicios educacionales objeto del presente juicio es de aquellos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. Al demandante, en la habilitación para la obtención del título de Abogado, y a la Universidad, en la obtención de las sumas correspondientes a las matrículas, aranceles y demás derechos pagados. Tampoco se le ha imputado a la Universidad Autónoma un tipo de culpa distinto a la culpa leve. En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 1547 del Código Civil, y no habiéndose pactado algo distinto, el deudor es responsable de culpa leve. Ello es más evidente cuando se considera que se trata de un incumplimiento relativo a una actividad a la cual se dedica ordinariamente la Universidad Autónoma, siendo éste un ámbito en el cual la conducta que despliega debe proporcionar seguridad al alumno.

4° Que la demandada obró conforme a lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema. Señala a este respecto que habría actuado como lo disponía el auto acordado sobre la materia vigente al momento de la convalidación. Como señalamos más arriba, y se desprende claramente de la resolución de la Excma. Corte Suprema, el máximo tribunal, observando lo dispuesto en el Auto Acordado de 9



de mayo de 2008 -vigente a la época de la convalidación-, lo que hizo fue comprobar, por haber cursado el demandante asignaturas en otra universidad, que hubiere existido convalidación, y que ésta se hubiere realizado en conformidad a la reglamentación vigente en la casa de estudios de titulación. Luego de analizar el cumplimiento de estas circunstancias, y concluyendo que no concurrieron, rechaza la solicitud de juramento del demandante. 5° Que la Universidad Autónoma no ofreció al demandado el título de abogado, no existiendo - señala - incumplimiento de su parte. Debe insistir, que en ninguna parte de la demanda se asegura que la Universidad Autónoma se hubiere obligado a otorgar al demandante el título de abogado. Esta línea de defensa de la demandada no tiene asidero alguno, y solamente demuestra su intención de distraer y confundir. Lo que se le imputa a la Universidad Autónoma no es el no otorgamiento por esa casa de estudios de la calidad de Abogado, sino que el grado de Licenciado otorgado, que constituye la culminación del proceso educacional contratado con la demandada, no fue apto, fue inepto e insuficiente para un fin que le es propio como lo es la habilitación para obtener el título de Abogado. Su representado es poseedor de una Licenciatura inútil que no sirve -lo que ya está sentenciado por el Tribunal de mayor jerarquía- para ejercer la abogacía.

6° Que no ha existido dolo - que mi parte habría imputado en la demanda - en la publicidad de la Universidad Autónoma. Nuevamente la demandada trata de desviar la atención de la controversia. En ninguna parte de la demanda se asegura que la Universidad Autónoma hubiere actuado dolosamente, ni en su publicidad, ni en el iter contractual, ni de modo alguno.

Su referencia a la publicidad que de la carrera de Derecho hace la Universidad Autónoma tiene como objetivo demostrar una circunstancia que no podrá negar la demandada: Que tanto la Universidad como las personas que ingresan a la carrera de Derecho entienden que el propósito de cursar la carrera es la obtención del título de Abogado, y que el otorgamiento por parte de la Universidad de las condiciones suficientes para ello forma parte del contrato de prestación de servicios.

7° Que la obtención de la calidad de abogado es una mera expectativa, por lo que no formaría parte del contrato. Nuevamente la demandada se desvía de la



controversia del juicio. Considera que ninguna relación tiene la distinción entre derechos adquiridos y meras expectativas en la materia de este juicio. La Universidad incumplió el contrato de prestación de servicios, y entre ese incumplimiento y la decisión de la Excma. Corte Suprema existe una indiscutible relación de causalidad.

Para ello, basta el ejercicio de verificación de sustituir la conducta negligente de la demandada por aquella que habría implicado el cumplimiento de su obligación de prestar un servicio apto para que la Excma. Corte Suprema otorgara al demandante el título de Abogado. Claramente el curso causal habría sido distinto, y no habría existido motivo para que fuera rechazada la solicitud de juramento. Máxime cuando el demandante cumplía todos los demás requisitos necesarios para la obtención del título de abogado. Entonces, siguiendo su línea argumentativa, la Universidad Autónoma debería señalar a las personas que tienen intención de ingresar a estudiar la carrera de Derecho en esa casa de estudios el próximo año y los siguientes, y a los alumnos que actualmente la cursan, que en realidad van a celebrar, o ya celebraron, un contrato en el que el alumno es obligado a pagar los aranceles y demás derechos, pero que las obligaciones de la Universidad no consisten en proporcionar un proceso educacional apto y suficiente, que lo habilite para la obtención del título de Abogado, sino solamente otorgarle el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, y que si la Excma. Corte Suprema rechaza la solicitud de juramento por circunstancias imputables a la Universidad, ésta no será responsable, sino que el alumno podrá siempre cursar la carrera nuevamente para obtener el título, como dice la demandada en la página 3 de la demanda, luego de reconocer que el máximo tribunal detectó defectos en la resolución de convalidación.

Diversa sería la situación del demandante si, habiéndole otorgado la Universidad el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas en condiciones aptas - que reconocidamente no fue así -, y habiendo aprobado la práctica profesional y cumpliendo todos los demás requisitos, la Excma. Corte Suprema de manera injustificada rehusara otorgarle el título de abogado. Pero no es esta la situación en que se encuentra el demandante.



8° Que las resoluciones dictadas por la Excma. Corte Suprema constituyen un caso de fuerza mayor que eximiría de responsabilidad a la demandada. No puede configurarse aquí un presupuesto de fuerza mayor. La fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, supone un suceso imprevisible, irresistible y exterior -ajeno al deudor-, que le impide cumplir una obligación. Así, la circunstancia que constituye la fuerza mayor debe existir al momento en que la obligación debe ser cumplida, haciendo imposible su cumplimiento. En este caso, el acto de autoridad debió ser causa de la imposibilidad de cumplir, cuyo no es el caso. Por el contrario, la decisión de la Excma. Corte Suprema es una consecuencia del incumplimiento de la demandada. No es una circunstancia que hubiere impedido a la Universidad Autónoma cumplir sus obligaciones en tiempo y forma.

Basta examinar el modo en que se sucedieron temporalmente los hechos. Ocurrió primero el incumplimiento de la Universidad Autónoma; la defectuosa dictación de la resolución de convalidación y el otorgamiento de una Licenciatura inepta. Y después, como consecuencia de dicho incumplimiento, fue rechazada la solicitud de juramento.

Esta defensa de la Universidad es tan alejada del derecho como sería la alegación de fuerza mayor de un constructor en contra de la demanda deducida por el dueño de la obra a quien la municipalidad no otorga la recepción definitiva en razón de defectos constructivos imputables al primero. ¿Sería atendible esa defensa del constructor demandado? La respuesta es evidentemente negativa.

9° Que los daños que se reclaman no serían reales y no guardarían relación con el incumplimiento imputado. Desde ya aseveramos que concurren respecto de los daños alegados todos los elementos que hacen procedente su imputabilidad a la Universidad Autónoma, lo cual será materia de prueba en la secuela del juicio. A partir de la prueba que se rendirá en la fase procesal correspondiente se deberá determinar las consecuencias que la legislación previó para estos casos, en torno a la indemnización de los perjuicios causados por la demandada, en los términos indicados en la demanda.



Que la demandada con fecha **02 de octubre de 2017, duplica**, dando por íntegramente por reproducidos los fundamentos de hecho y de derecho señalado al momento de contestar la demanda, así como las peticiones concretas contenidas en esa presentación, todo ello con expresa condena en costas. Sin perjuicio de lo anterior, conforme lo expuesto por la contraria al replicar, corresponde efectuar las siguientes precisiones: En primer lugar, su representada jamás ha reconocido haber actuado en estos hechos con “culpa levísima”, tal como afirma la parte demandante en su acápite H de la réplica, titulado hechos reconocidos y/o no controvertidos en la contestación de la demanda.

Por el contrario, en la página 2, N° 2 de la contestación de la demanda, su parte sostiene que en el caso de la convalidación, la Universidad no ha cometido FALTA ALGUNA, y sí así fuera, LO QUE NIEGA EN FORMA EXPRESA, esa falta sería levísima, y concluye textualmente: “Por lo mismo, esta situación, no puede ser considerada como una falta de la Universidad, y aún si lo fuere, sería levísima, lo que negamos enfáticamente” y lo niega, puesto que jamás ha estado en posición de adivinar que en el año 2015, se le iba a exigir a sus licenciados requisitos diversos a los exigidas a la época de la convalidación, que ocurrió el año 2010.

Toda la argumentación del demandante en su réplica, se basa en el hecho que su representada habría incurrido en un incumplimiento al convalidar los ramos cursados por el actor en la Universidad de Concepción, con más de 10 años de antelación a la fecha de solicitud de convalidación.

Su parte ha sostenido que la convalidación de asignaturas del demandado, no es un contrato, por lo que no le corresponde responsabilidad contractual por el hecho, pero también ha declarado que la finalidad del contrato de prestación de servicios celebrado con el actor, era conferirle el grado académico correspondiente, puesto que el título de abogado lo otorga la Corte Suprema.

El acto de convalidar ramos es una actuación propia y exclusiva de la Universidad, que se realiza conforme al Reglamento General del Alumno, el cual no establece



como requisito el hecho de explicitar la razón de la convalidación, sólo señala que hacer cuando los alumnos acreditan experiencia laboral.

El Auto Acordado que contiene las Instrucciones para la tramitación del expediente sobre juramento de abogados de la Excma. Corte Suprema, de fecha 02 de Abril de 2008, y su complemento de fecha 09 de mayo de 2008, tampoco establecen ésta obligación de expresar en la resolución que convalida, el hecho de hacerlo en virtud de “experiencia laboral significativa en el área” del alumno que solicita la convalidación. Por lo que resulta evidente que mi representada no tenía forma de saber que cinco años más tarde el criterio y el procedimiento empleado por la Excma. Corte Suprema cambiaría, impidiéndole al actor jurar por un acto de autoridad del máximo tribunal. Este requisito fue hecho público y explicitado por la Excma. Corte Suprema recién en el Auto Acordado de fecha 09 de Noviembre de 2015. Es decir, a partir de esa fecha el procedimiento establecido por la Excma. Corte para otorgar el título de abogado se encuentra claramente establecido.

La autoridad le negó la posibilidad de jurar como abogado al actor y ello no depende de la Universidad, ni del cumplimiento de alguna disposición legal o reglamentaria previamente establecida y que mi representada haya incumplido o debido adivinar, puesto que en ninguna de las disposiciones invocadas y vigentes a la fecha de la convalidación, aparece el requisito de “expresar en la resolución que convalida ramos, que dicha convalidación se realiza en virtud de haber acreditado el alumno experiencia laboral significativa”, por lo que lo ocurrido constituye fuerza mayor, puesto que es un acto de autoridad. Incluso más, consta del expediente de juramento presentada por el actor a la Excma. Corte Suprema, que éste acompañó todos los documentos que se tuvieron a la vista para convalidar los ramos e incluso una Resolución de Vicerrectoría de Talca N° 172/2015, donde se complementa la convalidación, de la forma que supuestamente requería el máximo tribunal, pero de igual forma la Excma. Corte Suprema, en voto dividido, estimó que el Sr. Yáñez no cumplía con los requisitos para jurar como abogado.

EN SINTESIS:

1.- No son controvertidos los siguientes hechos:



Que entre el demandante y la demandada se celebraron dos contratos de prestación de servicios educacionales.-Que la convalidación se realizó y pagó por separado el año 2010, según reconoce el actor en la réplica. Que la Excma. (porte sólo rechazó la convalidación, sin objetar los estudios realizados por el actor durante los años 2010 y 2011, al amparo de los contratos que se acompañan, y que firmados por el actor producen plena prueba en su contra.

2 - Como ya se dijo, y por si alguna duda cabe, su parte reitera que no reconoce culpa alguna por lo ocurrido al Sr. Yáñez y también lo lamenta, pero lo cierto es que no existía forma de prever que la Excma. Corte rechazaría su titulación “por no constar en la resolución de convalidación que se hacía aplicación de la situación de excepción prevista en el Art 51 el Reglamento del Alumno.”

En su reglamento no se consigna dicha obligación y la Excma. Corte estableció este requisito el año 2015, después de haber egresado el actor. Esta obligación tampoco existía demostrar lo contrario.

3.- El demandante señala en su réplica que existiría un contrato, que no consta por escrito y que contiene: “la obligación de la Universidad Autónoma de entregar servicios aptos, que habilitaran al demandante para la obtención del título de abogado, más concretamente un grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales legalmente apto y suficiente para optar al título de abogado” . Deducir esta obligación de lo dispuesto en el artículo 1444 del Código Civil, señalando que ésta sería una obligación de la naturaleza del contrato, y que entiende pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Esto equivale a un cambio de causa de pedir, ya que antes la demanda se fundaba en la infracción de los preceptos de la ley de protección al consumidor, por lo que corresponde aplicar lo previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, rechazando esta ampliación.

Agrega que su parte niega lo aseverado por el actor, ya que no existe ningún contrato verbal distinto del que acompaña y, su contenido tampoco puede probarse por testigos.

4.- Por otra parte, esta hipotética obligación tampoco puede considerarse de la naturaleza del contrato, ya que el actor considera la carrera de derecho como un



medio para ser abogado. Lo que lo desnaturaliza pues su objeto es brindar a los estudiantes conocimientos sobre las ciencias jurídicas y sociales. Lo contrario, equivale a transformar los contratos existentes en una promesa de hecho ajenos, siendo que su parte jamás le ha asegurado al actor, el logro o resultado que él tenía en miras al contratar y a lo más, compromete su actividad diligente que, razonablemente, tiene al logro del resultado esperado, pero éste no es asegurado ni prometido. Por ello, ésta obligación que pretende configurarse, sólo podría ser calificada como medios (brindar los estudios pertinentes) y no de resultado (ser abogado), ya que brindar u grado académico de licenciado en ciencias jurídicas apto, para el fin que se propuso el actor, que es ser abogado, depende de lo que exija y disponga la Excma. Corte Suprema. Por lo mismo, es que tampoco se cumplen los requisitos para otorgar una indemnización de perjuicios y debe rechazarse la demanda, de conformidad al art. 1553 del C.C. pues aun configurando un contrato nuevo y una obligación distinta de la pactada, el actor queda igualmente obligado a cumplir lo dispuesto por la Excma. Corte. En efecto, si fuera obligación de su parte darle al actor un grado de licenciado apto para ser abogado, entonces él debe estar llano a cumplir su parte de este nuevo e hipotético contrato, cursando efectivamente en la Universidad de la cual se egresa, los ramos cuya convalidación fuera rechazada, ofrecimiento que su parte le hace para terminar la contienda.

5.- Sobre lo resuelto por la Excma. Corte, no cabe preguntarse si ellos es justo o no, pues lo cierto es, que mira al interés general, y que por más que se solidarice con el actor, lo que es injusto, es culpar a un inocente de lo ocurrido, pues su parte no tiene culpa y por ello no se le puede condenar. Hace presente que Excma. Corte Suprema, puede establecer procedimientos más rigurosos para el otorgamiento del título de abogado, y se aplica de forma retroactiva, sin que exista de parte de la universidad, un acto doloso o culposo. Indica que un asunto similar fue conocido por la I. Corte de Apelaciones de Talca, por la vía del recurso de protección C-489-2016, donde ésta dejó en claro su postura. Excma. Corte Suprema, tanto puede otorgar el título de abogado como no hacerlo, y es soberana para exigir lo conveniente para asegurarse de la idoneidad del solicitante, en aras



del interés general. El actor no puede desentenderse de lo resuelto y pedir un indemnización a cambio. Por último sostiene, que esta facultad del máximo tribunal, para precisar el contenido de las leyes y desarrollar la forma de ejercer los derechos ha sido reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con motivo de los recursos de inaplicabilidad deducidos el año 2011, sobre el autoacordado sobre tramitación del recurso de protección.

Con fecha **31 de octubre de 2017**, previo llamado de rigor, se lleva a efecto la audiencia decretada, con la asistencia del demandante y llamadas las partes a **conciliación**, ésta no se produce, atendida la rebeldía de la demandada.

Con fecha **14 de noviembre de 2017**, se recibe la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, resolviéndose la reposición a la misma el **26 de diciembre de 2017** y rindiéndose la documental y testimonial que se consigna en autos.

Con fecha **01 de octubre de 2018**, se **citó a las partes a oír sentencia**.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a las tachas:

PRIMERO: Que la parte demandada en audiencia de 10 de enero de 2018, tacha al testigo don *CARLOS ANDRES ORTEGA ALUL*, en virtud del artículo 358 N° 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Funda la causal en que el testigo mantuvo con la demandada una relación laboral que terminó mediante un proceso judicial, el cual pese a que fue resuelto de común acuerdo implica enemistad con la demandada de autos. Que evacuando el traslado conferido la demandada, solicita el rechazo de la tacha, toda vez que el testigo indicó claramente que no tiene animadversión con la Universidad Autónoma y que actualmente goza de buena relación con colegas académicos que ahí prestan servicios. Añade que si bien el testigo fue académico de dicha universidad y su contrato de trabajo terminó, dicha situación es del todo normal y no puede imaginarse un mundo de relaciones laborales en que cada vez que termine un contrato de trabajo el empleador y el trabajador terminen enemistados en los términos que expresa el Código De Procedimiento Civil.



SEGUNDO: Que en cuanto a la tacha formulada en contra del testigo don *CARLOS ANDRES ORTEGA ALUL* por la causal del N° 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil; será rechazada toda vez que el testigo declara que *“Sí, demandé a la Universidad Autónoma, por no estar de acuerdo en una parte del despido llegando a un avenimiento en cual fue beneficioso para ambas partes..”*, no permite presumir que tengan enemistad en los términos que exige la ley, toda vez que ella debe ser de tal envergadura que manifieste una parcialidad del testigo; hechos que tampoco el Tribunal vislumbra en su declaración, quien por lo demás, responde una ausencia de animadversión hacia la universidad demandada, al sostener un acuerdo beneficioso para ambas partes y la circunstancia de mantener buenas relaciones con sus colegas, razones por las cuales la tacha será rechazada.

TERCERO: Que la parte demandada en audiencia de 18 de enero de 2018, tacha al testigo don *JUAN ELEUTERIO TOSSO TORRES*, en virtud del artículo 358 N° 4, 5 y 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Funda la causal en que de las respuestas que ha dado el testigo, se desprende de manera muy clara que él es un trabajador dependiente, con contrato de trabajo con la Universidad Autónoma de Chile, demandada en este juicio y dichos servicios los presta desde hace varios años, en jornadas semanal completa, todo lo cual hace desprender, que el testigo carece de la imparcialidad e independencia necesaria para que su testimonio sea considerado y tenga valor probatorio en el presente juicio, pues concurren a su respecto las circunstancias de dependencia que contemplan los dos numerales primeros antes citados, es decir, 4to y 5to. Añade que de la declaración del testigo, se desprende también que carece de la imparcialidad necesaria por tener él un interés directo o indirecto en el presente juicio, pues señaló tener un cargo directivo dentro de la estructura de la Universidad Autónoma y haber participado de la manera que explicó en los hechos que han motivado el presente juicio, todo lo cual, hace desde ya presumir que carece de la imparcialidad necesaria.

Que evacuando el traslado conferido la demandada solicita el rechazo de la tacha, toda vez que el testigo es un profesional que desempeña funciones de alto rango con absoluta independencia, que ha tomado conocimiento de los hechos por haber



intervenido personalmente en ellos, que éste no depende propiamente de su empleador en los términos exigidos en el artículo 358 Nos 4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, todo ello, en consideración que la inhabilidad de estos numerales está referida a los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio. Acá no existe una relación patronal que refleje los vínculos contractuales que rige la situación del testigo, puesto que no existe una situación de subordinación que le reste imparcialidad.

En cuanto a la tacha del N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, lo que exige la norma, es un interés patrimonial en el resultado del juicio, situación que acá no acontece, pues estamos hablando de un interés general en el sentido de cooperar y aclarar todo lo expuesto por el demandante en su demanda, teniendo en consideración que el testigo que depone ha estado presente en todos y cada uno de los actos, en los cuales se le atribuye por parte del actor una responsabilidad a la Universidad Autónoma de Chile.

CUARTO: Que, en primer lugar, en cuanto a la tachas formuladas en contra del testigo don *JUAN ELEUTERIO TOSSO TORRES*, por las causales de los números N° 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, serán acogidas teniendo únicamente presente que, de los dichos del testigo se desprende que efectivamente es dependiente de la demandada, configurándose, en la especie, las causales invocadas, por lo que ambas tachas serán acogidas. Sin embargo, en cuanto a la tacha fundada en la causal del número 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, ésta será rechazada ya que de los solos dichos de la testigo en el sentido de tener interés en que la Universidad gane el juicio, resultan insuficientes para tener por acreditado que, el mismo testigo, tiene un interés de naturaleza económica, concreto e identificable suficiente para justificar su pretendida inhabilidad.

QUINTO: Que la parte demandada en audiencia de 18 de enero de 2018, agregada en el folio 88, tacha al testigo don *HECTOR GUILLERMO VILCHES AYALA*, en virtud del artículo 358 N° 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Funda sus causales en que de las respuestas que ha dado el testigo a las preguntas de tachas, se desprende muy claramente que él es un



trabajador dependiente, con contrato de trabajo con la Universidad Autónoma de Chile, demandada en este juicio y que dichos servicios los presta desde hace varios años en jornada semanal completa, siendo la Universidad Autónoma su único empleador, todo lo cual hace desprender que el testigo carece de la imparcialidad e independencia necesaria para que su testimonio sea considerado y tenga valor probatorio en el presente juicio.

Que evacuando el traslado conferido la demandada solicita el rechazo de la tacha, toda vez que el testigo es un profesional que de acuerdo a sus funciones y características de su trabajo, lo desarrolla con absoluta independencia de los demás funcionarios de la Universidad que éste ha tomado conocimiento de los hechos de autos, por haber intervenido personalmente en ellos, no cumpliéndose los presupuestos exigidos por el artículo 358 Nos.4 y 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación a que estas inhabilidades están referidas a los trabajadores y labradores dependientes en forma diaria y exclusiva de la personas que exige su testimonio, acá, no existe una relación patrimonial que refleje los vínculos contractuales que rige la situación del testigo, puesto que como ya se dijo, no existe una situación de subordinación y dependencia que le reste imparcialidad a su testimonio.

SEXTO: Que en cuanto a la tacha formulada en contra del testigo don *HECTOR GUILLERMO VILCHES AYALA* por las causales 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil; serán acogidas teniendo únicamente presente que, de los dichos del testigo se desprende que efectivamente es dependiente de la demandada, configurándose, en la especie, las causales invocadas, por lo que ambas son acogidas.

SÉPTIMO: Que la parte demandada en audiencia de 17 de enero de 2018, agregada en el folio 129, tacha al testigo don *ROBERT KEITH MORRISON MUNRO* en virtud del artículo 358 N° 4 del Código de Procedimiento Civil. Funda la causal en que el testigo es dependiente de la parte que lo presenta, esto porque al responder las preguntas de tacha formuladas el testigo señaló que es profesor de la Universidad Autónoma que está contratado bajo la modalidad de contrato de trabajo, que recibe una retribución económica por tales servicios y que



estos servicios los cumple en una jornada de 22 horas semanales con lo cual concurre de manera evidente en el supuesto de la norma ya indicada estos que el testigo preste habitualmente servicios retribuidos. Todo ello máxime cuando el contrato de trabajo en nuestra legislación contempla precisamente como elementos esenciales la prestación de servicios bajo subordinación y dependencia y la retribución a cambio de los mismos.

Que evacuando el traslado conferido la demandada solicita el rechazo de la tacha, toda vez que el testigo es un profesional que desarrolla funciones docentes y que ha tomado conocimientos de los hechos por haber intervenido personalmente en ellos, este no depende propiamente de su empleador en los términos exigidos en el artículo 358 número 5 del C.PC., todo ellos considerando la inhabilidad está referida a los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio, en este caso no existe una relación patronal que refleje los vínculos contractuales que rigen la situación del testigo en cuanto a sus declaraciones, puesto que no existe una situación de subordinación que le reste imparcialidad. También las actuales normas reguladoras de la prueba, donde nuestra jurisprudencia es clara en cuanto aceptar la declaración de todos los testigos por aplicación de la normas de la sana crítica hoy en día imperante en nuestro sistema. Más aún existen normas de protecciones laborales, civiles, recursos para todos aquellos acasos que los testigos o personas que tengan que deponer en un juicio se sienta presionados o intimidados por sus empleadores para prestar declaración, ellos tienen derecho de reclamar de tutela o denuncia por vulneración de derechos ante los tribunales o ante la respectiva inspección cuando el empleador los obligue a declarar o les imponga hacerlo

OCTAVO: Que en cuanto a la tacha formulada en contra del testigo *ROBERT KEITH MORRISON MUNRO* por la causal del N° 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil; será acogida teniendo únicamente presente que, de los dichos del testigo, se desprende que efectivamente es dependiente de la demandada, configurándose la tacha solicitada.

NOVENO: Que la parte demandada en audiencia de 17 de enero de 2018, agregada en el folio 130, tacha al testigo don *RICARDO ALFONSO HERRERA*



CASTILLO, en virtud del artículo 358 N° 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Funda la causal en que el testigo es dependiente de la parte que lo presenta, esto porque al responder a las preguntas, señaló que tiene un cargo directivo en la Universidad Autónoma y que está contratado bajo la modalidad de contrato de trabajo y que estos servicios los cumple durante las tardes, con lo cual concurre de manera evidente en el supuesto de la norma ya indicada. Todo ello máxime cuando el contrato de trabajo en nuestra legislación contempla precisamente como elementos esenciales la prestación de servicios bajo subordinación y dependencia y la retribución a cambio de los mismos.

Que evacuando el traslado conferido la demandada solicita el rechazo de la tacha, toda vez que el testigo es un profesional que desarrolla funciones de alto rango y que ha tomado conocimientos de los hechos por haber intervenido personalmente en ellos, este no depende propiamente de su empleador en los términos exigidos en el artículo 358 número 4 y 5 del C.PC., todo ello considerando que la inhabilidad está referida a los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio, en este caso no existe una relación patronal que refleje los vínculos contractuales que rigen la situación del testigo en cuanto a sus declaraciones, puesto que no existe una situación de subordinación que le reste imparcialidad.

DÉCIMO: Que en cuanto a la tacha formulada en contra don *RICARDO ALFONSO HERRERA CASTILLO*, del testigo por la causal del N° 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil; será acogida teniendo únicamente presente que, de los dichos del testigo se desprende que efectivamente, que es dependiente de la demandada, teniendo un cargo incluso directivo para la demandada, en la especie Vicedecano, motivó por el cual es acogida.

UNDÉCIMO: Que la parte demandada en audiencia de 17 de enero de 2018, agregada en el folio 131, tacha al testigo don *LUIS FERNANDO PASSERO RODRÍGUEZ*, en virtud del artículo 358 N° 4 del Código de Procedimiento Civil. Funda la causal en que de la respuesta del testigo surge manifiestamente que él es dependiente de la parte que lo ha presentado como testigo, por cuanto señalo que tiene una relación laboral con la Universidad Autónoma ocupando el cargo de prosecretario general de la misma. Máxime todo ello cuando son elementos de la



esencia del contrato de trabajo la prestación de servicios personales bajo subordinación o dependencia y que estos eran remunerados al trabajador. Así mismo queda de manifiesto que estos servicios los presta el testigo de manera habitual por cuanto el señalo tener contrato por media jornada.

Que evacuando el traslado conferido la demandada solicita el rechazo de la tacha, toda vez que el testigo es un profesional que desarrolla funciones de alto rango y que ha tomado conocimientos de los hechos por haber intervenido personalmente en ellos, este no depende propiamente de su empleador en los términos exigidos en el artículo 358 número 4 y 5 del C.PC., todo ello considerando que la inhabilidad está referida a los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio, en este caso no existe una relación patronal que refleje los vínculos contractuales que rigen la situación del testigo en cuanto a sus declaraciones, puesto que no existe una situación de subordinación que le reste imparcialidad.

DUODÉCIMO: Que en cuanto a la tacha formulada en contra del testigo don *LUIS PASSERO RODRÍGUEZ*; será acogida teniendo únicamente presente que, de los dichos del testigo se desprende que efectivamente es dependiente de la demandada, configurándose, en la especie, la causal de tacha solicitada.

En cuanto al fondo:

DÉCIMOTERCERO: Que se presenta don **REINALDO ALFONSO YÁÑEZ GONZÁLEZ** solicitando tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato en contra de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE**, representada por don Teodoro Javier Ribera Neumann, y/o por don Juan Eleuterio Tosso Torres, ya individualizados; hacer lugar a la demanda y en consecuencia declarar: 1° .- Que la Universidad Autónoma de Chile, demandada, no cumplió con el contrato de prestación de servicios educacionales. 2° .- Que la demandada debe cumplir con el contrato de prestación de servicios educacionales, en orden a otorgar un cumplimiento de la obligación por equivalencia, de tal modo que obtenga económicamente tanto como habría significado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación incumplida por parte de la demandada. 3° .- Que la Universidad Autónoma de Chile es civilmente responsable de los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento; 4° .-



Que, en dicha calidad, la Universidad Autónoma de Chile es condenada al pago de la indemnización de los perjuicios que he sufrido, ascendentes a la cantidad de \$1.167.000.000.- (mil ciento sesenta y siete millones de pesos), según el detalle descrito en el cuerpo de la demanda, en el acápite “II.- Perjuicios experimentados” .

5° .- En subsidio de la petición formulada en el número “4° ” precedente, solicita que se condene a la demandada a las sumas mayores o menores que en justicia se sirva determinar de conformidad con el mérito de los antecedentes expuestos y las pruebas que se rendirán en la etapa procesal pertinente que, en todo caso, resarzan de todo perjuicio al demandante. 6° .- Que las sumas a que sea condenada la demandada deberán pagarse debidamente reajustadas y devengarán intereses corrientes desde la fecha del incumplimiento o desde la fecha de la notificación de la demanda, hasta su entero y cumplido pago; o desde y hasta la fecha que se determine en el fallo. 7° .- En subsidio de las peticiones anteriores, se declare la obligación autónoma y con prescindencia de la acción de cumplimiento, de indemnizarme los perjuicios que se me causaron como consecuencia de los hechos descritos en esta demanda. 8.- Que, en dicha calidad, la Universidad Autónoma de Chile es condenada al pago de la indemnización de los perjuicios que sufridos, ascendentes a la cantidad de \$1.167.000.000.- (un mil ciento sesenta y siete millones de pesos), según el detalle descrito en el cuerpo de la demanda, en el acápite “II.- Perjuicios experimentados” , o a las sumas mayores o menores que en justicia se sirva determinar de conformidad con el mérito de los antecedentes expuestos y las pruebas que se rendirán en la etapa procesal pertinente que, en todo caso, resarzan de todo perjuicio al demandante, con los reajustes e intereses indicados en el numeral “6° .-” precedente. 9.- Que, en todo caso, la demandada sea condenada al pago de las costas de la causa.

DÉCIMOCUARTO: Que la demandada legalmente emplazada, y según lo relacionado anteriormente solicitó el rechazo de la demanda por falta de fundamentos, además de controvertir los hechos expuestos, con costas.

DÉCIMOQUINTO: Que se fijaron como hechos controvertidos los siguientes: 1º Estipulaciones, modalidades y circunstancias que rodearon la celebración del contrato de prestación de servicios educacionales invocado en la demanda y demás hechos



que lo constituyen. 2º Si las partes contratantes dieron cumplimiento diligente a sus obligaciones emanadas del contrato referido. Hechos que lo constituyen. 3º Si, en su caso, el proceso de convalidación de estudios realizado por la demandada -mediante la resolución N° 16/2010 de 16 de febrero de 2010- adolece de errores que le son imputables. Hechos y circunstancias que lo constituyen. 4º Si el pretendido incumplimiento contractual atribuido a la demandada causó perjuicios a la demandante. En su caso, naturaleza y monto de los mismos. 5º Si, en su caso, las resoluciones de la Excma. Corte Suprema de fecha 18 de Agosto de 2015, 13 de Noviembre de 2015 y 28 de Junio de 2016 –que niegan al actor la posibilidad de jurar como abogado- se debió a un caso de fuerza mayor. Hechos y circunstancias que lo constituyen.

DÉCIMOSEXTO: Que la **demandante** se valió de los siguientes medios de prueba:

A) Documental: 1.- Copia del Informe emitido por el Comité de Comunicaciones de la Excma. Corte Suprema en el expediente Rol TI-3181 -2014, de fecha 2 de julio de 2015; 2.- Copia de resolución dictada por la Excma. Corte Suprema en el expediente Rol TI- 3181 -2014, de fecha 18 de agosto de 2015; 3.- Copia de resolución dictada por la Excma. Corte Suprema en el expediente Rol TI- 3181 -2014, de fecha 13 de noviembre de 2015; 4.- Copia de resolución dictada por la Excma. Corte Suprema en el expediente Rol TI- 3181 -2014, de fecha 28 de junio de 2016; 4.- Copia del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, fecha 9 de mayo de 2008; 5.- Copia del Reglamento General del Alumno de la Universidad Autónoma de Chile, de fecha 10 de abril de 2006; 6.- Copia del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, fecha 9 de mayo de 2008; 7.- Copia del Reglamento General del Alumno de la Universidad Autónoma de Chile, de fecha 10 de abril de 2006; 8.- Copia del Informe emitido por el Comité de Comunicaciones de la Excma. Corte Suprema en el expediente Rol TI-3181-2014, de fecha 2 de julio de 2015; 9.- Copia de resolución dictada por la Excma. Corte Suprema en el expediente Rol TI3181-2014, de fecha 18 de agosto de 2015; 10.- Copia de resolución dictada por la Excma. Corte Suprema en el expediente Rol TI3181-2014, de fecha 13 de noviembre de 2015; 11.- Copia de resolución dictada por la Excma. Corte Suprema en el expediente Rol TI3181-2014, de fecha 28 de junio de 2016; 12.- Certificado emitido por don Francisco Javier Claver Hojas,



Médico Neurólogo, de fecha 27 de septiembre de 2017; 13.- Certificado emitido por don Gonzalo Díaz Pino, Médico Internista, de fecha 15 de noviembre de 2017; 14.- Certificado emitido por don Jorge Llanos López, Médico Cirujano, de fecha 13 de noviembre de 2017; 15.- Receta médica emitida por doña Verónica Mujica Escudero, al paciente Reinaldo Yáñez González, de fecha 21 de noviembre de 2017; 16.- Orden N° 1413364, emitida por doña Verónica Mujica Escudero, al paciente Reinaldo Yáñez González, de fecha 21 de noviembre de 2017; 17.- Boleta N° 017159, de fecha 21 de noviembre de 2017, emitida por Dra. Verónica Mujica E y compañía limitada; 18.- Certificado emitido por doña Verónica Mujica Escudero, al paciente Reinaldo Yáñez González, de fecha 21 de noviembre de 2017; 19.- Copia autorizada de certificado emitido por doña Verónica Mujica Escudero, al paciente Reinaldo Yáñez González, de fecha 31 de diciembre de 2014; 20.- Orden de examen, emitida por doña Verónica Mujica Escudero, al paciente Reinaldo Yáñez González, de fecha 21 de noviembre de 2017; 21.- Orden de examen, emitida por doña Verónica Mujica Escudero, al paciente Reinaldo Yáñez González; 22.- Indicación de tratamiento permanente de medicamentos, emitida por doña Verónica Mujica Escudero, al paciente Reinaldo Yáñez González, de fecha 21 de noviembre de 2017; 23.- Indicación de tratamiento permanente de medicamentos (Insulina), emitida por doña Verónica Mujica Escudero, al paciente Reinaldo Yáñez González, de fecha 21 de noviembre de 2017; 24.- Certificado emitido por don Rodolfo Muñoz Gajardo, Médico Neurocirujano, de fecha 23 de noviembre de 2017; 25.- Copia de solicitud de convalidación de asignaturas, de 20 de enero de 2010, con citación; 26.- Copia de Resolución de Dirección Académica, de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca, N° 16/2010, de 26 de febrero de 2010; 27.- Copia de comprobante de Ingreso N° 1459106, de 26 de febrero de 2010, emitido por la Universidad Autónoma de Chile; 28.- Copia de Acta de Validación de Asignaturas del alumno Reinaldo Yáñez González, emitido por Universidad Autónoma de Chile; 29.- Copia de solicitud de validación de asignaturas del alumno Reinaldo Yáñez González; 30.- Copia de Acta de examen de conocimientos relevantes de la asignatura de Taller de Análisis Jurídico, del alumno Reinaldo Yáñez González, de 28 de noviembre de 2011, bajo apercibimiento del artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil; 31.-



Copia de Acta de Validación de Asignaturas, de la cátedra “Taller de Análisis Jurídico”, bajo apercibimiento del artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil; 32.- Copia de resolución de Vicerrectoría Sede Talca, de la Universidad Autónoma de Chile, N° 118/2012, bajo apercibimiento del artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil; 33.- Copia de Certificado de Concentración de Notas, de fecha 12 de noviembre de 2014, emitido por la Universidad Autónoma de Chile; 34.- Copia de Acta de Examen de Título y Grado Carrera de Derecho, de 18 de diciembre de 2013; 35.- Copia de Certificado de Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, de Reinaldo Yáñez González, emitido por Universidad Autónoma de Chile; 36.- Certificado de Ranking Académico, de fecha 23 de julio de 2015, emitido por Universidad Autónoma de Chile; 37.- Copia de certificado de fecha 23 de diciembre de 2014, emitido por Universidad Autónoma de Chile; 38.- Copia de carta remitida por Reinaldo Yáñez González al Director de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca, de fecha 21 de agosto de 2015; 39.- Copia de carta remitida por Reinaldo Yáñez González al Director de la Carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca, de fecha 2 de octubre de 2015; 40.- Copia de resolución de Vicerrectoría Sede Talca, de la Universidad Autónoma de Chile, N° 172/2015, de 9 de octubre de 2015; 41.- Documento denominado “Cuenta Corriente”, de fecha 22 de diciembre de 2016, emitido por la Universidad Autónoma de Chile, referente a los pagos realizados por don Reinaldo Yáñez González a la demandada, los conceptos, fechas y formas de pago de los mismos; 42.- Copia autorizada de Certificado emitido por la Universidad de Concepción, de 14 de enero del año 2010; 43.- Copia autorizada de Certificado emitido por la Universidad de Concepción, de 23 de diciembre de 2014; 44.- Copia autorizada de misiva remitida por la Universidad de Concepción, de 24 de noviembre de 2014, dirigida al Sr. Presidente de la Excm. Corte Suprema; 45.- Certificado emitido por la Directora Regional del Maule de la Corporación de Asistencia Judicial R.M., de fecha 26 de agosto de 2014; 46.- Copia de Memorandum N° 204/2014, de 16 de octubre de 2014, remitido por el Abogado Jefe del Centro de Atención Talca de la Corporación de Asistencia Judicial R.M. a la Directora Regional VII Región de la Corporación de Asistencia Judicial; 47.-



Certificado de Referencias emitido por el Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial Centro Talca, Roberto Needham Reyes, de 28 de Noviembre de 2014; 48.- Certificado emitido por don Augusto Santis Poblete, Abogado Jefe del Centro Talca de la Corporación de Asistencia Judicial, de fecha 28 de noviembre de 2014; 49.- Informe de Pre-Evaluación de Práctica Profesional de Reinaldo Yáñez González; 50.- Copia autorizada de Informe sobre la Práctica Profesional de Reinaldo Yáñez González, de 10 de noviembre de 2014; 51.- Copia autorizada del diploma entregado por la Universidad Autónoma de Chile al demandante, Reinaldo Alfonso Yáñez González, como “Mejor egresado de la Carrera de Derecho, Promoción 2014.”, de Julio de 2015; 52.- Copia autorizada del expediente Rol de Ingreso Número TI-3181-2014, de la Excma. Corte Suprema, sobre solicitud de juramento de don Reinaldo Alfonso Yáñez González; 53.- copia de página web del Ministerio de educación www.mifuturo.cl específicamente estadística de ingresos brutos mensuales de la carrera de derecho; 54.- copia de página web de la Universidad Autónoma de Chile, <http://www.uaautonoma.cl/facultades/derecho/> específicamente de la facultad y carrera de Derecho; 55.- Copia de ficha médica del paciente Reinaldo Alfonso Yáñez González, que da cuenta de los tratamientos recibidos a cargo de la Dra. Verónica Mujica; 56.- Copia de ficha médica del paciente Reinaldo Alfonso Yáñez González, que da cuenta de los tratamientos recibidos a cargo del Dr. Rodolfo Muñoz; 57.- Copia de contrato de trabajo de 1 de noviembre de 2015, entre Paulo Duarte y Cia. Ltda. y el demandante, Reinaldo Yáñez González; 58.- Copia de liquidaciones de remuneraciones del demandante, Reinaldo Yáñez González, correspondientes a los siguientes períodos: Enero a octubre de 2017; Enero a diciembre de 2016; y Noviembre y diciembre de 2015; 59.- Copia de finiquito, de fecha 8 de septiembre de 2017, suscrito por el representante de la sociedad Paulo Duarte y Cía. Ltda. y el demandante, Reinaldo Yáñez González; 60. 43 boletas de farmacias, por compra de diversos medicamentos recetados al demandante, Reinaldo Yáñez González.

B) Exhibición de documentos: con fecha 20 de marzo de 2018, en el folio 198, y se procedió en dicho acto el doctor don Francisco Javier Claver Hojas, a exhibir la ficha médica de don Reinaldo Alfonso Yáñez González, la cual consta de dos páginas y en lo elemental señala que el paciente fue visto por el suscrito por



primera vez el día 10 de Mayo de 2011, a la edad de 42 años, siendo casado, dos hijo, egresado de leyes, destacando dentro de sus patologías la de portador de una diabetes melitus juvenil insulino requirente, no teniendo hábitos perjudiciales para su salud y encontrándose en tratamiento con insulina, amaryl, alprazolam y esomeprazol y aereogastrol, además de cardioplus, éste último por tratamiento de una hipertensión arterail de reciente comienzo. Asimismo, indica que el paciente consultó por una cefalea (dolor de cabeza), que a su juicio era de características tensionales, presentando un examen neurológico normal, dejándose tratamiento en base a ansiolíticos, relajantes y un medicamento analgésico para uso eventual según dolor de cabeza. Se solicitó escáner cerebral con contraste de electro encefalograma estándar hbfe y se suspendió el alprazolam que el paciente tomaba. Desconoce el resultado de los exámenes solicitados, es más, no constato en la ficha clínica resultado de ellos, cabiendo la posibilidad de que no se los haya realizado, al sentirse bien con los medicamentos indicados, asumiendo además, por el tiempo transcurrido de que si se los hubiese hecho, en el caso que así fuera, éstos no habrían arrojado ninguna patología de importancia. En una segunda oportunidad el paciente fue visto el 09 de Junio de 2016, ya a la edad de 48 años, con un cuadro de trastorno del ánimo, se indicaron antidepresivos y se otorgó una licencia por 12 días por dicho diagnostico a contar del 10, de Junio de 2016. Vuelto a controlar el 05 de Septiembre de 2016, el paciente refiere sentirse bastante más aliviado desde el punto de vista anímico por el tratamiento indicado, manteniéndose el mismo por el suscrito. Refiriendo problemática multifactorial, familiar específicamente con su padre, laboral, por el hecho de ser egresado de leyes y por haber podido jurar en la Corte Suprema y de salud física, debido a su diabetes melitus e hipertensión arterial. El día 10 de Agosto de 2017 fue la última vez que vio al paciente en calidad de médico tratante por las situaciones antes señaladas, demostrando un claro brote depresivo, en relación a haber dejado varios meses el tratamiento indicado el 05 de Septiembre de 2016, aduciendo problemas económicos para mantener la estabilidad del mismo. Se vuelve a indicar tratamiento médico antidepresivo y conversando con el paciente se le señala la importancia que vea un médico psiquiatra. Por último, indica que en calidad de médico neurólogo no lo he



vuelto a controlar, siendo lo anterior todo lo que puede señalar respecto de referido paciente.

C) Testimonial: Concurren a declarar los siguientes testigos: 1.- En audiencia de 11 de enero de 2018, agregada en el folio 79, don *GONZALO HOMERO DÍAZ PINO*, quien legalmente juramentado e interrogado al tenor del auto de prueba expone: *Al punto 4.- Señala que no le corresponde pronunciarme sobre el perjuicio o mejoría en este caso. 2.- Puedo decir sí, que la consulta de mi paciente era entre 1 a 2 veces al año por su enfermedad de diabetes melitus tipo 2. Desde hace aproximadamente un año la consulta es más frecuente en que predomina al margen de su enfermedad orgánica elementos ansiosos, problemas de concentración, alteración severa del ritmo del sueño, falta de positividad vital, que significa que no ve alternativas en su futuro y deterioro de sus relaciones familiares, todo eso refiere en forma persistente porque su vida laboral no la puede desarrollar por problemas de su carrera de abogado que se ve frustrada por problemas con su última universidad que es la Universidad Autónoma. 3.- Se intentó manejo médico general manteniendo su situación de síndrome angustioso depresivo por lo cual recomiendo que debe consultar a un psiquiatra y a un psicólogo para mejoramiento de su patología. Ignoro si siguió la recomendación. Repreguntado el testigo para que diga: 1.- Desde que fecha específicamente aumento el síndrome angustioso depresivo que señala. Como ya lo dije aproximadamente un año concurre en forma más frecuente a control y destaca principalmente su patología reactiva. 2.- Que medicamentos le receto para el síndrome que describe. Se recomendó un antidepresivo, sertralina y clorazepan para mejorar su síndrome ansioso. Le recete clorazepan porque es más potente en el control de la ansiedad y regulariza el ritmo del sueño, porque él está mostrando evidencias de fobias fundamentalmente a salir a la calle, era solo signos que podría ser manifestación de su depresión. 3.- Si la enfermedad original por la cual era tratado el demandante presente cambios. Solo la diabetes tuvo tendencia a subir la glicemia pero fue de fácil control. 4.- Cuales son medicamentos que utiliza para el control de su diabetes. Él está en tratamiento con diabetólogo lo que corresponde a enfermedad GES y usa metformina y dosis de insulina que no puedo pronunciarme más. Contrainterrogado El Testigo Para*



Que Diga: 1.- Si el demandante era regular en sus controles, cuantas veces al año iba y porque motivo. Él se controlaba como ya dije en mi declaración una o dos veces al año por su hipertensión y prevención del daño renal que la diabetes produce. Era regular en sus controles. El consultaba en ocasiones como control pero la mayor parte de las veces cuando tenía algún problema que interpretaba como problemas de salud físico. 2.- Que es más grave la diabetes o la posible depresión que se le ha generado al actor. Desde el punto de vista clínico la pregunta no tiene una sola respuesta. Si entendernos como gravedad el riesgo de morir por la enfermedad específicamente la diabetes esta entre los factores de riesgo principal de mortalidad cardiovascular pero el buen control permite mejorar el pronóstico, pero hay factores que la pueden descompensar principalmente los hábitos de vida y uno de ellos es el estrés. Si consideramos como gravedad la alteración de la calidad de vida la diabetes en este momento no es un 'problema mayor como calidad de vida, pero si este síndrome de depresión ansioso altero severamente su condición personal y no fue posible controlarlo con tratamiento convencional y requiere manejo a mi juicio y así se recomendó de psiquiatra y psicoterapia de apoyo. 3.- Ud. Cree que el actor tiene un carácter depresivo. Él tiene una personalidad según la clasificación psiquiátrica, uno tiene una base de personalidad como rasgos de personalidad. No es que sea normal son solo rasgos, está el que se destaca que tiene mayor nivel, y el que tiene el problema declarado. El demandante tiene una personalidad sensitiva que lo hace más susceptible a reaccionar frente a estrés vital.

2.- En audiencia de 11 de enero de 2018, agregada en el folio 79, don *José Luis Galaz Leiva*, quien legalmente juramentado e interrogado al tenor del auto de prueba expone: Al punto 2. Respecto del punto particular del contrato mismo de prestación de servicios, desconozco sus disposiciones nunca lo he revisado ni en mi calidad de profesor no tuve por qué acceder a ese tipo de documentos. Sin perjuicio de lo anterior si tengo conocimiento del reglamento que no se si esta derogado o no, el reglamento del alumno que en algún momento con el ejerció de la docencia que realice lo tuve que revisar por las notas y reclamos de los alumnos. En este reglamento hay una norma, no sé si está vigente, hablo de la norma que conozco yo, es el artículo 69 que se refiere a las carreras que la



universidad Autónoma otorga a los correspondiente títulos profesionales, de hecho se inserta en la parte del reglamento, de titulación de los alumnos. En esta norma se habla que la universidad tiene la facultad de entregar los títulos profesionales, obviamente a los alumnos que cumplan con los requisitos de la carrera, pero hace la salvedad respecto de la carrera de derecho en la cual señala que ese título se otorga en conformidad a la ley, es decir, no lo otorga a la universidad. En la calidad de abogado del suscrito sé que dicho título de abogado u otorga la corte Suprema y para aquello quien postule a esa profesión ante el máximo tribunal de este país debe tener todos los requisitos cumplidos en cuanto al estudio de la carrera de derecho, en específico para licenciarse en esa ciencia y cumplido esto solicitar en este caso que este poder del estado le confiera el correspondiente título. Me consta, dado que fui profesor del demandante y en su último año de estudio ya que fui profesor de derecho internacional privado, y que por lo menos en lo académico el señor Yáñez cumplió con todos los requisitos para licenciarse en la carrera de derecho, es más, tiene entendido que fue distinguido como el mejor alumno de su profesión, además de la carrera fue uno de mis mejores alumnos, por lo tanto, en este contexto y tendiendo conocimiento que el señor Yáñez dio cumplimiento a los requisitos necesarios para licenciarse en ciencias jurídicas y que dicha licenciatura no le ha permitido titularse como abogado en la Corte suprema puedo concluir que el servicio contratado por el con la universidad a efectos de licenciarse y por lo tanto titularse como abogado ha sido imperfectamente cumplido por esa casa de estudios dado que por un error de convalidación de un ramo, que afecta en definitiva los requisitos de su calidad de licenciado la corte suprema no puede legalmente en definitiva otorgarle el título de abogado. Sumo a lo anterior el hecho que todos sus compañeros con los cuales mantengo contacto, puesto que tramitan en Tribunales han podido optar sin ningún problema a su titulación como abogados, a excepción del señor Yáñez y otra compañera que no recuerdo nombre, pero que su proceso de licenciatura adolece de un vicio que como vuelvo a señalar en la errónea convalidación de un ramo de la universidad que provenía, que les impide ya definitivamente obtener este título de abogado de la corte Suprema. Reflexiono al respecto que es de lógica que todo individuo que ingrese a estudiar la carrera de derecho para licenciarse en ella lo



hace con el fin de obtener el grado o título de abogado y de la misma manera toda casa de estudio que ofrece esta licenciatura lo debe hacer obligatoria y perentoriamente con el objeto que si el alumno cumple con los requisitos académicos puede recibirse de abogado, no conozco a nadie que hay estudiado esta carrera con el único fin de licenciarse y de no ser abogado por causas que no le sean imputables. *Repreguntado El Testigo Para Que Diga:* 1.- Que tipo de alumno era el demandante don Reynaldo Yáñez. Un alumno respetuoso, diligente, responsable en sus estudios y uno de los mejores que tuve en mi cátedra, en cuanto manejo de la cátedra que se le impartió. También era un hombre de conducta intachable, él era mayor a sus pares y tenía mayor responsabilidad. 2.- Si Don Reynaldo cumplió con todos los años que tenía la malla. En la universidad autónoma donde me toco hacerle clases, sí. El venia de otra universidad, lo tomó en quinto año. 3.- A qué se refiere con errores en la convalidación. Desconozco el caso particular, especifico, solo sé que lo que afecta al señor Yáñez, a la malla en cuanto a convalidación de ramos, es que existió una asignatura que habría sido mal convalidada en la universidad autónoma, no se cual, se refiere parece a una práctica, desconoce lo especifico, era como un ramo de practica laboral. 4.- Como tiene conocimiento de esta negación del título de abogado respecto de don Reynaldo Yáñez por la Corte Suprema. Es común que cuando se encuentra con los ex alumnos de los últimos años y le consulta cómo van los tramites de titulación, y este caso señalar que con el señor Yáñez se habían encontrado en Tribunales o en el trayecto de los mismos, pasado un año de su egreso le comentó que no podía jurar por la convalidación del ramo señalado, y que la Corte Suprema estaba analizando una solicitud de él para jurar como abogado. Transcurridos dos años le señalo que no podía ser juramentado por la suprema ya que el vicio que afectaba si titulación no podía ser subsanado a esta altura, razón por la cual lo único que le quedaba era conformarse con esta situación, bastante trágica desde su punto de vista como abogado o cursar nuevamente toda la carrera, la verdad que he podido apreciar durante este tiempo que le estado de ánimo del señor Yáñez por el problema es cada vez más deprimente desde el punto de vista como persona, lo buen alumno que fue, por no poder alcanzar el objetivo que se había trazado por circunstancias que no le son imputables a él. Una vez recuerdo que converse con



él, y me dijo que no había vuelta atrás y me dijo que no le permitirían jurar. Trabajaba en el mismo edificio que él, donde él trabajaba había colegas amigos y cuando iba a ese lugar él le informaba en que iba esta situación lamentable. 5.- Si tiene conocimiento cuanto tiempo duro el examen de los antecedentes del demandante realizado por la Excelentísima Corte Suprema. Tengo entendido que se elevaron dos veces los antecedentes a la Corte; duro aproximadamente dos años y medio a tres años. Tomó conocimiento además que los antecedentes del señor Yáñez se extraviaron dos veces en la universidad, eran los antecedentes que debían ser presentados en la Corte Suprema, los cuales debieron ser reconstituidos. 6.- En su calidad de profesor de la universidad autónoma, que carrera ofrece la universidad Autónoma. Ofrece la carrera de licenciatura en ciencias políticas como todas las universidades del país, para cumplir con los requisitos y así que la excelentísima Corte suprema confiera le título de Abogado. 7.- Si tiene antecedentes de una situación similar. Si, de una compañera que también fue alumna suya, no sé si venía de la misma universidad pero si era compañera de la Universidad Autónoma. *Contrainterrogado El Testigo Para Que Diga:* PUNTO 4. Respecto de los perjuicios puede señalar que recuerda que con certeza los problemas de salud, los cuales hicieron más difícil el estudio de la carrera, ya que le señor Yáñez es diabético y en ese contexto tenía una dificultad debido a sus problemas de salud adicionales a sus compañeros sanos, para estudiar lo que contrastaba con su buen rendimiento académico por lo menos en su ramo y en los otros ramos le iba bien. Si eso además se relaciona con que tenía mayores obligaciones que sus compañeros, es casado con hijos, y el sacrificio con la expectativa de ser abogado para él era superior a lo de sus compañeros. Lamentablemente esta situación desde su punto de vista ocasiona dos perjuicios bien notorios, el perjuicio económico por un parte, puesto que no puede trabajar como abogado, sino solamente como licenciado con las consecuencias legales correspondientes, lo que lo priva o le produce una merma económica en cuanto a las remuneraciones que puede percibir o a los honorarios que pueda recibir. Como señaló anteriormente la mayoría de sus compañeros con los que se encuentra regularmente, trabajan ya como abogados, lo que obviamente contrasta con la situación del señor Yáñez que no puede acceder a ese tipo de ingresos por carecer



CKPOLXKGXD

del título, ahora bien siempre fue funcionario público, y no podría dar con precisión a cuánto asciende la remuneración en el ámbito privado. Sin perjuicio de lo anterior en el servicio al actual pertenece un abogado joven que lleve ejerciendo unos dos o tres años, como podría haber sucedido con el señor Yáñez, gana aproximadamente entre ochocientos o un millón de pesos dependiendo del grado que tenga en el escalafón. En el otro ámbito sin ser conocedor de la materia, ha visto en él una afectación psicológica grande producida por angustia y por frustración, el tema para el señor Yáñez una vez que no podía ser abogado, era muy delicado, al conversar con él se nota su tristeza, angustia, su impotencia ante una situación que no tiene remedio, desconozco si le ha causado traumas, desde el punto de vista clínico solo puedo decir lo que he visto y he conversado con él. Que tipo de enfermedades padece el señor Reynaldo Yáñez. Se remite a su declaración, en cuanto a una diabetes más o menos complicada, tenía que hacerse diálisis en determinadas épocas. 3.- En audiencia de 9 de enero de 2018, agregada en el folio 80, don *PAULO IVAN DUARTE PARADA*, quien legalmente juramentado e interrogado al tenor del auto de prueba expone: Al punto 1 señala que, conoce a Reinaldo Yáñez porque trabajó para una sociedad llamada Paulo Duarte y Cía. Ltda., entre los meses de noviembre 2015 y octubre de 2017. Como representante de esa entidad contrató a Reinaldo Yáñez para que se desempeñare en el giro de esta compañía que es la prestación de servicios jurídicos, en el entendido que se titularía de abogado en breve plazo después de la contratación. El señor Yáñez me explicó que ya estaba presentada por aquellos días su solicitud de juramento ante la Excelentísima Corte Suprema y estaría pronto a prestarlo. Posteriormente el proceso se fue alargando sin que haya podido obtener el título hasta el día de hoy. Por tal razón, me interiorice del proceso que vivió el demandante, lo acompañe a lo menos a dos reuniones con el Rector de la Universidad en Talca, el señor Tozo, y con el jefe de carrera, si mal no recuerdo, don Ricardo Herrera Castillo, a quien conozco, de este modo me impuse por los personeros de la propia universidad que don Reinaldo Yáñez, había estudiado en la Universidad de Concepción hace años, posteriormente había convalidado una serie de asignaturas, en la universidad demandada, que había cursado con éxito las asignaturas restantes, que había completado el proceso de licenciatura, cursando una



práctica con buenos resultados, rindiendo un examen de grado que también fue aprobado y consiguiendo también la aprobación de su tesis de grado, como dije, que me consta por la información entregada por los propios personeros de la universidad el señor Tozo y el señor Herrera. En alguna oportunidad también se reunió con don Robert Morrison que también le confirmó los antecedentes que ha proporcionado, adicionalmente cuándo contrató a Reinado Yáñez tuvo a la vista su certificado de concentración de notas, su memoria y los antecedentes de su evaluación. Por lo que ha señalado, no le cabe ninguna duda que el señor Yáñez, cumplió satisfactoriamente con los requisitos que la universidad le impuso para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y sociales. Ignora si en el aspecto económico, Reinaldo Yáñez habrá cumplido con la obligaciones pagar el precio por los servicios prestado, solo puedo inferir que fueron pagados, por cuanto se le otorgo el grado de licenciado. Ahora bien, le parece, que el contrato de prestación de servicios educacionales de la especie comprende como un elemento de la naturaleza la entrega de una licenciatura apta para optar al título de abogado, tal como ocurre con todos los contratos de prestación de servicios educacionales que suscriben las universidades que otorgan la carrera de Derecho. Es abogado hace más de 20 años, y cree que no ha sabido nunca de una universidad que otorgue una licenciatura, digamos de clase B o de segunda categoría, que no habilita para titularse de abogado. *Repreguntado el testigo*, para que diga, si sabe bajos que circunstancias el demandante ingresó a estudiar a la Universidad Autónoma y si guarda alguna relación con ello los estudios que el mismo testigo señaló, cursó en la Universidad de Concepción. *Responde:* Reinaldo Yáñez, es oriundo de Talca y tiene una edad similar a la suya, cerca de 50 años, de modo que lo ubica desde la época del colegio. Reinaldo Yáñez inmediatamente egresado de la enseñanza media se fue a estudiar a Concepción la carrera de derecho a la Universidad de Concepción, de esa universidad egresó y jamás completo el proceso de titulación en aquella casa de estudio. Luego, se vino a Talca, y se dedicó principalmente a trabajar en una empresa de su padre, del mismo nombre, a quién conoce, porque en más de una oportunidad ha sido cliente de su oficina, se refiere a don Reinaldo Yáñez Gallegos, entiendo que se desempeñaba en una empresa constructora de nombre Manela. Paralelamente, el demandante ejecutaba algunas labores jurídicas,



las que le consta porque se encontró con él en varias oportunidades en el ejercicio de su profesión, procuró juicios, redactaba algunas escrituras y prestaba algunas asesorías laborales. Durante el periodo a que se refiere, es decir, egresado de la Universidad de Concepción y frustrado su proceso de titulación, se casó y tuvo dos hijos, y en tales condiciones, es decir, casado y con dos hijos en edad escolar, decidió retomar sus estudios en la Universidad Autónoma, solicitando la convalidación de todos los ramos que pudo que había ya cursado en la Universidad de Concepción, lo anterior me consta, porque conoce al padre del demandante, desde hace muchos años, y al mismo demandante desde la época del colegio.

Contrainterrogado El Testigo -Para que diga, si sabe en qué fecha entró el actor a estudiar derecho en la Universidad de Concepción. *Responde:* No lo sé con precisión, pero debe haber sido, por allá por el año 1987-1988, porque como dije lo conozco desde la época que estudiaba en el Colegio Integrado de Talca e íbamos en cursos muy cercanos. Tampoco sabe con precisión en qué año se le otorgó el año de egresó en la Universidad de Concepción, pero debe haber sido aproximadamente en el año 1995. Para que diga, si sabe en qué fecha ingreso y en qué fecha terminó en la Universidad Autónoma. *Responde:* No sé la fecha exacta en que convalidó y retomó sus estudios, porque como dije la información de que dispone, le fue proporcionada por las personas que nombró por allá por los años 2015 y 2016, después de que contrató a Reinaldo en noviembre del año 2015, y en tales circunstancias se impuso del proceso que estaba viviendo en relación con su titulación. Para que diga en qué fecha le fue negada la posibilidad de jurar por la Corte Suprema. *Responde:* Tuve a la vista el expediente de titulación del actor, que examine con detalle, en busca de poder ayudarlo en algún mecanismo que le permitiera titularse, lo que recuerdo es que se rechazó la solicitud de titulación previo informe de una comisión de la propia Corte Suprema y luego se volvió a rechazar después de la insistencia formulada por el actor, luego de rectificada la resolución que le convalidó los ramos por la Universidad Autónoma. No recuerdo la fecha de resoluciones judiciales, pero son de conocimiento público. No me recuerdo con precisión si el primero rechazo fue anterior o posterior a su ingreso a trabajar en su sociedad lo que fue el 1 de noviembre de 2015. Lo que tiene perfectamente claro es que a la época de la contratación el rechazo, si es que



hubiere habido un primer rechazo anterior, no había sido definitivo, por cuanto, cuándo lo contrató estaba vigente en él, la posibilidad y la esperanza legítima de obtener el título. Le consta también con certeza que la intervención de la universidad en ese proceso de titulación, y el rechazo definitivo de la Corte fue posterior al ingreso a trabajar. Para que diga en qué fecha fueron las reuniones con el señor Tozo y Herrera Responde: Fueron en el verano del año 2016, es decir, a comienzo de ese año, no recuerdo la fecha, si puedo decir que ambas reuniones fueron en la oficina del señor Tozo ubicada en la oficina de la Universidad en un segundo y tercer piso, una oficina muy elegante con sala de reuniones dentro de ella y con vista al poniente. Al punto 4. Responde: Naturalmente, que la constatación por parte de Reinaldo Yáñez, de que la Licenciatura que con tanto esfuerzo había obtenido era inservible para su destino natural que es optar al título de abogado le produjo el mismo dolor que le puede producir a cualquiera de los que pasamos por la escuela de derecho, la constatación en que los esfuerzos y desvelos desplegamos por muchos años resultan completamente inútiles. Como mencionó el actor, estudio en la Universidad Autónoma, ya casados y con dos hijos en edad escolar. El actor no es un hombre de fortuna ni de recursos, de manera que los escasos ahorros de que disponía los usaron, para vivir y pagar los aranceles universitarios a la demandada, en el periodo que curso estudios universitarios y se dedicó a su proceso de titulación. El esfuerzo desplegado por el actor fue enorme en pos del beneficio que le traería poder obtener el ansiado título para mejorar sus expectativas laborales. Desde el punto de vista económico, el esfuerzo se manifestó en el extremo de que le remataron su viví (inda, el Banco Santander, por no pago de los dividendos hipotecarios, hecho que se produjo durante el año 2017. También conviene tener en cuenta, que paradójicamente, el actor recibió el premio al mejor alumno egresado de su promoción de la universidad autónoma. Además, es diabético crónico y las circunstancias que he descrito agravaron su enfermedad. Presenció a lo menos en dos oportunidades, episodios de descompensaciones que pusieron al actor en la urgencia de Talca, en estado de semiinconsciencia. Lo que ha relatado, permite concluir, que el actor tuvo evidentes perjuicios patrimoniales, en primero lugar, ya sea por la inversión que tuvo que hacer pagando el arancel o precio por la



prestaciones servicios educacionales que le brindo la universidad durante los años que cursó los ramos no convalidados y el proceso de titulación, ignoro los montos que pago efectivamente, lo que se trasunta en un evidente daño emergente. Patrimonialmente también, experimento un natural lucro cesante, ya sea, por lo que dejo de ganar por el periodo que debió dedicarse en exclusiva a cursar los ramos no convalidados, como por lo que dejo de ganar mientras se empeñaba en su proceso de licenciatura y titulación. Es fácil de estimar estas sumas, por cuánto, mientras se desempeñó en su oficina, percibía un sueldo de \$523 mil pesos brutos, de manera podría estimarse que durante todos los periodos que no pudo trabajar, dejo de ganar la referida suma por cada mes. También, existe, patrimonialmente, lucro cesante por lo que el actor dejara de ganar en el futuro por no tener su título de abogado. De hecho, la razón por la que fue desvinculado por la empresa que represento es porque no se tituló y perdió el 'IUS POSTULANDI de manera que ya no podía comparecer en ningún tribunal de la república. Vuelvo al lucro cesante porque, como dije, el actor ganaba 523 mil pesos mensuales y en mi misma oficina se desempeñan otros abogados, naturalmente titulados, con menos de 5 años de titulación que ganan, \$1.800.000 mil pesos. Es fácil deducir, entonces que el actor, de haber obtenido su hubiera aumentado sus ingresos a lo menos, digo a lo menos, porque así hubiera sido en mi oficina, en una \$ 1.300.000 por cada mes. Ello debe proyectarse para el cálculo del lucro cesante, a lo que le queda al actor, de vida laboral, es decir, a lo menos hasta los 65 años, considerando además, que en la medida de que gana experiencia de abogado sus ingresos tienden a aumentar. Es perfectamente esperable que un abogado como lo pudo haber sido el actor de que después de 5 años de ejercicio, pudiera optar a un sueldo de 2.500.000 a 3.000.000.- mensuales. Finalmente el prejuicio más notable del actor es el daño moral. Presenció durante los años que trabajó, la depresión que lo envolvió a raíz, de la frustración, impotencia y desazón que le provocó con tanto esfuerzo la licenciatura, que no le sirvió para obtener el título de abogado, Reinaldo Yáñez, tuvo una depresión y estuvo medicado, así como los temblores en las manos y la sequedad en la boca y labios que le producían los medicamentos, lo que compartió con él muchas veces, lo vio llorar en incontables veces, incluso le compartió ideaciones suicidas que se explican por el rechazo de su solicitud de titulación y los



efectos que ello produjo. El actor se vio en algún momento sin título, sabido que iba a ser despedido de su trabajo, por lo que para desempeñarlo necesitaba el título o a lo menos Ius Postulandi, con su vivienda rematada por el banco por no pago de los dividendos, en soportando la diabetes crónica que se volvía incontrolable a causa del estrés, todo, lo cual muestra un escenario catastrófico que el actor sobrellevo con un dolor enorme como es esperable en tales circunstancias. Repreguntado el testigo, Para que diga el testigo, si recuerda en que época ocurrieron los episodios de descompensaciones sufridas por el actor, que relato precedentemente. Responde: cuándo contrató al actor, ya presentaba un estado psicológico vulnerable debido a la incertidumbre de su titulación, pero se agravó después de que en el año 2016, internalizo que definitivamente la Corte Suprema no le daría el título de abogado, fue después de ello, cuando la aflicción y el dolor se volvieron más agudos y presentó los síntomas que describí, fue a fines de año 2016 y principio de 2017, cuando el actor estuvo más deprimido y cuando escuche de él, más de una vez que le rondaba la idea de quitarse la vida.

Contrainterrogado El Testigo, si sabe, si con anterioridad al año 2015, el testigo tuvo alguna otra descompensaciones. Responde: no. No losé. Para que diga, si los cálculos que hacen, si las cantidades que señalan en su declaraciones, si ocurrieron en la realidad o son suposiciones de él. Responde: lo que he señalado, es un hecho inconcuso, que el actor gano entre el 1 de noviembre 2015 y 8 de octubre 2017, ganó la suma de 523 mil pesos mensuales, por desempeñarse como procurador habilitado, es decir, con Ius Postulandi. Es un hecho también, que en su oficina los abogado titulados con menos de 5 años de experiencia, ganan 1.800.000.- pesos y es un hecho también que si el actor hubiese tenido el título de abogado aun estaría trabajando en su oficina y estaría ganando los mismos que otros abogados, es decir 1.800.000 mensuales, es decir, por no haberse titulado, dejo de percibir 1.300.000 mil pesos cada mes, eso es un hecho cierto y concreto. También puede decir, porque lo percibió que Reinaldo Yáñez, tenía las capacidades y conocimiento suficiente para desempeñarse como abogado, pero todos sabemos que no bastan los conocimientos para ejercer de abogado sino que se requiere el título y eso es lo que el actor no pudo representar en su oficina. Respecto de los demás cálculos que ha expuesto para determinar el daño patrimonial y lucro cesante, le consta porque



como dijo se desempeña como abogado hace más de 20 años y trabajan varios abogados ya sea como socios o empleados en la oficina, por lo que está al tanto del mercado laboral. En todo caso es muy fácil comprobar los montos que ha señalado ya que existen una serie de entidades que realizan estudios anualmente y se publican para determinar lo que ganar los profesionales de distintas áreas y en distintas épocas de su carrera, entre ellos los abogados.

4.- En audiencia de 9 de enero de 2018, agregada en el folio 80, doña *MIRTA LUCIA LILIANA SUAREZ MOLINA*, quien legalmente juramentado e interrogado al tenor del auto de prueba expone: Al punto 1.- Señala que cuando uno va a la universidad y presenta su situación uno celebra un contrato, y la universidad se compromete a ciertas cosas, en este caso, a la prestación de servicios educacionales, en este caso a estudiar la carrera de derecho, y terminar siendo Licenciado en Ciencias Jurídicas y posteriormente obtener el título de abogado, a eso es a lo que compromete la universidad a través contrato, ser licenciado y posteriormente obtener el título de abogado para ejercer dicha profesión y la otra parte se compromete a pagar por los servicios prestados. Básicamente es eso, llegar a ser abogado. Repreguntada la testigo para que diga, que entidad es la otorga el grado de licenciado que acaba de mencionar. Responde: la entidad que me da el grado de licenciado es la Universidad y en este caso la Universidad Autónoma. Para que diga, hasta donde llega la obligación o las obligaciones de la Universidad en la carrera de derecho, en lo que respecta a la obtención de la licenciatura y posteriormente al título de abogado. Responde: hasta obtener el título de abogado. Porque nadie estudia para ser licenciado todos quieren ser abogados, los estudiantes estudian no para ser licenciados sino para ser abogado. *Contrainterrogada la testigo:* Para que diga, quién otorga el título de abogado. Responde: El título de abogado lo otorga la Corte Suprema, pero las universidades que imparten las carreras de derecho, los alumnos que cumplen con todos los requisitos, por ellas exigidos, necesariamente se deben llegar al título independientemente que es la Corte Suprema que da el título de abogado, es un formalismo, pero es la universidad quien da el título de licenciado y por ende se llega al título de abogado. Lo sabe porque estudió derecho, y es así. Al punto dos: si la universidad hubiese hecho



todo, no estarían acá, porque don Reinaldo Yáñez sería abogado, la universidad debió haberle dado todos los antecedentes cuando se hace la carpeta y se presenta ante la Suprema, debió hacerse mención a la norma expresa por la cual se le admitió en este ingreso en forma excepcional, cosa que no fue así, no se hizo mención, no se señala: o expresamente por la universidad ante la Corte Suprema. *Contrainterrogada la testigo:* Para que diga, si sabe cuándo se le convalidaron los ramos al señor Yáñez. Responde: la fecha exacta debe haber sido en marzo de 2010, pero la fecha exacta no la sabe.

5.- En audiencia de 9 de enero de 2018, agregada en el folio 80, doña CAMILA DANIELA JAQUE ROJAS, quien legalmente juramentado e interrogado al tenor del auto de prueba expone: *Al punto 1.-* Señala que ingresó a la Universidad Autónoma el año 2007, a la carrera de derecho, porque ofrecía el título de abogado al final del proceso, las condiciones eran cursar todos los ramos de la malla, hacer una memoria y dar un examen de grado, ofreciendo la universidad en dejarla en condiciones óptimas para jurar como abogada. Repreguntada la testigo para que diga, si sabe cuándo y en que circunstancia ingreso don Reinaldo Yáñez a la carrera de derecho en la Universidad autónoma de Chile. Responde: Reinaldo ingreso el año 2010, a cuarto año de derecho en su curso, por eso lo sabe. A Reinaldo le ofreció la Universidad mediante una convalidación existente por el reglamento interno de la universidad, si acreditaba experiencia laboral, por haber estudiado derecho con anterioridad solo hacer dos años para poder ser abogado. Responde: El venía de la Universidad de Concepción, los años no lo sabe. Para que diga, cuáles eran las obligaciones surgidas del contrato de prestación de servicios tanto como para Reinaldo Yáñez como para la Universidad. Responde: la obligación para cualquier estudiante de derecho que ingresaba a la universidad autónoma, era aprobar los ramos, en quinto año una memoria y aprobar el examen de grado. Y por parte de la universidad era dejar al alumno en condiciones óptimas para que la Corte Suprema le otorgara su título de abogado. *Al punto dos.* Responde: Por supuesto que la universidad no dio cumplimiento y por el contrario Reinaldo si aprobó sus ramos y si aprobó su examen de grado, lo que incluso se muestra a la universidad al otorgarle su título de licenciado. Repreguntada la testigo. Para que



diga, porque dice que la universidad no habría dado cumplimiento al contrato de prestación de servicios educacionales. Responde: Porque Reinaldo no pudo jurar como abogado y la universidad lo que ofrece al terminar la carrera es ser abogado. Para que diga, porqué atribuye ella en su declaración a la universidad la circunstancia de que el actor no hubiere jurado como abogado. Responde: por un error que comete la universidad en la convalidación, pues se ampara en un artículo del reglamento interno de la universidad, para ofrecerle a Reinaldo, terminar sus estudios. La norma señala que habiendo tenido estudios anteriores pero acreditando una experiencia laboral significativa, podía ingresar a la universidad. Para que diga, como le consta y como lo sabe, que la universidad habría ocurrido en una error en la convalidación. Responde: le consta porque fue compañera de Reinaldo y su caso fue conocido a nivel de carrera, incluso se les entregó en la misma ceremonia el título de licenciado y tiempo después al encontrarse le comentó que todavía no había podido jurar. *Contrainterrogada* Para que diga, en qué fecha se efectuó la convalidación, en qué fecha fue hecho el rechazo y si sabe en qué fecha la Corte Suprema estableció el requisito incumplido. Responde: la convalidación el año 2010, cuando el ingresó, el rechazo debe haber sido en el año 2015 aproximadamente. *Al punto 3*, se remite a lo ya señalado

6.- En audiencia de 10 de enero de 2018, agregada en el folio 80, don *CARLOS ANDRES ORTEGA ALUL*, quien legalmente juramentado, e interrogado al tenor del auto de prueba, expone: “*Al punto 1.-* Señala que como ya lo manifesté en las preguntas de tacha, me asiste el más pleno convencimiento del cumplimiento por parte del actor de cada una de las estipulaciones contractuales que lo vincularon y lo vinculan con la demandada, en razón de la naturaleza de este contrato cual es cursar la carrera de derecho con la finalidad última y lógica de adquirir el título de abogado, por lo que en este aspecto no hay otra lectura, en este mismo orden de cosas y como docente la Universidad Autónoma de Talca propicia o determina que el perfil de la carrera de derecho es la de un “Abogado litigante”, vale decir, la propia demandada enarbola como fundamento de su carrera el o la finalidad de que sus alumnos lleguen a ser abogados. Debo aclarar que el actor cursó entre los años 2010 y 2011 la cátedra de derecho administrativo de la cual



en ese instante era el docente y además en el proceso de convalidación de su malla curricular fue uno de los profesores que se opuso a la convalidación de ese ramo por lo que el actor debió cursarlo nuevamente en la Universidad Autónoma sede Talca, así las cosas, el actor fue uno de los mejores alumnos del ramo en referencia, sorprendiendo a este testigo con sus respuestas claras y solventes a diferencia del resto de sus compañeros, con posterioridad y encontrado al actor en tribunales en Talca, le comentó que había egresado e incluso obtenido un premio por excelencia académica que le habría brindado la demandada y que se encontraba en proceso de cumplir con todas y cada uno de los trámites para jurar ante la Corte Suprema y obtener el título de Abogado. Acota que el actor había iniciado sus estudios de derecho en la Universidad de Concepción y que la Universidad Autónoma, vale decir, la demandada lo aceptó como alumno regular sobre la base de convalidaciones de sus ramos y con obligaciones de cumplir o volver a cursar ramos que no le fueron convalidados por la demandada, lo anterior me consta por cuánto y como he dicho participé junto a directores de la carrera de entonces en el proceso de convalidación de ramos del actor. *Repreguntado El Testigo.* Para que aclare el testigo, a que se refiere a su declaración al señalar que sería una finalidad lógica de los estudios que cursó el demandante en la universidad autónoma la de adquirir el título de abogado. Responde: como señaló y en su calidad de abogado y docente universitario puede afirmar que no existe en Chile ninguna facultad de derecho que no ofrezca o que determine en su perfil la obtención cumplida las obligaciones del título de abogado, vale decir, las facultades de derecho y en especial la facultad de la demandada, no ofrecen solamente la licenciatura si no que son categóricas al referir que la finalidad última lógica y determinante para estudiar la carrera de derecho es la de obtener el título de abogado y por ende ejercer la abogacía en los tribunales de la república, además así lo declara el perfil de la carrera de la demandada y esto le consta como ya ha dicho por cuánto fue docente de la Universidad Autónoma Sede de Talca de la carrera de Derecho. Para que aclare el testigo, considerando que el título de abogado lo otorga la Excelentísima Corte Suprema, hasta donde se extiende la obligación de la universidad en relación a la obtención de dicho título que es otorgado por un tercero. *Responde:* la demandada y en el cumplimiento de su



obligación contractual con el actor debió haber entregado al señor Yáñez todos y cada uno de los documentos necesarios para “abrir carpeta” en la Corte Suprema, ya que es de la esencia del vínculo contractual que un egresado de la carrera de derecho como el señor Yáñez pueda tener, demostrar y acreditar ante el tribunal supremo de justicia de Chile, que está habilitado para jurar y obtener el título de abogado, no existe otra lectura a lo anterior. Para que diga el testigo, como le consta que el demandante el señor Yáñez, según el indicado hubiere cumplido sus obligaciones para con la universidad y señale cuales son estas

Responde: Le consta que el actor fue un alumno regular de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma sede Talca, cursando las asignaturas correspondientes, figurando en las nóminas de alumnos y rindiendo las pruebas y exámenes de rigor, proceso que concluyó con su egreso de la carrera, lo anterior me consta por cuanto fui profesor del actor y docente en la facultad de derecho en comento, por aquello puedo dar fe que el actor cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales para con la demandada. *Contrainterrogado El Testigo.* Para que diga que documento no le entregó la universidad al actor. Responde: al testigo no le corresponde saber o no saber los documentos que la Universidad Autónoma, la demandada, debió o no debió entregar al actor, como ya lo dijo, la obligación de la demandada es entregar la documentación para “abrir carpeta” en la Corte Suprema. *Al punto 2.* Responde: Le consta en su calidad de docente y de abogado y conforme a lo ya expresado en el punto anterior que el actor fue un alumno regular de la carrera de derecho de la demandada en sede Talca, y esta calidad por sí sola, vincula a las partes de manera contractual, además jamás se le refirió por parte de la demandada que el actor hubiere estado en Mora de pago o inhabilitado por alguna razón para cursar, en su caso, la cátedra de derecho administrativo, por lo que en estricto rigor se puede concluir que el actor cumplía y cumplió con la demandada sus obligaciones contractuales, prueba de aquello es el premio o galardón que se le otorgo como el mejor alumno de su promoción lo cual ratifica la antes expuesto. *Repreguntado.* Para que diga el testigo, si la Universidad Autónoma dio cumplió diligente a su obligación con el señor Yáñez. *Responde:* Como docente y abogado puedo declarar y habiendo dado lectura a la demanda que la Universidad Autónoma sede Talca, no ha dado cumplimiento hasta la fecha



en sus obligaciones contractuales para con el actor, puesto que habiendo cursado el señor Yáñez, la carrera de derecho en los términos ya expuestos, no ha podido obtener el título de abogado y esto por lo sabido leído e instruido por una deficiencia o falta de documentación para “abrir carpeta” ante la Corte Suprema y obtener el título que todo estudiante de derecho aspira obtener, vale decir el de abogado, es por ello que puedo declarar que la única parte en mi concepto que no ha cumplido contractualmente lo pactado, es la demandada. Para que diga el testigo, porque medio tuvo acceso a la demanda que dice haber leído. Responde: por el portal o página web del poder judicial. Para que diga el testigo, cuál sería la deficiencia a que aludió precedentemente al referirse al incumplimiento en que habría incurrido la universidad. Responde: se trataría de problemas o deficiencias en las convalidaciones y en los requisitos y condiciones que la Corte Suprema ha establecido para que alumnos que terminan sus estudios una distinta universidad puedan “abrir carpeta, jurar ante la Corte Suprema y obtener el título de abogado” . Para que diga el testigo, por qué motivo específico atribuye esta circunstancia a la demandada. Responde: considera que la demandada no cumplió debiendo hacerlo con las exigencias y prerrogativas que la propia Corte Suprema imponía a las universidades para convalidar estudios y que esta convalidación fuera adecuada y apegada a derecho, es por ello que la demandada es la única que puede o debió haber cumplido con los autos acordados de la Corte Suprema y los instructivos de este tribunal, mas debió haber previsto si así fue el caso algún tipo de inconveniente en dicha convalidación y no lo hizo, ya que el actor habiendo egresado con excelentes notas y con un premio otorgado por la demandada solo pudo conocer las deficiencias de responsabilidad de la Universidad Autónoma, carrera de derecho cuando quiso “abrir carpeta” ante la Corte Suprema y obtener como todo egresado el título de abogado. *Contrainterrogado.* Para que diga el testigo, Si sabe en qué fecha se efectuaron las convalidaciones Responde: el actor curso la cátedra de derecho administrativo que impartía, el año 2010 o 2011, por lo que las convalidaciones que debió realizar la universidad demandada, son anteriores o contemporáneas a estas fechas, además como testigo no me corresponde saber aspectos internos de la demandada puesto que solo fui docente y no directivo de la casa de estudios en comento. *Al punto 3.* Responde: como abogado, no cabe



duda alguna que es la demandada, la única responsable, que habiendo cursado de manera regular, satisfactoria y con honores la carrera de derecho en la universidad demandada sea la única responsable de la no obtención del título de abogado del actor y esto por deficiencias de la tramitación de convalidaciones que la universidad, la demandada debió haber realizado en forma eficiente y apegado a derecho. Todo lo anterior, repercute como ya he señalado en la negativa de la Corte Suprema en permitir el juramento y el título de abogado del actor. Contrainterrogado. Para que diga el testigo, si conoce los defectos de que adolecen las convalidaciones. Responde: Como testigo no corresponde conocer los detalles y/o los errores o fallas de la demandada al convalidar los ramos cursados por el actor en otra universidad de lo que sí puede dar fe, es del análisis exhaustivo que se le hizo a la malla curricular cursada por él en la Universidad de Concepción, análisis que fue realizado por los directores de la facultad de derecho de la Universidad sede Talca, para el caso Ricardo Herrera, Robert Morrison y Pamela Jirón, esto lo sabe por cuánto se le solicito analizar la malla de derecho administrativo del actor y fue de la opinión que no debía convalidarse sino que debía cursar nuevamente el ramo cosa que el actor realizo obtenido muy buenas calificaciones, en conclusión le asiste el más pleno convencimiento que los directivos de la facultad de derecho hicieron de forma mal, bien o regular, las convalidaciones del actor y eso en un plano general del cual puedo dar fe y en un plano especial al solicitarle como ya ha referido la convalidación del ramo de derecho administrativo al cual se opuso y del cual debió cursar nuevamente el actor. *Al punto 4.* Responde: como abogado, docente, y jefe de familia puede dar fe que la sola circunstancia de haber cursado la carrera de derecho por parte del actor, haber obtenido un egreso con honores y no poder lograr el objetivo final de todo estudiante de derecho cual es obtener el título de abogado, por sí mismo causa un enorme perjuicio al actor y a cualquiera persona, hombre o mujer, que se encontrara en esta lamentable situación. El simple hecho de no tiene:" el título de abogado y haber estudiado para aquello y como abogado puede declarar no tanto solo un daño material, sino también un enorme daño moral el que puede extenderse no tanto solo al actor o afectado, sino que también a su familia o círculo más cercano, ya que es de lógica, concluir que no obtener el título profesional de abogado y quedar como un simple licenciado



acarrea un perjuicio material y moral que puede ser clarificado según los fallos de los tribunales de justicia de la República, en este sentido puedo declarar que habiendo encontrado en varias oportunidades al actor en tribunales, en la calle y en el edificio donde presta servicios como procurador le consulté por su estado de salud por cuánto lo note muy desmejorado y me respondió que el no poder jurar como abogado lo tenía desmoralizado, abatido y muy a mal traer y que esto había significado pro alemas también de tipo familiar, por lo que en mi condición de abogado y habiendo ejercido demandas de indemnizaciones de perjuicio por daño material y moral puedo dar fe que el actor ha sufrido, sufre y me imagino seguirá sufrido un cumulo de perjuicios derivados de la relación contractual con la demandada y de su imposibilidad de jurar ante la Corte Suprema y obtener su título de abogado, cual es la finalidad última de un estudiante de derecho.

D) Oficio: 1. – Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Talca, expediente Rol Número C-1276-2013, caratulado “Banco Santander Chile con Yáñez” . 2.- Fondo Nacional de Salud (FONASA), informa acerca de las licencias médicas solicitadas por don Reinaldo Yáñez González, Cédula de Identidad Número 9.121.502-0 durante los años 2015, 2016 y 2017. 3.- Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), informa acerca de las licencias médicas solicitadas por don Reinaldo Yáñez González, Cédula de Identidad Número 9.121.502-0 durante los años 2015, 2016 y 2017. 4.- Superintendencia de Pensiones, informa quien fue el empleador de don Reinaldo Yáñez González, Cédula de Identidad Número 9.121.502-0 durante los años 2015, 2016 y 2017. 5.- Servicio de Impuestos Internos, informa las rentas declaradas por el demandante, Reinaldo Yáñez González, Cédula de Identidad Número 9.121.502-0 durante los años 2015, 2016 y 2017.

E) Pericial: 1.- En el folio 233 corre agregado *Informe Pericial* realizado por don *Gerardo Antonio Chandía Garrido*, Psicólogo de la Universidad Católica del Maule, quien en síntesis, concluye en su informe que, de acuerdo a la evaluación realizada y a la revisión de la bibliografía, el avaluado presenta sintomatología asociada y reactiva a la dificultades originadas en el contexto del término de sus estudios de la carrera de derecho y la imposibilidad de prestar juramento debido a errores de



convalidación presentados por la Universidad Autónoma de Chile, dando cuenta de un daño emocional grave, caracterizado por sintomatología en la línea depresiva, presentando un trastorno de depresión mayor. Asimismo, el daño emocional traspasa a todos los integrantes del grupo familiar actual del evaluado, considerando que las dinámicas relacionadas al interior del sistema familiar cambian al tener unos integrantes un estado depresivo. Por otra parte, observa factores protectores que han permitido que el evaluado enfrente la situación de mejor forma, como son la adecuada autoestima, el apoyo entregado por su entorno cercano, sus características intelectuales y el no contar con historial clínico de vulneraciones. Señala que no se observa ninguna situación en el historial vital del evaluado que pueda explicar la sintomatología presentada en la actualidad. Sugiere que el evaluado inicie un proceso de atención médica y psicológica con urgencia.

2.- En el folio 272 corre *Informe Pericial* realizado por don *Jaime Cristian Aliro Acevedo Silva*, cédula de identidad número 4.413.493-4, Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Licenciado en Ciencias Económicas y perito contable, quien en síntesis, concluye en su informe que, con los antecedentes que se han señalado en su informe el perito puede concluir que el monto total por daño emergente acreditado con documentación que se encuentra en el expediente ascendería a \$6.062.169.- de acuerdo al siguiente detalle: Detalle de Daño emergente reclamado

| | |
|---|------------|
| Monto Matrículas, aranceles anuales. Derecho a rendir examen de grado | 5.079.499 |
| Gastos en remedios de acuerdo a boletas de farmacia | 937.670. |
| Gastos en consultas médicas de acuerdo a boleta de honorarios | 45.000. |
| Total Daño Emergente acreditado | 6.062.169. |

LUCRO CESANTE. El monto total por lucro cesante, de acuerdo a la metodología expuesta por este perito en el desarrollo de la pericia ascendería a 18.728,71 U.F. de acuerdo al siguiente detalle: Detalle de Lucro Cesante

| | |
|---|------------|
| Monto Lucro Cesante desde Mayo 2015 a Agosto 2018 | 1.756,60 |
| Lucro Cesante desde Septiembre 2018 a Mayo 2033 | 16.972,10 |
| Total Lucro Cesante | 18.728,71. |

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la **demandada** por su parte presentó los siguientes medios de prueba: **A) Documental:** 1.- Contrato de prestación de servicios educacionales celebrado el 25 de enero de 2010. 2.- Contrato de prestación de



servicios educacionales de 31 de enero de 2011. 3.- Sentencia dictada con fecha 14 de Abril de 2016, por la Corte de Apelaciones de Talca, recaída en los autos sobre recurso de protección Rol 489-2016/CIV; mediante la cual la I. Corte de Apelaciones le da un claro efecto hacia el futuro al Acta 192 del año 2015 de la Excma. Corte Suprema, mediante la cual se imponen requisitos a los postulantes a obtener el título de abogado; 4.- Sentencia dictada 31 de Agosto de 2016, por la Corte Suprema, recaída en la apelación del recurso de protección antes indicado, Rol de Ingreso Corte Suprema 25.762-2016, mediante la cual el máximo tribunal de la República le da un efecto retroactivo al Acta 192 de 2015.

B) Confesional: Comparece el día 23 de febrero de 2018, don Reinaldo Yañez González a absolver posiciones al tenor del pliego de preguntas que a continuación se expresan. Para que diga el absolvente como es efectivo y le consta que usted sufre de Diabetes Mellitus B desde hace 28 años a la fecha.- Responde, si es efectivo. Son más de 28 en realidad son 30 o 31 años. Para que diga el absolvente como es efectivo y le consta que usted dio dos veces el examen de grado de la carrera de derecho en la Universidad de Concepción, reprobándolo en las dos oportunidades.- Responde, si es efectivo. Para que diga el absolvente como es efectivo y le consta que usted contrato al Estudio Jurídico de Paulo Duarte para que lo representará en este proceso, como también usted fue acompañado por el referido abogado a negociar una indemnización con el Vicerrector de la Universidad Autónoma don Juan Tosso Responde, no es efectivo. A lo que fue es a pedir a don Juan Tosso que intervinieran en el problema en que lo habían metido, pero no a pedir indemnización. Para que diga el absolvente como es efectivo y le consta que sufre de un síndrome depresivo ansioso por cualquier hecho que le afecte, por insignificante que sea. Responde, no es efectivo. Se le gatillo una depresión después de saber que mis sueños de ser abogado no obstante haber cumplido con todo lo que me pidió la universidad nunca se iba a realizar por la convalidación errónea y negligente que realizó los directivos de la universidad, pero no a cualquier circunstancia. Para que diga cómo es efectivo y le consta que usted se atendía profesionalmente, desde hace más de 15 años con el doctor Gonzalo Homero Díaz Pino, quien le diagnosticó que sufría de un Síndrome de Depresión Ansioso- Responde, él lo corroboro pero quien se lo diagnostico fue



el doctor Claver. El Doctor Díaz lo atiende por otras cosas no por eso. Para que diga el absolvente como es efectivo y le consta que, cuando se le validaron los ramos por parte de la Universidad Autónoma de Chile mediante la Resolución N° 16/2010 de fecha 10 de Febrero de 2010, se hizo de acuerdo a las normas vigentes a esa época, Reglamento General del Alumno del año 2006 y las Instrucciones para la tramitación del Expediente sobre Juramento de Abogados de fecha 02 de Abril de 2008 complementado por la Resolución de fecha 09 de Mayo de 2008.- Responde, lo que sabe, según lo que le explico el señor Morrison que por el reglamento general del alumno, lo otro nunca lo mencionaron. Nunca le dieron a conocer otros reglamentos que no fuera el reglamento general del alumno. Además nunca vio el reglamento todo fue de palabra. Para que diga el absolvente como es efectivo y le consta que por resolución de fecha 13 de Noviembre de 2015 le fue rechazada la reposición a solicitud de juramento como abogado por el Excm. Corte Suprema.- Responde, si es efectivo, no recuerda fecha exacta pero si fue en noviembre. Para que diga el absolvente como es efectivo y le consta que durante toda la tramitación de la solicitud de juramento ante la Corte Suprema, contó con la asesoría y cooperación de la Universidad Autónoma de Chile, quien incluso aclaró y complemento la Resolución 16/2010 que convalidaba los ramos, e igual su solicitud fue rechazada.- Responde, lo que si dicto la resolución complementaria pero después de cuatro meses de insistir sistemáticamente cartas de por medio a todos los estamentos de la universidad distintos funcionarios de la universidad que le ayudaran a solucionar este problema, asesoría no, nunca.

DÉCIMO OCTAVO: Que a modo de síntesis, la situación que motivó la acción ejercida por la parte demandante fue el supuesto incumplimiento de las obligaciones de la demandada que naciera de dos contratos de prestación de servicios educacionales suscritos con el actor, es decir, se imputa infracción a la ley del contrato de prestación de servicios educacionales y se reclaman los perjuicios derivados de dicha transgresión contractual, sirviendo de sustento jurídico al libelo los artículos [1545](#) y [1489](#) del [Código Civil](#), entre otros, sin que ello se vea alterado por la cita que en el mismo se formula a disposiciones de la [Ley 19.946](#), las que se entienden en un marco meramente referencial a la responsabilidad que se hacer valer.



Luego, la acción indemnizatoria se fundó concretamente en la responsabilidad contractual que le correspondería a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE, por la falta de cumplimiento de los requisitos para que Licenciatura en Derecho cursada por el demandante, fuese reconocida como calificada para recibir el título de abogado por parte de la Excelentísima Corte Suprema. Los daños reclamados fueron tanto materiales –daño emergente y lucro cesante– como morales.

DÉCIMO NOVENO: Que atento a lo anterior, la demandada acompañó los dos contratos suscritos por su parte y el actor, documentos que constituyen el requisito primordial en la sede que nos encontramos, en cuanto se prueba la existencia de las referidas convenciones; requisito que se da por verificado, independientemente de si los respectivos contratos, se encuentran aún pendiente de ejecución, cumplido parcialmente o extinguido por alguna causa legal.

En este caso, el hecho de que el demandante celebró **contratos de prestación de servicios educacionales** con la demandada fue expresamente además reconocido por esta última en su contestación, al señalar *que celebró dos contratos de prestación de servicios con el actor. Uno el año 2010, y otro el año 2011; los que se cumplieron cuando el actor terminó el respectivo año de estudio” (sic)*; luego niega el incumplimiento y afirma que su representada ha dado estricta observancia a todas y cada una de las obligaciones contraídas en virtud del referido acuerdo.

Por lo tanto corresponde analizar cual o cuales fueron las obligaciones adquiridas por la demandada y cuales en su oportunidad, fueron las del demandante para determinar que este no estuviese en mora.

Que de acuerdo a la documental citada, testimonial y confesional verificada en autos, se puede concluir que el demandante fue alumno regular de la carrera de Derecho impartida por la demandada, de la cual según consta en acta de examen de grado de la carrera, se tituló el 18 de diciembre de 2013, fecha en la cual adquirió la calidad de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (certificado de grado académico así también lo atestigua). De acuerdo a lo expuesto, debe reputarse que a la fecha del examen había aprobado la totalidad de la asignaturas de su plan de formación, como también las especiales que se le impusieron para admitirlo como alumno regular; por ende, se despeja un punto importante de la



discusión con dicha afirmación, en el sentido que dentro de su plan de formación y contrato de prestación de servicios educacionales, se encuentran comprendidas estas circunstancias, así como los respectivos documentos que lo acreditan, la referida convalidación; en lo particular, acta de validación de asignaturas y resolución de Vicerrectoría de Talca N° 16/2010, de fecha 26 de febrero de 2010; la que concuerda con Reglamento General del Alumno de Pregrado de la Universidad Autónoma.

De lo anterior puede inferirse que el contrato se cumplió al obtener el grado académico que se ofreció, y por lo mismo no cabe exigir su cumplimiento forzado a la luz de lo dispuesto del artículo 1489, lo que no obsta a la acción de indemnización de perjuicios de manera autónoma, tal como lo hizo valer el actor de manera subsidiaria en su oportunidad.

Reafirmando la interpretación anterior, es decir, aquella según la que no se requiere que el contrato del que nace la obligación incumplida esté vigente al momento de hacerse valer la responsabilidad contractual, actualmente se sostiene por la Corte Suprema la autonomía de la pretensión indemnizatoria. En efecto, por distintas razones la Corte Suprema ha arribado a la conclusión de que la acción indemnizatoria es independiente de la acción de cumplimiento forzado del contrato o de resolución del mismo (fallo de fecha 31 de octubre de 2012, rol 3325-2012 y fallo de fecha 28 de enero de 2013, rol 5898-2012). De esa manera, abandonando la interpretación tradicional del artículo 1489 del Código Civil, se ha aceptado que la víctima de un daño producido con ocasión de un incumplimiento contractual demande únicamente la indemnización de dichos perjuicios sin necesidad de pedir, además, la resolución del contrato o el cumplimiento forzado de las obligaciones emanadas de él.

Así también doctrina reciente lo corrobora, en el siguiente sentido: En el Código Civil no existe una definición general de incumplimiento, ella se induce *a contrario sensu* de las normas sobre la fuerza obligatoria del contrato (art. 1545 *Código Civil*) y del medio de extinción de las obligaciones el pago (art. 1567 y concordantes). Desde el ángulo del pago de las obligaciones el esquema cambia si la prestación de lo debido (art. 1567) se lee como la realización de lo suficiente, según la regla contractual, para la satisfacción del interés del acreedor. De este



modo, la *solutio* del deudor (efecto liberatorio del pago) queda condicionada a la *satisfactio* del acreedor. Si el deudor no hace lo suficiente no hay *solutio* y ello justificaría el tránsito desde efectos normales de las obligaciones a los efectos anormales, cuyo presupuesto básico es el incumplimiento en cualquiera de sus manifestaciones. El incumplimiento en su sentido más amplio se confunde con la no realización de la prestación o, en otros términos, con cualquiera desviación del programa o plan ideal de prestación inicialmente acordado por las partes. Puede ocurrir que el deudor haya desplegado alguna actividad, sin embargo, como ella no es conforme al plan, no lo libera frente a su acreedor y sigue vinculado para con él. Ese pago imperfecto no extingue la obligación y sujeta al deudor incumplidor a responsabilidad en un sentido amplio, o si se quiere, al ejercicio de los remedios de que dispone el acreedor por el incumplimiento. -Vidal Olivares, Álvaro R. (2007). Cumplimiento e Incumplimiento Contractual en el Código Civil: Una perspectiva más realista. Revista chilena de derecho, 34(1) ,41-59. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372007000100004>-.

En este caso, como ya se dijo, en lo principal se ejerció la acción de cumplimiento de contrato junto con la acción indemnizatoria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1489 del Código Civil. No obstante existe claridad respecto de que los contratos que unieron a las partes y a propósito de los cuales se generó el eventual daño, habían terminado precisamente porque el actor obtuvo el grado de licenciado, que es a lo que puede optar al cursar la carrera de Derecho, pues como es sabido la Universidad respectiva otorga el grado y la Corte Suprema, luego de cumplimiento de ciertos requisitos, concede el título profesional de abogado.

Además debe considerarse que puede ocurrir que el interés del acreedor de demandar la indemnización de perjuicios no sólo encuentre justificación en el hecho que estima que ella satisface de mejor manera su interés contractual sino, también, en el hecho de que no sea procedente el cumplimiento forzado del contrato, ni la resolución, y el acreedor no tenga otra alternativa que demandar la indemnización de perjuicios; lo que ocurre en este caso conforme lo explicado. -López Díaz, Patricia Verónica. (2010). LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS BILATERALES COMO REMEDIO AUTÓNOMO EN EL DERECHO CIVIL CHILENO. Revista chilena de derecho privado, (15), 65-113. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722010000200003>-



VIGÉSIMO: Que luego de despejadas las aristas anteriores, se entrará al análisis directo de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, como un remedio autónomo frente al incumplimiento.

Que resulta claro y evidente que la demandada infringió el artículo 51 (antes 49) del Reglamento General del Alumno de la Universidad, que dispone en su inciso primero: ***“Solo se homologarán o convalidarán las asignaturas aprobadas dentro de los diez años anteriores a la fecha de solicitud de homologación. Este plazo no regirá respecto de los alumnos que acrediten experiencia laboral significativa en el área”***. Ahora bien se entiende por Convalidación de Estudios (artículos 54 y 55) la aceptación de equivalencia entre los contenidos temáticos entre una o más asignaturas cursadas y aprobadas en otra institución de educación superior nacional o extranjera reconocida oficialmente, y los de una asignatura contemplada en el Plan de Estudios de alguna carrera de esta Universidad. Se podrá convalidar hasta un máximo del 60% de las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios. Además podrá realizarse validación de estudios mediante el mecanismo de Examen de Conocimientos Relevantes. (Artículo 57), el que también el demandante rindió y aprobó según la documental citada. Por su parte los alumnos que soliciten convalidación de asignaturas deberán: Acompañar un Certificado de Concentración de Notas extendido por la unidad académica de origen, con indicación de la escala de notas utilizada y la nota mínima de aprobación; adjuntar una copia del Plan de Estudio o malla curricular de la carrera de origen; adjuntar una copia del Programa de Estudio de cada una de las asignaturas que solicita convalidar, visado por la autoridad correspondiente, con indicación del año o semestre en que fue cursado; acreditar que no ha sido eliminado de la institución de origen (desde donde convalida las asignaturas) por causales académicas o disciplinarias; según lo informa la demandada en su sitio web al tratar de las homologaciones, y luego en las normas en comento del referido Reglamento.

Que resulta patente dicho incumplimiento, al dictarse por la demandada la resolución de rectoría N° 04/2016, en la que se resuelve complementar resolución N° 16/2010, dejando constancia en ella de lo siguiente: ***“Que la convalidación de las asignaturas se realizó conforme la excepción contenida en el artículo***



51 del Reglamento del Alumno , esto es, por haber acreditado el solicitante (actor) “experiencia laboral significativa en el área” ; y luego señala las asignaturas que se le convalidan, resolución que acompañó el actor frente a un primer rechazo a su titulación, al expediente de juramento ante la Excelentísima Corte Suprema, haciendo valer una reposición con nuevos antecedentes, puesto que ya había perdido un recurso al no acoger el referido Tribunal, su licenciatura; precisamente porque en la resolución originaria, la número 16/2010, la demandada, **no dejó constancia de haber aplicado la situación de excepción contemplada en el mencionado artículo** (tal como lo reconoce la propia demandada en Resolución de Rectoría N° 04/2016, que complementa la referida, **en su letra e**), respecto de la experiencia laboral significativa en el área).

Que finalmente a pesar de los recursos ejercidos por el actor, no se lograron desvirtuar las resoluciones de fojas 125 y 221 que rechazan los requerimientos deducidos; y en definitiva deja firme en su considerando tercero la resolución de fojas 125 del expediente de titulación, en el sentido que la convalidación de estudios autorizada por la Universidad Autónoma, mediante resolución de la Dirección académica N° 16/2010 de 26 de febrero de 2010, comprende asignaturas aprobadas por el postulante en la Universidad de Concepción entre los años 1987 y 1995; materias que se encuentran fuera del plazo de 10 años permitido en el citado artículo del reglamento. Considerando que el inicio del cómputo de dicho lapso corresponde a la época de aprobación de la asignatura a validar; sin que aparezca en la resolución de convalidación, que la institución universitaria hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final de la aludida norma -experiencia laboral significativa en el área-; rechazándose en consecuencia su solicitud de juramento.

VIGESIMO PRIMERO: Que como puede apreciarse la Resolución de Rectoría N° 04/2016, que complementa la N° 16/2010, fue una respuesta a la insistencia del demandante para obtener su título profesional, y a pesar que la demandada trato de enmendar su falta, dicha resolución no fue apta o idónea para el fin que se esperaba, que no era otro que recibir el título de abogado; sin que conste que el alumno YAÑEZ haya tenido participación ni responsabilidad alguna en tales hechos, pues en su oportunidad acompañó todos los antecedentes para ser aceptado



por vía especial y luego rindió examen de conocimientos relevantes, prueba que le fue certificada positivamente.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que así las cosas, cabe preguntarse en primer lugar, si este contrato genera la obligación de lograr la titulación para desempeñarse en un ámbito de trabajo previamente determinado; que fue el fin que el actor tuvo para cursar la licenciatura.

Pues bien, dado que se trata de un contrato atípico o innominado, no se puede recurrir para ello al texto de ninguna ley especial ni al Código Civil, debiendo primar lo estipulado expresamente por las partes. De acuerdo con las copias de los contratos, no existe mención clara al respecto en la cláusula primera, *“la Universidad acepta e inscribe como alumno regular al demandante en la carrera de Derecho”* ; y segunda, el *“demandado se obliga mantener cupo asignado al alumno regular en los servicios docentes de los años 2010 y 2011”* Finalmente, en la cláusula octava *“el apoderado y el alumno declaran conocer y aceptar las disposiciones legales vigentes que regulan el funcionamiento de la Universidades chilenas, las normas internas y convalidaciones y Reglamentos de Alumno y sus modificaciones; documentos que forman parte del contrato* (otro argumento para estimar que el Reglamento es parte integrante del contrato).

Así la calificación jurídica del contrato, debería llevar a analizar las reglas del contrato típico o nominado que más se le parezca, en este caso, el arrendamiento de servicios inmateriales de los artículos 2006 y siguientes del Código Civil. En dicha normativa, tampoco existe algún criterio que pudiese aplicarse al punto que se analiza. Queda finalmente recurrir a los principios generales del Derecho para dilucidar este tema, resultando aplicable el de la buena fe contractual del artículo 1546 del Código Civil; al prescribir dicha norma que *“los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”* , regla legal que está imponiendo a las partes de un contrato *“un deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de los tratos preliminares y hasta el momento incluso posterior a la terminación del contrato”* (fallo Corte Suprema de 10 de octubre de 2010, rol 2236-2009). Esta noción de buena fe



objetiva consiste la creencia y confianza que tiene un sujeto en que una declaración surtirá en un caso concreto los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos iguales. Es decir, son las reglas objetivas de la honradez en el comercio o en el tráfico, que llevan a creer en la palabra empeñada y en que el acto sea concertado lealmente, obrando con rectitud” (citado en fallo de la Corte Suprema de 16 de enero de 2013 , rol 6465-2012). Esta buena fe actúa como un *“parámetro flexible cuyo manejo y concreción, en cada caso, queda entregado al criterio, prudencia y sabiduría del juez de la causa”* . Corresponde, por consiguiente, a este Tribunal determinar si hubo o no vulneración de la buena fe, en los contratos en cuestión.

De acuerdo con la tarea y fines de la institución demandada, con la naturaleza del contrato suscrito entre ella y el actor, y con los términos en que la Universidad realizó una oferta a los que desearan matricularse en la carrera en cuestión, cuyo tenor es el siguiente: **DERECHO. Carrera Acreditada por 5 años**, en sede Santiago, Talca y Temuco, modalidad presencial, jornada diurna y vespertina, desde diciembre 2016 hasta diciembre 2021 por la agencia acreditadora ADC. **Título:** Abogado (Título otorgado por la Excma. Corte Suprema) **Grado Académico:** Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. **Duración:** 10 semestres. **Sedes:** Santiago, Talca y Temuco; (publicidad extraída desde página web de la Universidad) puede concluirse que aunque contiene un resultado no expresado explícitamente como carga de la demandada, pesaba sobre aquella la obligación contractual de prestar sus servicios educacionales en un ámbito que en la práctica condujera al actor a obtener el título de abogado, pudiendo el demandante confiar razonablemente en que ello así sería, más aún si su plan de homologación fue aprobado por la citada casa de estudios, sin reparo alguno.

Y es justamente dicha oferta y por supuesto la entrega de una actividad educacional universitaria legalmente pactada, fueron los antecedentes fundamentales para que el demandante haya confiado en que en su caso concreto el contrato que suscribía surtiría “los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos iguales” , estos es, que aprobado su grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas; luego la Corte Suprema le otorgaría el título profesional respectivo.



En relación con la naturaleza del contrato suscrito entre las partes (dos contratos), se trata de un contrato de prestación de servicios educacionales. Mientras la obligación principal del prestador es una obligación de hacer, respecto del estudiante coexiste una obligación de dar, consistente en pagar periódicamente un precio por el servicio, y de hacer, esto es, realizar las conductas propias del educando. Por otro lado no se debe olvidar, que si bien el contrato firmado entre las partes, tal como ya se señaló, no contempla una obligación expresa relativa a la obtención del título profesional, sino que solo conduce al grado de Licenciado, se presume conocido que el postulante debe cumplir con el resto del requisitos del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, previa revisión del Máximo Tribunal, para obtener su título profesional de abogado.

Ahora bien, de acuerdo con la naturaleza de éste contrato, puede entenderse como hecho implícito que el alumno apruebe sus ramos, se le califique y reconozca como mejor alumno de su generación y haya satisfecho exitosamente la obligación de práctica profesional gratuita, son elementos que llevan inequívocamente a pensar que dicho título le sería otorgado; y si no lo fue, es porque precisamente faltó el cumplimiento de manera íntegra de su Licenciatura, que es responsabilidad propia de la Universidad en cuestión. Por último, es de público conocimiento que al cursar la carrera de Derecho, en cualquier universidad del país, la entidad universitaria no otorga el título profesional de abogado, potestad exclusiva de la Corte Suprema, conforme el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, previa comprobación de los requisitos de los artículos 523 y 526 del mismo texto legal; no obstante dicha situación no es óbice para estimar que la obligación de otorgar la Licenciatura que es de competencia de la Universidad, fue imperfectamente cumplida que es precisamente la carga que se le imputa; carga u obligación que la demandada no acreditó con los documentos y resoluciones emitidas de convalidación, argumento que es al que hace referencia la Corte al rechazar el último recurso interpuesto por el actor.

VIGÉSIMO TERCERO: Que habiéndose verificado en los considerandos anteriores que existió un incumplimiento contractual de parte de la demandada en el sentido de que no dio cumplimiento a lo pactado, que corresponde según el artículo 1546 del Código Civil *“a la naturaleza de la obligación”* y que en este caso, se



manifiesta en los aspectos ya analizados, corresponde entonces verificar los otros presupuestos de la responsabilidad contractual, esto es, el daño y su relación de causalidad con el incumplimiento.

VIGESIMO CUARTO: Que en relación con el daño, estando acreditado en autos los hechos que hacen responsable a la demandada (relatados en considerandos anteriores) y la situación que ha debido enfrentar el actor que en definitiva estudió para ser abogado y ahora no lo será; resulta probado que sufrió un menoscabo tanto patrimonial como extrapatrimonial. En efecto, pagó matrícula y aranceles con miras a un determinado fin implícito en el contrato celebrado, y una vez titulado, su plan original se vio frustrado y debió hacer frente al fracaso de su proyecto profesional, personal y familiar; además de sufrir una angustia que fue demostrada clínicamente.

VIGÉSIMO QUINTO: Que en relación con los daños materiales, deberán acreditarse los montos desembolsados por el demandante con ocasión del contrato de prestación de servicios educacionales y los costos que aquello significó. Ellos constituyen el daño emergente del caso.

En efecto, conforme documento denominado cuenta corriente emanado de la contraria, unido a informe pericial contable, se tiene por demostrado que el actor gastó en aranceles y derechos para rendir su examen de grado la suma de **\$5.079.499**. Asimismo solicitó en este rubro el pago de los gastos en medicamentos en que ha debido incurrir a propósito del estado psicológico calificado como daño emocional grave por el perito psicólogo clínico, don Gerardo Chandía, y los recetados por los médicos que lo han tratado en este periodo, los que según la referida pericia contable, se tendrán por ciertos y equivalentes a **\$937.670**, más valor de consulta médica por un monto de **\$45.000**.

Que los demás gastos solicitados a título de daño efectivamente causado, no fueron acreditados y lo mismo no se establecerán como adeudados.

En cuanto al lucro cesante, el demandante lo identifica con la remuneración que habría recibido desde el año 2010 al 2013, años durante los cuales cursó la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Chile, y se vio privado de trabajar, que ascienden a \$650.000 por cada uno de los 48 meses, arrojando un total de \$31.200.000 (treinta y un millones doscientos mil pesos). Y también, por la



diferencia en las remuneraciones que podría percibir en 19 años de ejercicio profesional como abogado, contados desde el año 2014, época en que se habría titulado, hasta el momento en que cumpliría la edad de 65 años; considerando la diferencia entre un sueldo promedio de \$3.000.000 y la remuneración que efectivamente percibía como procurador de asuntos jurídicos de \$650.000.

Pues bien, el daño para ser indemnizado debe ser cierto y no eventual, pero esta certeza en el lucro cesante es relativa. Con todo, el lucro cesante debe ser probado, siendo necesaria la demostración de la labor productiva con anterioridad al daño, su quebrantamiento a raíz de él y la pérdida de los ingresos que de ello se derivan. En este sentido la prueba producida en este proceso, apreciada en forma legal, carece de eficacia jurídica para acreditar la existencia y el monto del daño en cuestión. Primero porque se demandan daños mientras cursaba la carrera y el estado normal de las cosas, indica que durante la carrera un estudiante se dedica a eso y no a trabajar; y segundo, porque los documentos acompañados, consistentes en contrato de trabajo de 2015 y liquidaciones de remuneraciones, dan cuenta de una fuente laboral que se generó después del año 2013, o sea después de cursar la carrera, de lo que puede concluirse que desde noviembre de 2015 hasta que fue despedido, hecho ocurrido el 08 de octubre de 2017, según finiquito incorporado por su parte, percibió como procurador una remuneración variable ya que dependía de los días trabajados y que el máximo obtenido en el referido periodo fue entre \$630.000 y \$650.000 aproximadamente en algunos meses. En este sentido la testimonial no es útil toda vez que se refiere en forma hipotética a la remuneración que percibiría un abogado de la plaza.

Que en relación al segundo aspecto pedido como lucro cesante, que consistiría en lo que dejó de percibir por no tener la profesión, estimado hasta los 65 años de edad; cabe recordar en este punto al profesor don Daniel Peñailillo, cuando señala que *“el lucro cesante es ganancia esperada, entonces, por definición, carece de certeza absoluta*. Para los efectos de aproximarse al examen de la certeza conviene también observar su supuesta futuridad. Es frecuente que el lucro cesante sea asociado a un daño futuro; y así son muchas las situaciones en las que es perseguida la indemnización de un lucro cesante que al día de la demanda es futuro. *Y, como es sabido, lo futuro nunca es plenamente cierto (salvo la muerte,*



al menos hasta ahora). -PEÑAILILLO-ARÉVALO, DANIEL. (2018). SOBRE EL LUCRO CESANTE. *Revista de derecho (Concepción)*, 86(243), 7-35. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-591X2018000100007>-

Que conforme lo razonado no será entonces considerado el informe pericial contable elaborado para este rubro específico, por lo hipotético de los dos parámetros utilizados, esto es la remuneración que obtiene un abogado por una parte, y por la otra que éste hubiese trabajado como tal hasta los 65 años de edad. En conclusión no habiendo probado suficientemente el actor, la existencia y monto del daño, prueba que era de su cargo, la demanda de indemnización por lucro cesante no puede prosperar.

VIGÉSIMO SEXTO: Que en relación al daño moral y los daños psicológicos, el peritaje acompañado en autos y otros documentos como diversas órdenes medicas de distintos profesionales, dan clara muestra de que tal sufrimiento existió y, peor aún, subsiste; el que fue catalogado como un daño emocional grave, caracterizado por sintomatología en línea depresiva, presentando un trastorno de depresión mayor. (pericial)

Además de aquello justificado por la pericial citada, el incumplimiento contractual del cual fue víctima el actor por parte de la institución educacional demandada, obviamente le causó un daño moral, pues es un hecho cierto, y que todos experimentamos alguna vez, que al ingresar a estudiar a una universidad, instituto profesional o cualquier institución de enseñanza superior, como las que hoy existen en gran número en nuestro país, sin importar la edad, se hace con la esperanza de lograr un título profesional que le permita desarrollarse como ser humano, tener un trabajo digno y estable, lograr formar una familia y proyectarse al final hacia el futuro. El incumplimiento contractual referido, truncó aquella esperanza de un mejor futuro y significó dolor, angustia, pesar, amargura y molestias síquicas y ese mal moral que sufrieron debe ser reparado; más aún cuando es un hecho público y notorio que el grado de Licenciado en esta carrera, en la práctica y para efectos técnicos, no sirve para ejercer la profesión de abogado.

Que en este ámbito, ese daño moral debe ser reparado porque en la especie se está en presencia de una clase especial de contratos, que ponen a una de las partes en posición de garante de un interés moral o extrapatrimonial de la otra. Es en estos



casos, y sólo en ellos, en donde la regla negativa respecto de la concesión de indemnizaciones por daño moral en sede contractual puede y debe romperse para no generar una inequidad manifiesta. Resulta evidente para este Tribunal que en un contrato de prestación de servicios educacionales el prestador asume una responsabilidad sobre las expectativas existenciales de cada uno de sus educandos (más aún si el alumno se destaca por su excelencia académica como en esta situación) de una manera que se extiende mucho más allá del ámbito meramente patrimonial.

Que dicho daño, será avaluado prudencialmente en la suma de **\$95.000.000.-**

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Verificado el incumplimiento de una obligación contractual y el daño que generó, resta por analizar la necesaria relación de causalidad que debe existir entre ambos y el factor de imputación de la responsabilidad. Aplicando el método de la supresión mental hipotética destinada a establecer qué hechos son causa de cuáles efectos, sólo es posible concluir que de no haber existido el incumplimiento contractual de parte de la demandada no se habría producido el daño, material e inmaterial, sufrido por el actor. En cuanto al factor de imputación, es decir, al dolo o culpa necesarios alternativamente para generar la exigencia de responsabilidad en el demandado, resulta plenamente aplicable la presunción de culpabilidad del artículo 1547 inciso 3° del Código Civil. En efecto, no habiendo la demandada probado que cumplió de manera íntegra, exacta y oportuna las obligaciones emanadas del contrato de prestación de servicios educacionales, ni habiendo alegado la concurrencia de una causal eximente de responsabilidad que haya probado como fue en este proceso la fuerza mayor o caso fortuito, el incumplimiento debe reputarse culpable y por tanto, se estima cumplido el requisito de imputabilidad.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que consistiendo en este caso el incumplimiento contractual en un incumplimiento imperfecto, no es necesario que se verifique el requisito de la mora por parte del demandado.

VIGÉSIMO NOVENO: Que el resto de la prueba no analizada de manera pormenorizada, no altera las conclusiones establecidas anteriormente.

En mérito de lo considerado, disposiciones legales citadas, y visto además lo dispuesto en los artículos 1437, 1489, 1545, 1546, 1547, 1556, 1567, 1698, 1701,



1712, 1713 y 2320 del Código Civil; y artículos 144, 170, 341, 358 numerales 4, 5, 6 y 7; 384, 399, 425 y 426 del Código de Procedimiento Civil; se resuelve:

EN CUANTO A LAS TACHAS:

I.- Que se **rechaza** la tacha deducida por la demandada en contra del testigo Carlos Ortega Allul, en audiencia de folio 80.

II Que se **acogen** las tachas deducidas por la demandante en contra todos los testigos de la demandada, según lo decretado en audiencias de folio 129, 130 y 131; declarándose su inhabilidad.

EN CUANTO AL FONDO:

III.- Que se **rechaza la acción principal**, conforme los fundamentos expresados en el considerando décimo noveno de esta sentencia; y se **acoge petición subsidiaria** en cuanto declara el incumplimiento contractual de la demandada y por lo mismo ésta deberá indemnizar al actor solo los siguientes perjuicios; rechazándose en lo demás:

a) Daño emergente; por un total de **\$6.062.169.-**

b) Daño Moral; por un total de **\$95.000.000.-**

IV.- Que en lo demás pedido se rechaza.

V.- Que, la suma reclamada y que deberá pagar la demandada, deberá serlo con los reajustes que se devenguen desde el día 13 de noviembre de 2015 (resolución Excma. Corte Suprema) y hasta el pago efectivo de la deuda. En cuanto a los intereses, éstos se deberán desde la fecha de la notificación de la demanda, hasta su entero y cumplido pago, por no haberse constituido en mora de pagar dicha suma el deudor sino hasta dicha fecha; intereses que serán los corrientes y para operaciones no reajustables, todo ello hasta el pago efectivo de la deuda.

VI.- Que no habiendo sido totalmente vencida la parte demandada; se le exime del pago de las costas.

Regístrese y Notifíquese.

Rol N° C-1648-2017.

Dictada por la señora **ANDREA DEL PILAR SUAZO QUIROZ**, Jueza Suplente del Cuarto Juzgado de letras de Talca.



Talca, siete de febrero de dos mil diecinueve, notifique por el estado diario la resolución que antecede.

